

Marco Andrade Echeverría

DE LA SERPIENTE TECNOLÓGICA A LA MARIPOSA DE LAS SECUOYAS

El proyecto OCP y la ecología
política de un conflicto



Quito, 2010

De la serpiente tecnológica a la mariposa a la mariposa de las Secuoyas
El proyecto OCP y la ecología política de un conflicto
Marco Andrade Echeverría

1era. edición: Ediciones Abya-Yala
Av. 12 de Octubre 14-30 y Wilson
Casilla: 17-12-719
Teléfonos: 2506-247 / 2506-251
Fax: (593-2) 2506-255 / 2 506-267
e-mail: editorial@abyayala.org
www.abayayala.org
Quito-Ecuador

FLACSO, Sede Ecuador
La Pradera E7-174 y Diego de Almagro
Quito - Ecuador
Telf.: (593-2) 2328888
Fax: (593-2) 3237960
www.flacso.org.ec

Diseño y
Diagramación: Ediciones Abya-Yala

ISBN FLACSO: 978-9978-67-228-0

ISBN Abya-Yala: 978-9978-22-875-3

Impresión: Abya-Yala
Quito-Ecuador

Impreso en Quito Ecuador, enero 2010

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – sede Ecuador
Programa de Estudios Socioambientales Convocatoria 2006-2008
Tesis previa la obtención de maestría en ciencias sociales con
mención en Estudios Socioambientales;
Autor: Marco Andrade Echeverría
Tutor: Guillaume Fontaine

Con amor a Susana, Marcos, Emilio y familia toda.

A la memoria de mi padre

AGRADECIMIENTOS

Mi agradecimiento especial al Doctor Guillaume Fontaine por sus valiosos aportes y el constante apoyo recibido.

De igual manera a todas las personas que me brindaron su, apertura, confianza y tiempo.

ÍNDICE

Prólogo.....	11
Síntesis	13
Introducción	15

I

De la ecología política a la sociología de los conflictos: ¿un puente interpretativo?.....	23
---	----

Entre Eco y el abordaje teórico de la ecología política y sociología de conflictos: una lectura metodológica de la aproximación al problema.....	23
--	----

Los referentes próximos de análisis socio ambiental desde la ecología política en la cuenca amazónica	26
--	----

La ecología política y la emergencia de un nuevo enfoque del problema socio ambiental: un acercamiento desde varias perspectivas teóricas.....	33
--	----

El abanico de la ecología política desde varios puntos de vista	41
--	----

De la ecología política hacia la sociología de conflictos: atravesando el puente	54
---	----

II

El proyecto OCP en la antesala de cambios en la dimensión petrolera del país	67
---	-----------

III

De Mindo al Reventador, el contexto y el escenario retrospectivo del conflicto	89
---	-----------

Entre Mindo y El Reventador: el medio y su historia.	90
---	----

Mindo y El Reventador el contexto comparativo visto desde indicadores socioeconómicos	97
--	----

La construcción del OCP y la irrupción en dos escenarios distintos noroccidente y nororiente.	101
---	-----

El ensamblaje de la “serpiente” tecnológica: la reseña del conflicto	101
---	-----

El aporte de la sociología del conflicto: el contexto retrospectivo y la narrativa del conflicto	104
---	-----

IV

El estudio comparativo de caso y su relación con las dos perspectivas de análisis	117
--	------------

El conflicto y sus repercusiones en Mindo: “oleoducto sí, por Mindo no”	118
--	-----

El conflicto y sus repercusiones en El Reventador: “Por cada metro de tubería, un metro de vía...”	132
---	-----

El análisis desde la sociología del conflicto y las lógicas de acción subyacentes.	141
--	-----

El caso y la reflexión socio ambiental desde la ecología política.	147
--	-----

V

Conclusiones	155
---------------------------	------------

Bibliografía	163
---------------------------	------------

PRÓLOGO

El libro de Marco Andrade trata del conflicto generado por la construcción del Oleoducto de Crudo Pesado (OCP), en el período 2000-2003. El texto está estructurado en cuatro capítulos que abordan los aspectos esenciales de la sociología de los conflictos ambientales y de la ecología política del conflicto. Tras elaborar un marco teórico y conceptual que sintetiza los principales aportes de estas disciplinas, el autor presenta el contexto político del conflicto por el OCP, con un especial énfasis en la política petrolera del Ecuador. Luego presenta los acontecimientos del conflicto en dos lugares particularmente sensibles –Mindo y el Reventador– que son interpretados a la luz del marco teórico elaborado para el efecto.

El principal aporte de este trabajo es que pretende sustentar un análisis de conflicto a partir de dos enfoques teóricos de difícil articulación y así validar la teoría desde un material empírico muy completo y novedoso. El autor considera los límites heurísticos de la ecología política y propone superarlos gracias a los aportes de la sociología de la acción. Para eso, él realiza un buen estado de la literatura producida en los últimos 20 años sobre conflictos ambientales en la Amazonía ecuatoriana y demuestra contar con un buen conocimiento de los textos fundamentales de antropología cultural.

La segunda gran calidad de la tesis radica en la metodología utilizada. Al respecto, Marco Andrade usa de manera muy perspicaz su experiencia de campo y su formación de antropólogo. La revisión de fuen-

tes secundarias (sobre los conflictos, la política petrolera, los actores sociales, etc.) está complementada de manera oportuna con una serie de entrevistas a profundidad, realizadas en ambos sitios del estudio.

El análisis de los discursos apoya esta lectura de los acontecimientos y se articula de manera fluida con el recuento de los acontecimientos, a partir de una cronología detallada del conflicto que consta en los anexos de la tesis. Las interacciones entre los distintos sectores del gobierno, de la sociedad civil, del medio empresarial (en particular financiero y petrolero) están adecuadamente analizadas a través de una matriz de las dimensiones sociológicas del conflicto.

Por otro lado, el enfoque comparativo adoptado por el autor permite arrojar conclusiones sólidas, respecto a las lógicas de acción de los actores involucrados en el conflicto. Se observa, en particular, que la visión del mundo y el concepto del desarrollo que caracteriza a los actores de Mindo se basan en una relación privilegiada con el medio ambiente, visión que se opone a la desarrollista que impera en el sector petrolero. En contraste con este caso, el autor muestra que la historia de la población de El Reventador está estrechamente vinculada con la expansión de las actividades petroleras hacia la región amazónica, lo cual orienta las reivindicaciones de los actores hacia la consecución de obras de desarrollo en una negociación con las empresas.

Finalmente, el autor hace una muy detallada caracterización de las relaciones sociales entre los actores locales y las redes de ONG ecologistas, por un lado, y el gobierno y los actores económicos por el otro.

Sin lugar a duda, el trabajo de Marco Andrade constituye un aporte a la sociología de los conflictos ambientales vinculados con el petróleo en la región andino-amazónica. En un ámbito donde la literatura académica suele confundirse con aquella de las organizaciones no-gubernamentales o de los actores económicos y estatales, su objetividad y la pertinencia de sus análisis constituyen una clara muestra de que es posible superar la trampa de la descripción normativa, para ganar en profundidad analítica. Un ejercicio saludable tanto para la comunidad académica como para los actores de los mismos conflictos.

Guillaume Fontaine
(FLACSO-Sede Ecuador)

SÍNTESIS

De la serpiente tecnológica a la mariposa de las secuoyas: el proyecto OCP y la ecología política de un conflicto, es una suerte de metáfora desde la que se plantea analizar en base a la perspectiva de la ecología política con el apoyo analítico y metodológico de la sociología del conflicto, la relación muchas veces antagónica entre sociedad - ambiente, entre la visión politizada del desarrollo y la conservación. Esto plantea el tránsito a través de un puente que es la vía de enlace entre dos perspectivas lo cual, se demuestra desde la tesis, es posible ya que esos campos de análisis y reflexión se complementan porque la problemática socio ambiental y sus complejidades demandan el uso de varias disciplinas, perspectivas teóricas, campos de análisis y metodologías; por definición el campo de la ecología política posibilita abordar la problemática con “distintas tradiciones y líneas de investigación política y ecológica”.

El peso conceptual de la propuesta se enmarca en la ecología política en la medida que requiere una revisión detenida ya que está en construcción, pero también por el énfasis de la tesis en el que se plantea, a partir del estudio de los conflictos socio ambientales generados a raíz de la construcción del nuevo oleoducto, el análisis de la visión contrastada entre desarrollo y conservación.

En esta medida se revisa los elementos configurativos de esta perspectiva y sus umbrales; esto permite la aproximación a elementos definitorios, y uno de los más claros es el discernimiento de los límites del desarrollo y su intrínseca relación con el mantenimiento del soporte de

vida, la emergencia de una visión crítica del desarrollo y el surgimiento de formas alternativas de mirar la naturaleza, sus significaciones, formas de apropiación y límites; en este sentido la ecología política es un “campo de reflexión y análisis”, pero también de respuestas sociales generalmente expresadas en conflictos.

Estas respuestas complejas albergan un amplio abanico de intereses los cuales se “mueven” dentro de contextos específicos que inciden en la formación de lógicas de acción diversas. El estudio comparativo de Mindo y El Reventador ilustran precisamente esa diversidad de respuestas, la divergencia de las mismas y los límites a los que se ve abocado determinados enfoques de la ecología política.

La tesis hace un recorrido del contexto petrolero antes de la construcción del oleoducto y demuestra la existencia de una línea de continuidad contenida en la intención e interés, sistemático, de ampliar la frontera extractiva del petróleo. El nuevo oleoducto, en este sentido, es “algo más” que una infraestructura de transporte de crudo, es un engranaje creado explícitamente para dejar abierta esa posibilidad. Esto se conecta estrechamente con la problemática de la frontera extractiva del petróleo en espacios que son críticos y sensibles por sus características socio ambientales como es el campo Ishpingo - Tambococha - Tiputini en el área del Parque Nacional Yasuní.

El contexto de Mindo y El Reventador, y los conflictos emergidos de la construcción del ducto, demuestran que las respuestas frente a un mismo problema no son univocas y que por el contrario responde a distintas lógicas e intereses que están unidos a antecedentes y contextos específicos que desembocan en posturas divergentes. La tesis recorre, con un fuerte acento en la etnografía y en el análisis comparativo, esos trasfondos, las respuestas y perspectivas analizadas a la luz de la ecología política.

El aporte de la sociología del conflicto desde la revisión retrospectiva del evento permite identificar los elementos de caracterización de la problemática estudiada en la tesis, las interrelaciones y las lógicas de acción subyacentes donde se evidencian la complejidad del vínculo sociedad - ambiente, y los límites implícitos en las perspectivas de desarrollo, pero también en el enfoque más sustentable como la opción de Mindo.

Palabras claves: ecología política, sociología de conflictos, conflictos, oleoducto, visión de desarrollo, visión de la naturaleza, Mindo, El Reventador.

INTRODUCCIÓN

Una de las ideas centrales de esta tesis es la de entender el uso de dos perspectivas la ecología política y sociología de conflictos en el análisis de una secuencia de conflictos generados a partir de la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) en un período de dos años y medio que fue el tiempo que tardó la instalación e inicio de la operación de dicha infraestructura. Por una parte, el uso de la ecología política en tanto campo en construcción, requirió la revisión de los elementos que configuran sus límites y ‘los bordes en los que se detiene’ este tipo de análisis, que en suma plantea una cuestión central: la relación ambiente/sociedad y la reflexión crítica sobre la significación e implicaciones del desarrollo.

Para este efecto en la primera parte de la tesis se aborda la producción realizada desde la ecología política desde los antecedentes de los estudios realizados en la Cuenca Amazónica, pasando por un estudio realizado en el área protegida del Cuyabeno que en la década de los noventa fue la primera investigación explícita de ecología política en el país. Luego se estableció el análisis de los estudios y propuestas teóricas realizadas por autores centrales que aportan al entendimiento de dicho campo y cuyo hilo conductor parte de dos aspectos: la relación de la economía política en el entendimiento de los conflictos de distribución económica y las visiones contrastadas de la relación ambiente/sociedad y el elemento recurrente de la crítica al modelo de desarrollo seguido en el mundo contemporáneo, lo cual toma fuerza en la medida que ve-

mos profundizarse los problemas ambientales con su impacto a diferentes niveles son considerados fundacionales en la medida que transmiten los elementos en los cuales se sustenta esta perspectiva. Las últimas investigaciones sobre la ecología política permiten delinear el campo de definición y aproximarnos a las formulaciones, elementos y conceptos que sirven al propósito del análisis de la tesis.

A pesar de tener un marco conceptual o “paraguas”, tal como lo expresa Bebbington, dotado por el enfoque de ecología política, el planteamiento de la tesis requirió, a la par, una aproximación complementaria a partir de la unidad de análisis que es el conflicto, y por esta razón se optó por tomar los elementos centrales de la sociología de conflictos para entender la estructura de este hecho social, sus actores y las lógicas de acción subyacentes que son elementos indispensables para adentrarse en un análisis contextual del tema planteado. Uno de los aportes importantes de este campo sociológico es la revisión diacrónica del conflicto, en este sentido la compilación, sistematización y análisis de los datos obtenidos permitió entender de mejor manera el desarrollo del mismo. A un nivel teórico, la sociología del conflicto remitió a sus fuentes en la sociología de la acción, y esta línea teórica, igualmente, nutre el análisis de la relación sociedad/ambiente cuando se plantea el hecho de las transformaciones sociales -cambios- a partir de los conflictos, transformaciones que tienen diferentes escalas, representaciones y repercusiones a diferentes horizontes. De igual manera, toda movilización social requiere ser acotada en sus alcances y esta perspectiva teórica, precisamente, permite delimitar el ámbito de esas acciones sociales.

El uso combinado de las dos perspectivas demandó, por su parte, revisar principalmente sus puntos de convergencia o sus conexiones, y a partir de este análisis se da respuesta a la idea de atravesar el puente, es decir, el uso de la ecología política tanto como de la sociología de conflictos permiten ver los vínculos y su relación para ampliar el análisis del caso estudiado, en este sentido, la respuesta a la que se llegó es que efectivamente se puede transitar por estos dos campos y los mismos, ya que lejos de oponerse se complementan en el análisis, es decir, se puede atravesar el puente para adentrarse en un terreno propio de la ecología política que es el uso de varias perspectivas, de hecho, al equiparar este campo con una suerte de paraguas se está mencionando la idea de que el mencionado paraguas permite albergar “distintas tradiciones de pensamiento”, pero también, distintas perspectivas y aproximaciones meto-

dológicas. Dentro de la estructura de la tesis, este capítulo conceptual tiene un peso importante, pues siendo la ecología política un campo en construcción había que tomar en cuenta sus múltiples aproximaciones, en este sentido se resalta la idea de que el conflicto no solo puede ser analizado en un contexto general sin antes pasar por el entendimiento de su estructura, su dinámica y sus lógicas de acción.

Este tipo de entrada analítica, por otra parte, permite ver las distintas relaciones que se generan en la problemática planteada y que pueden ser analizadas desde las “cadenas explicativas” preconizadas por la ecología política, así un aspecto relevante para entender el desarrollo del proyecto OCP en un contexto más amplio es el análisis del mismo a partir de la trayectoria petrolera del país y obviamente poniendo de relieve las políticas públicas y los contratos del sector en cuestión; de esta forma en el segundo capítulo se observa que existen antecedentes “institucionales” que a pesar del errático manejo petrolero del Estado esto, de todas maneras, desemboca en la construcción del nuevo oleoducto ya que forman parte de una suerte de continuidad de intereses a veces contradictorios que por una parte pretenden reducir la participación e importancia del Estado en esta área, lo cual deviene del contexto económico neoliberal, pero por otro lado que demanda el Estado ampliar la explotación y creación de infraestructuras con el objetivo, sistemáticamente perseguido por los distintos gobiernos de las dos últimas décadas, de ampliar la frontera petrolera ya que significan ingresos para el fisco; en este sentido el oleoducto es la llave que deja abierta las puertas a esa posibilidad y de hecho, durante la investigación documental, se pudo encontrar que de inicio se pensó en esta infraestructura con el fin último de ampliar y potenciar la actividad petrolera en el país aún a costa de áreas ambientalmente tan sensibles como el Yasuní o el sur oriente.

La hipótesis de que el OCP, al menos en su concepción inicial, se relaciona con la ampliación de dicha frontera se cumple porque hay un vínculo de la creación de esta infraestructura con el propósito de explotar campos como el ITT y porque esta infraestructura es una condición básica -previa- para ampliar la explotación de los viejos y nuevos campos; sin embargo, en la práctica el oleoducto no ha superado el objetivo de transportación de crudo pesado en su total capacidad (500.000 barriles diarios) opera con una cuota mínima de transportación de menos de 180.000 barriles diarios. Aunque concretamente la frontera pe-

tolera no se ha ampliado queda latente y viable, desde el punto de vista técnico, con el nuevo oleoducto esto parece depender, como en muchos casos, de la decisión política de cualquier gobierno de turno, de las presiones de sectores interesados y de los requerimientos de financiamiento del Estado. Desde un punto de vista socio ambiental se observa sistemáticamente que el beneficio derivado de esta actividad ha decrecido, al igual que su impacto en los intentos de generar desarrollo; esto se evidencia especialmente en las poblaciones del área de explotación petrolera o su área de influencia. Por el contrario, los impactos ambientales negativos van en crecimiento.

A pesar de que el OCP no ha entrado en su máxima capacidad de funcionamiento, porque esta represada la explotación de más petróleo, se hace evidente que tal infraestructura responde a esa sistemática meta de extraer más petróleo, lo cual puede evidenciarse con particular fuerza desde el gobierno de Sixto Durán Ballén hasta el gobierno de Rafael Correa, obviamente, con los matices políticos e ideológicos del caso, pero con igual objetivo: más ingresos para el Estado, sea con menor o mayor participación del mismo.

La construcción del OCP representa una cadena de intereses articulados entre sí, más allá de los gobiernos junto a sus respectivas orientaciones, y su concreción levantó conflictos evidenciados en cuatro etapas: la previa por el antecedente de la oferta, acceso a la construcción y manejo del proyecto; el dilema del trazado hacia el sur o norte; la decisión de la ruta norte y el conflicto por la afectación al bosque protector de Mindo – Nambillo; y el conflicto a lo largo de la ruta, de la Amazonía a la costa. Esto permite ver un mismo problema -construcción del oleoducto- con distintas respuestas y actores sociales.

El contexto donde se manifiestan los conflictos es de trascendental importancia para entender las respuestas y las perspectivas sobre el problema, así el estudio comparativo entre Mindo y El Reventador inicia con una descripción del medio pues la trayectoria de cada población evidencia una historia distinta e incidente en la forma de relacionarse con los problemas socio ambientales y con las respuestas al conflicto; esta comparación lleva, por su parte, a explorar las diferencias a través del análisis de los indicadores básicos de desarrollo y los datos evidencian, comparativamente, una situación de mayor desventaja o precariedad, en sentido amplio, en la población nororiental de El Reventador. Esta visión panorámica de la situación de los sitios de estudio

se articula con la descripción narrativa del conflicto visto desde la cronología del problema a partir de la herramienta proporcionada por la sociología de conflictos, en la misma se muestran la secuencia y la trama del conflicto.

Así se puede apreciar el “ensamblaje” de la serpiente tecnológica (oleoducto) y los elementos emergentes del discurso ambientalista junto a la presencia de la activista norteamericana Julia Butterfly Hill, la “mariposa de las secuoyas”, en el contexto del conflicto, que aunque fugaz por las acciones represivas del gobierno de turno, simbolizó una percepción particular del medio ambiente y una forma expresiva de lucha.

Los dos capítulos precedentes recogen predominantemente una visión, si cabe el término, secundaria de la problemática y en el cuarto y último capítulo se adentra en la visión interna del problema a través de las perspectivas de actores clave, es lo que en antropología se denominaría la visión emica del conflicto. En esta se encuentra diferencias substanciales frente a la percepción del problema, la una en el caso de Mindo con un fuerte énfasis por la problemática ambiental y su estrecha relación con la economía dinamizada por el eco-turismo, y la segunda con un énfasis claramente marcado por las reivindicaciones individuales y por las demandas colectivas -compensación social- de El Reventador frente a una situación de fuerte marginalidad, no obstante, que por este estrecho y vulnerable centro poblado pasan dos oleoductos y un poliducto. En esta parte de la tesis se aprecia la visión contrastada de cada población frente al dilema recurrente enfocado por la ecología política: la problemática medio ambiental y la visión de la naturaleza, y la problemática del desarrollo con sus múltiples incidencias y límites que plantea la visión del activismo ambiental o ecologismo y los límites, también, de la visión del desarrollo.

La aproximación metodológica a este tema demandó el uso de varios recursos y herramientas; por una parte, el ejercicio de compilación de datos de fuentes secundarias relacionadas con la ecología política y la sociología del conflicto se hizo a partir de la revisión de autores centrales que desarrollaron estos campos de análisis, pues el objetivo fue establecer, en especial, el campo de la ecología política, sus umbrales y su conexión con la sociología del conflicto para efectos del análisis del caso tratado en esta tesis; este ejercicio de revisión de dichas fuentes luego se enfocó en los documentos relacionados con la temática del desarrollo petrolero y las políticas petroleras, es decir, se pasó del nivel de

revisión teórica a uno más específico en relación con la temática abordada.

Dentro de la revisión documental relacionada a un nivel mucho más específico con el conflicto en sí, se compiló y sistematizó cronológicamente la información registrada por diferentes medios de comunicación respecto a los antecedentes, el desarrollo del conflicto y la etapa posterior; el grueso del período registrado va desde el 2001 al 2007, sin embargo se revisó, también, un dato relevante e indicativo de la problemática del año 1999. Esta organización cronológica del caso estudiado permitió desarrollar una lectura diacrónica del mismo para tener una visión amplia e integrada de la problemática. La revisión detenida de estos datos y de los aspectos importantes establecidos en los supuestos de la investigación, cuyo eje fue conocer la dinámica del conflicto, sus conexiones con problemáticas más amplias en perspectiva de entender la relación ambiente/sociedad y los impactos del mismo, fueron insumos para elaborar las preguntas de investigación registradas en el instrumento cualitativo de las entrevistas semiestructuradas que se usaron para recopilar la información primaria de campo.

Al nivel mencionado de la investigación empírica, se usó el mismo instrumento (entrevistas semiestructuradas) en las dos poblaciones con iguales preguntas, más otras complementarias que entraron en concordancia con el contexto de cada sitio, sobre todo para conocer los antecedentes del poblamiento y la situación pasada y actual de las mismas. El trabajo de campo se desarrolló, en cada sitio, en dos etapas, una prospectiva y otra de ajuste (noviembre - diciembre 2008 y enero - febrero 2009); en las dos ocasiones se hizo entrevistas seleccionadas con actores claves y otras entrevistas complementarias con actores, si cabe el término, menos relevantes para el propósito de la investigación. A más de las entrevistas se realizó observación directa y registro sistemático de los datos relevantes de campo.

Uno de los aspectos metodológicos claves en este proceso fue la combinación del conjunto de datos obtenidos a partir de los diferentes instrumentos aplicados (revisión documental, cronología, entrevistas y observación) para ahondar el registro de información en cada sitio de estudio a manera de un estudio de caso, y el empleo recurso comparativo para el análisis de la información primaria que fue, explícitamente, cualitativa.

Este enfoque de estudio de caso en el que se acentúa la búsqueda de información específica tiene el objetivo de conocer la dinámica del conflicto, sus respuestas y repercusiones locales sobre dos ejes ambiente / desarrollo. El uso de las diversas fuentes de información con énfasis en la profundización de análisis del tema específico mejoró la comprensión del caso y la explicación de los vínculos del mismo en relación con la compleja trama social. El recurso metodológico comparativo, muy usado en la antropología, posibilitó la comprensión de los matices del problema, el nexa entre respuesta social (conflicto/movilización), el contexto local y las respuestas del conflicto, aspectos todos importantes para el análisis del tema planteado en la presente tesis.

Las entrevistas registradas en la tesis son incluidas con códigos en números ordinales con la finalidad de guardar el anonimato de los actores entrevistados. Los nombres de las personas que gentilmente colaboraron en la investigación de campo, reposan en los archivos de FLACSO-Ecuador.

CAPÍTULO I

DE LA ECOLOGÍA POLÍTICA A LA SOCIOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS: ¿UN PUENTE INTERPRETATIVO?

Entre Eco y el abordaje teórico de la ecología política y sociología del conflicto: una lectura metodológica de la aproximación al problema.

En el libro “La Estructura Ausente”¹, Umberto Eco plantea que “la semiótica se encuentra en vías de difusión y definición” y que uno de los problemas a los que se ve abocado este campo de conocimiento es el de sus límites². ¿Qué tiene que ver esto con la aproximación teórica a la ecología política? Por un lado, se relaciona con la idea de la necesidad de búsqueda del significado e implicación de la ecología política, y por otra parte, con la idea dominante entre quienes abordan esta temática³ de un campo que está en construcción, y que por tal característica sus límites son difíciles de escudriñar. Esta cita introductoria de Eco, conlleva la idea de buscar la significación de la ecología política, su dimensión, alcance y límite en cuanto campo de producción analítica.

Por otra parte, en este mismo libro de “La Estructura Ausente” el autor referido plantea algo que considero de importancia para adentrarse en el primer capítulo de la tesis y, si cabe el término, “trazar la cancha” en el ámbito de la ecología política, lo cual servirá en su mo-

mento para revisar las conexiones que este campo de conocimiento tiene en relación con la sociología de conflictos⁴, igual un campo de investigación en un estadio quizá más delimitado en cuanto se enfoca en una estructura concreta de análisis que son precisamente los conflictos y las dinámicas sociales subyacentes, parte de una metodología y de una unidad delimitada de estudio.

Para explorar los límites de la Semiótica, Eco se plantea al menos dos consideraciones principales, la primera se relaciona con la necesidad de “establecer si con el nombre de “semiótica” distinguimos una disciplina específica con un método unificado y un objeto concreto”, y la segunda en la que indica que “consideramos la semiótica como un simple campo de investigación, un simple repertorio de temas no unificados aún del todo”. Es decir, plantea elementos básicos para precisar lo que es una disciplina y un campo de conocimiento. En complementación con este análisis, más adelante Eco manifiesta:

“Si la semiótica es un ‘campo’, las distintas investigaciones semióticas se justifican por el mero hecho de existir y la definición de ‘semiótica’ se ha de inducir por la extrapolación de una serie de tendencias constantes en el campo de investigaciones, y por ellas, de un modelo unificado. En cambio, si la semiótica es una ‘disciplina’, el investigador ha de proponer por deducción un modelo semiótico que sirva de parámetro para incluir o excluir del campo semiótico las distintas investigaciones”. (Eco, 2005: 9)

Como se podrá advertir, Eco presenta criterios que eventualmente permiten discernir entre disciplina y campo de conocimiento, lo cual es pertinente para analizar el contexto en que emerge la ecología política, y más que esto, para analizar en qué dirección va, es decir, si es una disciplina o un campo, esto, más allá del posicionamiento de algunos autores respecto a esta disyuntiva. Lipietz (2002), por ejemplo, en su libro ¿Qué es la ecología política: la gran transformación del siglo XXI?, plantea que más que una disciplina tributaria de la unión entre ecología y ciencias sociales, la ecología política es una nueva perspectiva que entra en el campo de la ciencia.⁵

Por otra parte Eco plantea, a su vez, la aproximación al “umbral” de ese campo o disciplina -semiótica- para lo cual realiza una revisión de distintas entradas conceptuales a partir de autores relevantes que han abordado sistemáticamente el tema evaluando los alcances y limitacio-

nes de los planteamientos, esto, dentro de un umbral superior e inferior de los planteamientos, es decir, genera un campo a partir del cual se trata de establecer los límites o profundidad de la definición y del contenido de ese análisis en relación con la Semiótica (sea como campo o como disciplina). Para este efecto se plantea dos hipótesis en relación a conceptos centrales que componen el campo de significación de la semiótica en la que establece que: “cultura es comunicación” y donde: “la primera hipótesis **-cultura igual comunicación-**⁶ supone que desde el momento en que el posible uso de la piedra ha sido conceptualizado, la propia piedra se convierte en signo concreto de su uso virtual”. Es decir, al haber conceptualizado ecología política (al igual que semiótica) la misma adquiere existencia propia, es un “signo concreto de su uso virtual”.

En una segunda hipótesis “establece que todos los fenómenos de cultura pueden convertirse en objetos de comunicación”, y al respecto Eco plantea que esta segunda hipótesis pretende tener un alcance explicativo más amplio, pues afirma que:

“los sistemas de significados se constituyen en estructuras (campos o ejes semánticos) que obedecen a las mismas leyes de las formas significantes [...]. En otras palabras, ‘automóvil’, automóvil no es solamente una entidad semántica a partir del momento en que se pone en relación con la entidad significante /automóvil/. Es unidad semántica (significativa) a partir del momento en que se dispone de un eje de oposiciones o de relaciones -simples- con otras unidades semánticas como ‘carro’, ‘bicicleta’, o incluso ‘pie’, (Eco, 2005: 31).

La ecología política, adquiere existencia propia en la medida que se opone o complementa, según sea el caso, con otras perspectivas o entradas teóricas que abordan la relación sociedad/ambiente, y por el mismo hecho de haber sido conceptualizada con la intención de establecer diferencias y énfasis en relación a un tipo de enfoque específico.

Complementando la idea de búsqueda del territorio del campo de conocimiento, en este caso de la Semiótica, Eco, aborda el análisis de sus fronteras partiendo de la idea de que “la semiótica estudia todos los procesos culturales como procesos de comunicación”, y la exploración de los umbrales puede considerarse como un “mapa geográfico” “que señala los límites de la semiótica, los territorios que le pertenecen y aquellos al borde de los cuales se ha de detener.” (Eco, 2005: 33).

Para este caso y parafraseando a Eco, es imprescindible identificar el “territorio” de la ecología política, los límites dentro de los cuales actúa, y los límites en los que se diferencia de otras perspectivas, llámense a estas disciplinas, campos o perspectivas teóricas. Con esta reflexión introductoria veamos algunas aproximaciones analíticas desde el campo de la ecología política.

Los referentes próximos de análisis socio ambiental desde la ecología política en la cuenca amazónica

Es precisamente este conjunto de ideas las que aportan en el propósito de introducirnos en el análisis de la ecología política y la hipotética conexión con la sociología del conflicto a través de algunas preguntas centrales a este nivel sobre: ¿qué es la ecología política?, ¿porqué conectar o tender puentes entre la ecología política y la sociología de conflictos?, ¿qué vínculos une o separa a estos campos?, y o por el contrario, ¿cómo el campo de la sociología de conflictos puede aportar o enriquecer la formulación de la ecología política?. La respuesta a este conjunto de preguntas, entre otras, orientará el desarrollo de este primer capítulo.

Para este efecto tomaré en primer lugar, lo que podría llamar los antecedentes “próximos”⁷ de los estudios en la perspectiva de la ecología política en la Cuenca Amazónica. Me refiero al trabajo de Marianne Schmink y Charles Wood registrado en su artículo “The political ecology of Amazonia” (1987), el cual desembocará más tarde (1991) en varios estudios amplios y de diferentes autores en el libro “Frontier expansion in Amazonia” editado por Schmink y Wood; y el segundo el estudio de Paul Little titulado “ecología política del Cuyabeno: el desarrollo no sostenible de la Amazonía” (1992) realizado a partir de un estudio de caso en el nororiente de la Amazonía ecuatoriana, en el Cantón Cuyabeno de la actual provincia de Sucumbíos.

Marianne Schmink y Charles Wood desarrollaron sistemáticamente estudios sobre la cuenca amazónica, en particular sobre la Amazonía brasileña en los que trataron la triangulación e interrelación entre: comunidades, conservación y desarrollo sustentable que es parte de su eje de análisis. Entre su abundante producción, como se menciona, está el artículo “The political ecology of the Amazonia” en el cual abordan el problema del impacto negativo derivado de la expansión de la activi-

dad humana en áreas de frontera, expresada en términos de apropiación política y económica, en la Amazonía brasileña y revisan las preguntas o interrogantes que esta situación deja respecto a las relaciones entre “el ambiente natural y el comportamiento socioeconómico”, lo cual constituye un punto de partida para analizar las transformaciones en la cuenca amazónica brasileña.

Uno de los problemas relevantes que ponen en evidencia Schmink y Wood en su artículo son los procesos de degradación, en sentido amplio, de la cuenca amazónica brasileña, es decir, la transformación socio ambiental y económica de un espacio, donde el manejo de los recursos, así como los patrones de uso de los mismos y de la tierra, vinculados al análisis de la economía política, les permite “ilustrar como los procesos económicos y políticos determinan la forma en que los recursos naturales han sido explotados en las regiones de frontera [...]”, lo cual es encuadrado dentro de la ecología política, es decir, esa aproximación al problema de la transformación y degradación de la cuenca amazónica brasileña les sirve, de manera subyacente, para adentrarse en el terreno de análisis de la ecología política.

Estos autores plantean, a su vez, que el problema de la utilización de los recursos y los patrones de tenencia de la tierra, conlleva la necesidad de evaluar los factores ecológicos y sociales implicados en esa condición, lo cual a su vez relacionan con “los sistemas existentes de uso de recursos -tradicionales-⁸, las diferencias en el poder socioeconómico y político y los conflictos que implica.” El conflicto adquiere un valor importante en la lectura del problema desde la perspectiva de la ecología política.

Como se puede advertir, este es el marco de análisis del que parten para entender la problemática de la transformación de la cuenca amazónica brasileña en términos de cambio y conflicto expresado en diferentes formas y a diferentes niveles, pero que se enfatiza en el vínculo de la problemática ambiental con la dimensión política. Por otra parte, para estos autores, la revisión de la problemática desde la perspectiva económica es esencial, pues hacen una distinción entre la relación ambiente sociedad, desde la “reproducción simple”, equivalente a la economía de subsistencia en la que la dinámica socio ambiental tiene una característica propia y más integrada al mantenimiento del ambiente, y la “producción expandida”, equivalente a la economía de mercado, en la que su ejercicio⁹ desequilibra intensamente las relaciones con el me-

dioambiente (social/natural), los degrada y permite la “acumulación privada”. Esta última dinámica de interrelación con el medioambiente genera, tal como lo demuestran en su artículo, intensos conflictos sociales.

Los conflictos se generan, en este caso, a partir de la apropiación, uso y exclusión sobre la tierra, pues la dinámica colonizadora de la cuenca amazónica brasileña es sistemáticamente expansiva, lo cual somete de forma gradual e inexorable a conflictos socio ambientales entre distintos actores: indígenas, caboclos, terratenientes, empresarios, actores del Estado, etc. Muestran también el conflicto entre dos racionalidades económicas distintas¹⁰ (reproducción simple – producción ampliada), y las repercusiones que ello tiene en la dimensión política del manejo del problema propiciado por el Estado brasileño.

Esta tensión se expresa en luchas de acceso por la tierra, y en una política de desarrollo que se plantea desde el Estado en la cual se revela un manejo tendencioso en función de intereses dominantes: por un lado excluye a indígenas y caboclos, e incluye a terratenientes o a empresarios, lo cual muestra que esa política favorece a los grupos dominantes de poder. Así, Schmink y Wood, ponen en evidencia la forma en la que la política interfiere de manera gravitante en el ambiente, y la implementación de esa política promueve conflictos, favorece desigualdades e impacta negativamente -degrada- al ambiente del que dependen indígenas y caboclos y, a su vez, erosiona la cultura de éstos, lo cual impacta negativamente en el paisaje natural, provocando más presiones sobre el ambiente y cambios en las formas tradicionales de articulación con el entorno, lo cual, empuja a estas poblaciones sistemáticamente hacia una economía de “producción ampliada” que favorece la destrucción del medio.

Para estos autores el Estado juega un papel preponderante en el desequilibrio de relaciones sociedad/naturaleza, ya sea por su errática intervención o por los vacíos que deja su débil, y/o muchas veces, premeditada no-intervención, por ejemplo, en la regulación práctica¹¹ del acceso a la tierra y en los conflictos que las luchas por dicho acceso generan entre distintos grupos. Son vacíos o ausencias que, se exacerban claramente en las fronteras que se abren en medio de la expansión y apropiación de los recursos naturales.

Para estos autores, la entrada al análisis del problema desde la ecología política, parte primero de abrir las puertas de la economía políti-

ca, pues esta perspectiva explica muchas de las contradicciones, antagonismos y generación de políticas tendencialmente elaboradas sobre la base del interés económico. Este aspecto no está aislado de un contexto mayor: la Amazonía por ejemplo, dicen, ha estado ligada a la economía mundial desde el siglo dieciséis (extracción de productos forestales, minerales, especias, cauchos, etc.), es decir, la cuenca amazónica no es un espacio aislado de factores externos que modifican sus condiciones socio ambientales: “Estos imperativos era una respuesta a las transformaciones y dislocaciones socioeconómicas en la economía del país -Brasil- y a su nuevo rol en el sistema económico mundial.” (Schmink, Wood, 1987: 51)¹². Por esto, afirman que la degradación ambiental de la Amazonía es un proceso racionalizado dentro de la economía de producción ampliada.

A pesar de que los autores no definen explícitamente lo que es ecología política en este artículo, sí atribuyen su origen a Hjort (1982), y plantean que esta perspectiva no ha sido desarrollada. Lo que hacen Schmink y Wood es mirar la problemática ambiental desde varias entradas que parten de lo económico, los conflictos de clase, la lectura crítica del desarrollo, su impacto en la cuenca amazónica, las transformaciones y el influjo de lo político en esta problemática. En suma plantean parámetros que, como se puede ver, permiten aproximarse a una lectura del problema socio ambiental de la Amazonía desde los elementos configurativos de la ecología política, es por eso que manifiestan que dicho campo, como ya se ha mencionado, toma en cuenta los procesos económicos y políticos que permite mirar como estos ejes determinan la explotación y degradación de los recursos naturales.

Si se pudiera abstraer el aporte de este análisis de la problemática revisada, se diría que describen, parte, de los elementos constitutivos de la ecología política, hacen una aproximación descriptiva al problema, y ponen en evidencian que la degradación ambiental en la Amazonía brasileña es multicausal y compleja en relación con la dimensión socio ambiental, y la misma, tal como lo demuestran, no está dissociada del factor político.

Paul Little, es el investigador más próximo al contexto de planteamiento de la tesis en cuanto a temática -ecología política- y en cuanto al área geográfica de estudio -nororiente de la Amazonía ecuatoriana. Little es el primer antropólogo en estudiar el problema del Cuyabeno (cantón y área protegida) desde una perspectiva explícita de ecología

política. Uno de los aspectos centrales de su trabajo se basa en la crítica al desarrollo, de hecho, el subtítulo de su libro es “el desarrollo no sostenible de la Amazonía”, lo cual es interesante destacar desde la perspectiva de búsqueda del campo de definición de la ecología política.

Little ubica el origen de la ecología política en una suerte de trayectoria que deviene de la combinación entre ecología y antropología, especialmente, en sus formas más especializadas la ecología humana y la antropología ecológica¹³ que comprende en esencia la relación, desde distintos enfoques, entre el “hombre y su medio ambiente”¹⁴. Little plantea en el inicio de su libro que para entender dicha relación es necesario introducir conceptos que permitan comprender ese vínculo, para lo cual aborda el concepto de ambiente según la perspectiva de Hawley (1986) que hace una distinción entre “ambiente biofísico” y “ambiente humano”. La primera dice Little, define las formas -técnicas- en que el ser humano se apropia del medio biofísico para la sobrevivencia, en la segunda, y esto es lo importante para entender la perspectiva de Little respecto a la ecología política, comprende la relación que se establece entre seres humanos, la cual está mediatizada por distintas formas de relacionamiento, una de ellas expresadas en el vínculo con el ambiente y el vínculo ambiente – política.

Un punto importante en la contextualización que hace Little es el análisis respecto a los límites o constricción que impone el ambiente físico en relación con lo humano: “hay ciertos límites ambientales absolutos que la humanidad no puede sobrepasar sin poner en peligro su propia supervivencia. En otras palabras, mientras más nos acercamos a esos límites, más reducimos nuestras posibilidades de adaptación.” (Little, 1999: 19).

Esos límites, precisamente se disciernen dentro del contexto del desarrollo, por esto arriba a una de las conclusiones en las que el desarrollo, bajo el modelo imperante, es ejemplo de un desarrollo no sostenible, y lo ilustra a través del caso Cuyabeno, extensible, de alguna manera a buena parte de la cuenca amazónica.

Por otra parte, un aspecto importante a tomar en cuenta desde la perspectiva de Little es aquel en que el “ambiente humano” es visto como un “procesos de constante creación y re-creación”, concepto que opone a la idea de adaptación, pues el ser humano transgrede, por efecto de la cultura/tecnología, los límites que el ambiente impone o constriñe. ¿Esto qué significa?, que los mecanismos o procesos del “desarro-

llo”, como “proceso social”, afecta innegablemente la relación con el ambiente y la relación entre nuestra misma especie. Esta constatación es relevante para entender parte de los contenidos implícitos en la ecología política y su relación con la crítica al desarrollo. Little, advierte, que el desarrollo en tanto proceso histórico configura las estructuras de desigualdad.

Este autor realiza una precisión que es compartida con el enfoque de Schimnk y Wood en cuanto consideran que el desarrollo es un fenómeno que tiene diferentes escalas y articulaciones, y conecta, tomando el caso del Cuyabeno y del nororiente ecuatoriano, con el “proceso de incorporación de esa región geográfica al sistema mundial y a sus exigencias”. Esta afirmación es una de las claves conceptuales para entender al proyecto OCP, los conflictos, transformaciones socio ambientales, y la articulación de la problemática a diferentes niveles y escalas.

Ahora bien, bajo estas consideraciones Little delimita el “territorio” de la ecología política: “Si unimos (...) la ecología humana y el desarrollo, en un marco más general, nos encontraremos en el ámbito de la ecología política...”. Plantea que al unir los enfoques de la economía política, en cuanto a proceso de articulación con el espacio mundial, con los enfoques de ecología Cultural (como el impulsado por Geertz), que aborda la interrelación ambiente humano - ambiente biofísico, se llega al campo de la ecología política. Esta afirmación lo hace citando a Sheradian (1998):

“la ecología de cualquier comunidad -humana- es política en el sentido de que está moldeada y restringida por otros grupos humanos. La explotación, distribución y control de los recursos naturales esta siempre intervenida por relaciones diferenciadas de poder dentro de y entre sociedades”, (Little, 1999: 24)¹⁵.

Precisamente, este es uno de los aspectos centrales del abordaje que hace Little en el estudio de caso del Cuyabeno ya que plantea la existencia, en el contexto de las interrelaciones sociales, de lo que denomina “diferentes amazonías”, que se corresponden básicamente con dos supuestos: el primero que se relaciona con distintas formas de percepción de la Amazonía, y el segundo que se deriva, a su vez, del primer supuesto y que tiene que ver con la “consolidación de espacios sociales” en un entramado complejo de relaciones, intereses y acciones entre los diferentes actores que conforman la Amazonía, esto son, indígenas, colo-

nos, petroleros, biólogos, turistas, etc; donde cada uno de ellos construye una visión distinta de este espacio:

“Para los indígenas de la selva la Amazonía es el hogar milenario de su pueblo. Para un petrolero, una fuente de recursos naturales. Para un colono se trata de un lugar de tierras baldías. Para un biólogo es un laboratorio científico. Para un turista constituye un lugar hermoso. Para un conservacionista es un bosque que debe ser protegido. Para un ingeniero genético la Amazonía es un cúmulo de medicinas por descubrir. Para un general un territorio a defender.” (Little, 1992: 25-26).

Es decir, plantea aunque de una forma bastante reductora, y quizá muy centrada en la visión endógena (*emic*), fronteras entre cada uno de los actores que conforman las “diferentes amazonías”. La cuestión de fondo de esto, e importante de destacar para este capítulo de la tesis, es el hecho de que se genera, desde la interacción social, distintas formas de articulación socio ambiental en medio del análisis de lo que es el desarrollo, desarrollo que como se ha mencionado en base a la perspectiva de Little, esta lejos de ser sostenible, porque al igual que Schmink y Wood, constatan en dos puntos distintos de la cuenca amazónica (Brasil – Ecuador) una degradación de las condiciones del medio biofísico y del entorno humano consecuencia de políticas y de un modelo de desarrollo que se muestra, a su juicio, insostenible.

Little, plantea conclusiones a diferentes niveles que articulan la relación sociedad/ambiente, sin embargo desde mi punto de vista, hay dos aspectos que son relevantes para entender el análisis que él formula desde la perspectiva de la ecología política. La primera es la observación de que se constituyen o conforman diferentes espacios sociales, a los cuales les llama “complejos” que están relacionados con la apropiación, explotación y distribución desigual de los recursos de esta parte de la Amazonía ecuatoriana, y la segunda en la que observa que la problemática del nororiente de la Amazonía ecuatoriana no puede ser vista desde una sola entrada, por el contrario, el enfoque de análisis que permite o proporciona la ecología política le permite desagregar el problema en diferentes componentes (petróleo, colonización, área protegida, indígenas, desarrollo) que a su vez articula con el análisis del cambio que han provocado estos dinamizadores en los ecosistemas, con una innegable constatación de procesos de degradación y de transformación en el paisaje social y natural.

Estos estudios analizados y desarrollados respectivamente en 1989 y 1992 proporcionan importante información de la forma como se enfocó, en su momento, el problema de la relación sociedad/naturaleza desde un planteamiento incipiente de la ecología política bajo el contexto de análisis de la Amazonía brasileña y ecuatoriana.

La ecología política y la emergencia de un nuevo enfoque del problema socio ambiental: un acercamiento desde varias perspectivas teóricas

Como se podrá recordar, la segunda estrategia optada por Umberto Eco para adentrarse en el análisis de la definición del campo de la Semiótica es la ubicación de los distintos autores que han abordado el tema y en este caso, obviamente, se hará desde el ámbito de la ecología política junto con sus diferentes perspectivas. Esto supone un ejercicio de búsqueda y síntesis ya que, por una parte, no son pocos los científicos que han tratado el tema, y por otra ha sido abordado desde distintas ópticas y desde diferentes disciplinas.

Deléage¹⁶ (1993), por ejemplo, en su “Historia de la Ecología” hace una mirada retrospectiva del vínculo humanos - naturaleza, pero también, se refiere a la forma como nuestra especie históricamente ha construido dicha relación.¹⁷ Este hecho puede ser visto, efectivamente, desde distintos ángulos, y es la parte que precisamente planteó revisar en adelante.

Esto supone, por una parte, el abordaje del tema a partir de la selección de autores referenciales¹⁸ que han trabajado en los fundamentos o el campo de definición de la ecología política, y por otra parte, supone también revisar de entre estos autores y otros más, el planteamiento sobre las bases históricas en las que se sustenta dicho campo de conocimiento, y obviamente, a la vez revisaré sus fundamentos.

Joan Martínez Alier¹⁹, es uno de los autores que ha tratado en forma sistemática y rigurosa el desarrollo de la ecología política, por lo tanto ha aportado en la consolidación de las bases de este campo de conocimiento e investigación. Quizá en su producción temprana, aún no explícita de ecología política, inicia con sus investigaciones en América del Sur bajo la producción de “La Estabilidad del Latifundismo” (1968) y “Los huacchileros del Perú” (1973), que son estudios de economía enfocados en el tema agrario, sin embargo, en estas obras se advierte el

uso de perspectivas tales como las de Eric Wolf a quien, como ya se mencionó, se atribuye en parte el origen de la ecología política. Este aspecto no va a ser abordado ahora.

En 1999, Martínez Alier publica “Introducción a la Economía Ecológica” y en ella analiza, por una parte, la relación de origen que tiene la ecología política respecto a la economía ecológica, y por otra parte, estructura el “territorio” de la ecología política.

En la referida obra, Martínez Alier, menciona que la economía política estudia “los conflictos distributivos económicos”, y esto plantea es la base para aproximarse a la ecología política ya que la misma, por contraste, estudia los “conflictos de distribución ecológica”, es decir, los que tienen su origen en la problemática ambiental. Este vínculo es complementado con la equiparación que hace entre economía ecológica con ecología humana en tanto tratan la relación entre economía y ambiente visto desde el desarrollo de la sociedad humana, y aquí acota la idea en la que la ecología política estudia la distribución ecológica de esas relaciones.

La distribución ecológica desde la perspectiva de Martínez Alier son las “asimetrías o desigualdades sociales en el uso humano de los recursos naturales”, sea que esto se exprese en el espacio, en el tiempo y en las distintas formas de uso. La constante en la distribución ecológica es la idea de que los recursos se agotan, pero también, que el uso humano de los mismos deja impactos negativos en el ambiente, el cual es soslayado por la economía neoclásica.

A partir de este “trazo” de la ecología política, Martínez Alier plantea la existencia de tres tipos de ecologismos, el que llama “el culto a la vida silvestre” muy ligado a la biología de la conservación, la “ecoeficiencia” unida a la “modernización ecológica” cuya expresión tangible es la perspectiva del desarrollo sustentable, y finalmente el que denomina “movimientos de justicia ambiental” o “ecologismo de los pobres” que son formas de respuesta social (diversa) frente a problemas ambientales manifestos en lo global, lo local o en ambos, y que históricamente muestran trayectorias y contenidos distintos, es decir, va desde el histórico movimiento Indio Chipko, Chico Mendes y los *seringueiros* en Brasil hasta la amplísima gama de conflictos ambientales en el mundo y particularmente en América del Sur que es donde se focaliza²⁰.

El trabajo de este autor se nutre, precisamente, de la revisión sistemática de dichos casos lo cual es abordado en “El Ecologismo de los

pobres” (2004), y la revisión de los abundantes casos le ayuda a encadenar los conflictos (en tanto tienen una historia y un contenido) con el análisis del contexto ambiental y políticos de los mismos.

El “Ecologismo de los pobres”²¹ refleja los lineamientos en los que se asienta una de las perspectivas importantes de la ecología política en cuanto delimita, a partir del análisis de los casos de conflicto en distintos puntos del planeta, lo que son, valga la redundancia, los “conflictos ecológicos distributivos”. Por otra parte, Martínez Alier hace una retrospectiva para ubicar las fuentes de la ecología política. Para este autor la ecología política, dice: “es un nuevo campo nacido a partir de estudios de caso locales de la geografía y antropología rurales que hoy se extiende a los niveles nacional e internacional”, pero precisa también que la antropología²² (incluso por su soporte metodológico -estudios de caso y enfoque cualitativo-) y la ecología (bagaje de las ciencias ambientales) han estado estrechamente en contacto. El análisis de esta “mixtura” de disciplinas (ecología – geografía – antropología) puede ayudar a vislumbrar una vertiente de los orígenes de la ecología política, pero esto tendría que hacer un rodeo explicativo quizá muy interesante, pero por el momento no cabe en el presente análisis.

Martínez Alier atribuye al antropólogo Eric Wolf haber introducido el término ecología política²³, aunque dice, esta idea ya había sido expresada por el geógrafo Bertand de Jouvenel a finales de la década de los cincuenta (Martínez, 2004), en todo caso, lo importante de esto es ubicar una década en particular que es donde definitivamente se ciemienta la perspectiva de ecología política. Es ahí cuando la “piedra” comienza a llamarse por definición “piedra”, siguiendo la idea del aporte semántico de Umberto Eco. En otras palabras, cuando han convenido llamar a esa mixtura de disciplinas, preocupadas en el enfoque específico sociedad/ambiente desde la dimensión política, se está definiendo la ecología política, y esta nace como tal.

En el análisis que realiza más adelante habla del aporte de Netting y Boserup en la década de los ochenta quienes buscaban los problemas de adaptación sociocultural al medioambiente, y en el caso de Boserup, que cuestiona la agricultura industrializada considerando que el uso de la agricultura tradicional es más “eficiente en el uso de energía”, tornándose en una crítica política a lo establecido o al modelo establecido.

En esta misma década de los ochentas surgen abundantes investigaciones rurales desplegadas desde el campo de la antropología ecológica

o desde la ecología Cultural, tal como se atribuye a Netting, que perfilaba como eje de análisis, ya no solo la adaptación, sino los conflictos derivados de la relación sociedad/naturaleza. Más tarde emergerían Blaikie y Brookfield geógrafos preocupados de estudiar “las cambiantes relaciones entre estructura social (económica política) y el uso del medio ambiente” para lo cual tomaron en cuenta las divisiones sociales encontradas especialmente en sociedades no occidentales. Esto plantea un primer acercamiento a la complejidad social respecto a la trama que se proyecta sobre el ambiente.

A partir de la revisión que hacen de Blaikie y Brookfield (1987) Martínez Alier y Bebbington coinciden en ubicar a estos dos geógrafos como parte importante de la matriz histórica de la ecología política, pero al mismo tiempo el primero acota algo que es de capital relevancia para entender los sustentos de esta perspectiva, pues identifica una relación fundamental entre: estructuras sociales, uso del medio ambiente y un “entrelazamiento” de las mismas en diferentes formas (Martínez, 2004: 104).

En la revisión que hace de la problemática ambiental en el “Ecologismo de los pobres” Martínez Alier realiza algunas acotaciones importantes para apreciar el perímetro de esta perspectiva: “El campo de la ecología política está ahora moviéndose más allá de las situaciones rurales locales, hacia un mundo más amplio”. En esta parte, y tomando en cuenta los contenidos de las investigaciones socio ambientales que, en esta época, se desplegaban en varias partes del planeta, delinea algunos rasgos que caracterizan a este campo emergente:

“La ecología política estudia los conflictos ecológicos distributivos. Por distribución ecológica se entiende los patrones sociales, espaciales y temporales de acceso a los beneficios obtenidos de los recursos naturales y a los servicios proporcionados por el ambiente como un sistema de soporte de la vida. Los determinantes de la distribución ecológica son en algunos aspectos naturales (clima, topografía, patrones de lluvias, yacimientos minerales, calidad del suelo y otros). También son claramente sociales, culturales, económicos, políticos y tecnológicos. En parte, la ecología política se superpone a la economía política, que en la tradición clásica es el estudio de los conflictos de distribución económica.” (Martínez, 2004: 104-105).

Esto define, desde la perspectiva del referido autor, el campo de la ecología política, pero hace algunas precisiones adicionales: por una parte sostiene que el problema ambiental no solo se localiza en las áreas rurales, que ha sido históricamente y si cabe el término el “nicho” principal de la problemática, sino que se hace cada vez más expansiva, es decir, se la encuentra en los hábitat urbanos y en forma tangencial en las “grandes metrópolis” de los países industrializados y en los países de economía emergente, es decir, tienen ahora una distribución sumamente amplia sino global en el sentido literal del término.

Por otra parte, plantea que muchos de los “conflictos ecológicos” que emergen de la problemática ambiental, están por fuera del mercado, y al respecto introduce una discusión que tiene vínculos con la problemática tratada:

“Los economistas ortodoxos disfrazan los conflictos ecológicos distributivos bajo palabras como ‘externalidades’ o ‘fallas del mercado’”, y los economistas ecológicos replican que “las ‘externalidades’ son ‘éxitos en el desplazamiento de los costes’”, es decir, formula en este análisis que los ‘costes sociales y ambientales’ son también transferidos, y de esto le surge una pregunta ligada a la economía ecológica, pues dice: “[...]en qué escalas numéricas o cualitativas, en cuáles sistemas de valoración, serán valorados tales “costes” trasladados.”, cuya expresión muchas veces se la observa en forma de conflictos socio ambientales que surgen por doquier.

Esta problemática hace que la ecología política se ramifique en distintas formas de enfocarse en el problema, y como dice Martínez Alier, surgen “los conflictos de justicia ambiental”, o los enfoques de género para tratar el problema con otra transversalidad, pero manifiesta, hay un tema común en la ecología política, y ese tema es “el estudio de los conflictos sociales sobre el acceso a los recursos y servicios ambientales y su destrucción (sean comercializados o no tales recursos y servicios)”. A lo cual añade, es una parte del campo de definición de la ecología política (Martínez, 2004:105-106). Como se podrá advertir, este autor posibilita adentrarse en aspectos importantes de la discusión del campo definitorio de la ecología política.

El planteamiento que sigue es que siendo, precisamente, un campo en construcción es necesario mirarlo desde distintos ángulos y por ello, siguiendo la estrategia de Eco de buscar autores referenciales, revisaremos a Enrique Leff quien tiene otra perspectiva respecto a la definición

de ecología política. El autor en cuestión, al igual que Martínez Alier, tiene un bagaje importante de publicaciones sobre el tema, pero obviamente, de estas he optado por seleccionar algunas como una suerte de hilo conductor que permite encontrar elementos de análisis de su producción. Estos documentos son, entre muchos otros, “La complejidad ambiental” (2000), “ecología política y saber ambiental (2004), del artículo publicado en “Racionalidad Ambiental” del mismo año; y en los “Tormentos de la materia”, en donde aparece un artículo más acotado que es “La ecología política en América Latina un campo en construcción” (2006). En estas primeras publicaciones referidas, Leff plantea que el tema ambiental, al cual lo llama “cuestión ecológica” es uno de los problemas más acuciantes contemporáneos, e indica que esto se permea en diversos escenarios, entre ellos el político.

Leff, en sus distintas publicaciones, plantea el surgimiento de una “nueva conciencia sobre el valor de la naturaleza”, pero por otro lado, el conocimiento de la misma, dice, requiere que sea abordado por métodos interdisciplinarios y por “principios de complejidad”. Para este autor dicha complejidad viene de los cambios que se operan en el planeta, cambios no solamente en la esfera de la naturaleza sino y sobre todo de los cambios sociales, refiriéndose específicamente a la trama dice: “La complejidad ambiental es un proceso de reconstitución de identidades donde se híbrida lo material y lo simbólico; es el campo en el que se gestan nuevos actores sociales que se movilizan para la apropiación de la naturaleza”, pero también plantea la complejidad en términos de articulación de naturaleza, técnica y cultura y de un nuevo saber orientado a la “gestión racional del ambiente” para la “reapropiación del mundo” (Leff, 2000: 1).

De cierta forma, el enfoque de Leff en sus primeros trabajos sugiere una postura cuasi teleológica en la que reflexiona sobre lo que considera es lo ambiental o ecológico y su relación con los cambios que se operan desde la sociedad humana que trata a toda costa de apropiarse de la naturaleza. La relación planteada entre humanos y el ambiente esta incidida por el llamado desarrollo; Leff precisamente apunta a la crítica del desarrollo como un campo inherente a la ecología política:

“[...] las formaciones discursivas del saber ambiental y del desarrollo sostenible como estrategias conceptuales y como efectos de poder en el campo de la ecología política, donde se expresa el conflicto social del

cambio global de relaciones con el conocimiento, donde circulan y transforman sus conceptos, se legitiman y manipulan sus significados a través del juego de intereses opuestos de países, instituciones y grupos sociales” (Leff, 2004: 232).

Para Leff, el conocimiento es esencial en dicha crítica, pero también para entender nuestra relación con el medio aún en un sentido ontológico²⁴. En estas explicaciones abunda Leff, sin embargo, el propósito de esta parte de la tesis no es adentrarse en la acotación de este tema, sino tratar de tomar los elementos tangibles de cada autor para intentar delimitar, aún más, el campo de la ecología política. Este autor plantea que este campo mencionado emerge de una nueva perspectiva del saber ambiental, esto dentro de la “politización del conocimiento por la reapropiación social de la naturaleza” y menciona que la ecología política está en cimentación lo cual lo hace desde “el territorio del pensamiento crítico y de la acción política”. Como se podrá entender, este es un campo definitorio.

Quizá en complementación con lo planteado por Martínez Alier, o posiblemente como un matiz, Leff dice que la ecología política no solo se enfoca en los conflictos de distribución ecológica sino, dice, explora otras formas de explicación de las relaciones de poder en sus diferentes escalas (global hasta lo individual). Si en algo coinciden con Martínez Alier es en el hecho de ver el vínculo entre diferentes campos complementarios:

“la ecología política emerge en el hinterland de la economía ecológica para analizar los procesos de significación, valoración y apropiación de la naturaleza que no se resuelven, ni por la vía de la valoración económica de la naturaleza, ni por la asignación de normas ecológicas a la economía; estos conflictos socio ambientales se plantean en términos de controversias [...] derivadas de formas diversas -y muchas veces antagónicas- de significación de la naturaleza”. (op.cit: 256)

Para este autor la “distribución ecológica” tiene que ver con un desigual reparto de costos de las externalidades económicas y de lo que llama los “potenciales ecológicos” que no pueden ser valorados desde el mercado, pero que dice, son interiorizados por medio de instrumentos económicos, de normas ecológicas o de los movimientos sociales que plantean enfrentar este hecho de nuestra relación con el ambiente, pues es evidente para Martínez Alier tanto como para Leff que el deterioro

del ambiente que marca la contemporaneidad no puede ser resuelto estrictamente por la economía.

Leff, dice al respecto que la ecología política se establece en el campo de ese conflicto, el cual toma también muchas formas y, valga la redundancia, muchas vías de expresión o luchas que tienen por fin buscar “procesos de construcción de nuevos mundos de vida” o en otras palabras de nuevas formas de ver y relacionarse con la vida, pero también de revalorizar otras formas de percepción y de relacionamiento con el mundo que ha coexistido o que han estado viviendo paralelamente con la concepción occidental, se refiere a los pueblos de cultura y tradición distinta a la nuestra. Por ello, una vez más, se puede ver que la antropología juega un papel importante en el contexto de análisis de la ecología política.

Al respecto para Leff, la imbricación entre distintos campos y/o disciplinas es un medio que posibilita la deconstrucción de los diferentes “mundos de vida” y los pone en contacto: “la ecología política construye su campo de estudio y de acción en el encuentro y a contracorriente de diversas disciplinas, pensamientos, éticas, comportamientos y movimientos sociales” (Leff, 2006: 22).

Como se podrá constatar, este autor explora otras vertientes que surgen del campo de la ecología política, lo cual es interesante; sin embargo, su circularidad pone límites a su propio análisis al tratar de entender el campo de la ecología política y su amplio abanico de implicaciones. En un artículo que aparece más tarde en la red²⁵ Leff delimita mejor lo que se querría dentro de este campo: por una parte se refiere a la búsqueda de “nuevas formas de estilos de convivencia y desarrollo”, a las respuestas que se generan desde movimientos sociales surgidos de la percepción, no equivocada, de la destrucción de la naturaleza, de la percepción de que “algo no anda bien en la concepción del progreso”, en el dominio, aparente, de la ciencia sobre la naturaleza, y como dice este autor, en las promesas incumplidas de desarrollo: “Se va configurando una conciencia ambiental sobre los límites del crecimiento, la irracionalidad de la racionalidad económica dominante, la destrucción de las bases ecológicas de sustentabilidad del planeta, el círculo perverso de degradación ambiental y pobreza.” (Leff, 2008). Al final este complejo entramado es para Leff el campo de análisis de la ecología política²⁶.

La comparación de dos autores (Martínez y Leff) que han trabajado extensamente sobre el tema es un aspecto relevante para la comprensión del planteamiento de esta parte de la tesis, pues si el campo de la ecología política es algo que está en construcción, lo cual de paso es un aspecto coincidente en la percepción de los dos autores sobre el desarrollo de este enfoque, permite ver los matices, complementariedades y quizá, si se escarba más, se encontrará contradicciones.

El punto aquí, como ya se mencionó, es intentar acotar cada vez más el terreno y el campo de donde emerge y se sostiene la ecología política. Para este efecto, en el próximo apartado veremos lo que se plantea, ahora, desde un amplio abanico de autores para mirar ya no solo desde dos perspectivas -marco- sino desde varias de ellas, pero con la diferencia de que se presentará las partes centrales o los elementos explicativos tácitos que permitirán, al final, delinear los elementos, el campo y ensayar una definición consistente de la ecología política; es lo que diría Eco, encontrar o al menos vislumbrar los cimientos y el umbral de una estructura en edificación.

El abanico de la ecología política desde varios puntos de vista

En esta parte “reúno” a varios autores que han abordado desde diferentes perspectivas temas asociados con la ecología política, cuya producción va desde inicios de la década de los noventa hasta el presente²⁷. Esto plantea un reto ya que, al final, se requiere encontrar un hilo conductor que conecte a los autores mencionados en las notas del presente capítulo. En esta aproximación bien se podría privilegiar el análisis en ejes temáticos, líneas de tiempo, orientaciones respecto a la problemática central de la ecología política, o agruparlos entre perspectivas convergentes o divergentes, en fin, se abre un sinnúmero de posibilidades asociativas; sin embargo, ensayaré una combinación que contenga un orden cronológico cruzado con ejes temáticos de relevancia para el objetivo de esta parte de la tesis que es trazar el campo de la ecología política.

Hasta esta parte del desarrollo de la tesis, queda claro, que la ecología política reúne, a grosso modo, dos grandes ámbitos de la ciencia: las naturales o ciencias naturales y las ciencias sociales, respectivamente la ecología, y la antropología, sociología, geografía, y las demás disciplinas

afines a la temática en las dos ramas de la ciencia, pero cabe destacar que las ciencias naturales tienen gran parte del aporte fundacional.

Deléage (1993) en la publicación “Historia de la ecología: una ciencia del hombre y de la naturaleza” nos proporciona el marco de la entrada “ambiental” a la ecología política. Este autor menciona algo importante y ya referido anteriormente, considera que “la naturaleza tiene una historia específicamente humana y los humanos son los sujetos creadores de sus estados de naturaleza”²⁸, es decir, revela una doble interacción, tal como se refleja en los análisis ecosistémicos: “Todo enfoque de ecología humana debe pues interpretar las relaciones entre las poblaciones humanas y su entorno desde una óptica evolucionista” y agrega, que “debe considerarse a diferentes escalas de tiempo el funcionamiento de los ecosistemas sociales, los mecanismos que garantizan su estabilidad y los procesos que, por el contrario, originan la degradación de sus fundamentos ecológicos” (Deléage, 1993).

Como se podrá advertir, estos aspectos son clave para entender el trasfondo ambiental de la ecología política, los enfoques anteriores de la óptica de la ecología humana o de la antropología ecológica²⁹ habían sido planteados en términos funcionalistas de adaptación, cambio, o transformación, pero que en todo caso se focalizaban en demostrar nuestra intrínseca y compleja relación con la naturaleza.

El enfoque desmembrado de las ciencias naturales y sociales, había soslayado el papel, como dice Deléage, siempre cambiante de la humanidad en el equilibrio de la naturaleza. Ahora se reconoce, como parte del enfoque de la ecología política, que el papel de la humanidad es la de un actor de cambios ecológicos gravitantes, tal es así, que se habla de la humanidad ahora comparable a las fuerzas geológicas de cambio global; las causas antrópicas de dicho cambio son las que marcan el escenario de fondo de la relación con la naturaleza y es materia de análisis de la ecología política entre otros campos.

Deléage, plantea que nuestra relación con la naturaleza ha estado marcada por un continuum de conflictos “en la que las determinantes ecológicas atraviesan la totalidad del campo social”. En esta parte se puede relacionar con la idea de “apropiación social de la naturaleza” y con las emergidas de la economía ecológica en tanto se muestra nuestro vínculo económico, energético y ecosistémico con la naturaleza³⁰. Este autor, toma al antropólogo Maurice Godelier para explicar algo que es fundamental en la ecología política, pues dice: “[...] en todas

partes aparece un lazo estrecho entre la forma de usar la naturaleza y la forma de usar a los humanos” y complementa con otro planteamiento clave para nuestro propósito: “En toda sociedad, por medio de la apropiación de la naturaleza, los humanos cooperan o se explotan, sus relaciones de producción y sus relaciones sociales se organizan y se transforman” (Deléage, 1993: 283). Tal situación, dice el autor, lleva a continuas tensiones entre sociedad y naturaleza. Esto entra, sin duda, en el campo definitorio de la ecología política, en particular cuando la tensión se da entre sociedad y sociedad por la apropiación de la naturaleza. Esta problemática no es nueva:

Refiriéndose a las tensiones, Deléage dice, por el contrario, se remontan a tiempos muy lejanos, y plantea que lo que se vive ahora es el resultado de “crisis ecológicas acumuladas”, de las cuales ninguna sociedad humana ha escapado en la modificación de esas relaciones, modificación que históricamente ha provocado crisis sucesivas, Deléage plantea algo objetivo, “ninguna civilización ha sido ecológicamente inocente”. Antes de la industrialización, que sin lugar a dudas es el detonante del mayor cambio global de “naturaleza” antrópica, cuyo efecto negativo empezamos a sentir apenas, ya había rastros de actividad humana “profundamente destructiva del tejido ecológico” que ha llevado a una crisis ecológica y social concomitante, tal como se demuestra con casos históricos o arqueológicos:

“En definitiva, la conclusión a la que llegan las muy escasas investigaciones históricas disponibles es que la degradación del entorno jugó un papel paralelo con otros factores sociales (económicos, técnicos, culturales, etc.), y sobre todo como límite global más que como causa inmediata y directa.” (Deléage, 1993: 287).

Más adelante plantea que esos casos históricos conocidos, evidencian que “las representaciones que tienen las sociedades de su relación con la naturaleza parecen haber jugado un papel importante.”; así como el rol de la apropiación material, económica y simbólica de la naturaleza:

“Esta prevalencia significa precisamente que todo lo que la naturaleza pone con profusión a disposición del hombre le es totalmente indiferente a la sociedad, porque este término no tiene ningún valor en el sentido económico. La explotación de la naturaleza obedece a esta ley

económica que distingue al capitalismo de todos los modos de producción anteriores” (op.cit: 295)

En una gran parte de su documento, Deléage, trata con amplitud sobre los cambios e impactos generados desde el desarrollo industrial en el siglo XVIII en adelante, lo cual sería de mucho interés detenerse a tratar, pero la limitación de la tesis impone otra prioridad, en todo caso lo que se puede recapitular es que el elemento antrópico de la interrelación con la naturaleza ha alcanzado, como dicen varios autores entre ellos Funtowics, una escala y fuerza, sin precedentes, similar a las “fuerzas de escala geológica”, con la evidencia de que los procesos humanos avanzan con tal rapidez en la destrucción del planeta que es posible, aún a riesgo de tener una visión poco optimista, de no darnos tiempo para reaccionar y modificar nuestro comportamiento, pero hay algo que se debe destacar de este autor al respecto, él menciona que a veces resulta casi imposible comprender las causas y consecuencias de la crisis ecológica sin comprender cuáles son las relaciones de fuerzas políticas, sociales y económicas que subyacen a este problema. (Deléage, 1993: 321).

Este aspecto, creo, es otro de los elementos esenciales para demarcar el campo de la ecología política, sin lugar a dudas el planteamiento de Deléage, ilustra la imbricación de las ciencias, otrora, separadas por “dogmas” epistémicos; ahora, la situación es distinta y esto empuja a la aproximación de las ciencias para abordar el problema de la complejidad que es, también, territorio de la ecología política.

Jorge Luis Borges, en su obra “Ficciones” (1941) tienen un ensayo con un título sumamente sugestivo: “el jardín de senderos que se bifurcan”, en el deja entrever algunas disyuntivas: la elección, el destino o el azar son los que llevan a determinados caminos. Abstrayendo el legado de este gran escritor, se puede decir que, en un momento dado, se puede optar por caminos, aparentemente, conocidos donde se trata de reducir el azar o donde el azar nos enfrenta a cosas conocidas, que esperábamos ver, o en otras ocasiones a situaciones inciertas e insospechadas.

Otra idea, subyacente a esto, es que tomamos caminos paralelos, que en un momento dado, pueden precisamente, bifurcarse o alejarse tanto que ya no se reconozcan como parte de una misma vía, o de un mismo destino, entendido como fin del camino, otros llaman meta o encuentro. Borges dice: “En todas las ficciones, cada vez que un hom-

bre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina las otras (...) Crea, así, diversos porvenires, diversos tiempos, que también, proliferan y se bifurcan. (Borges, 1941). Considero que la ecología política, por sus campos de aproximación al problema ambiente/sociedad, puede crear varios factores explicativos, varias bifurcaciones.

¿Depende a dónde queramos ir? Esta puede ser una pregunta, si cabe el término, “ecopolítica” que nos lleva a una clara disyuntiva ambiental y social o a un panorama densamente entramado e imbricado por las dos.

Al abordar el tema planteado desde la ecología política y sociología de conflictos, en realidad, quise vincularme con una decisión del camino a tomar donde el “jardín”, se me hace, es la antropología, y los senderos son quizá la sociología y la ecología o una forma mixta de las tres que conforman otro “paisaje” llamado ecología política. Sin embargo, y volviendo a la idea de la elección de caminos (con la idea de reducir la incertidumbre), opto en esta parte por el sendero de la antropología. En esta decisión, me encontré con la siguiente autora que, creo, es importante para esclarecer aún más el campo de la ecología política.

Dolors Comas d’Argemir tiene una publicación denominada antropología Económica publicada en 1998, y en uno de sus capítulos que trata sobre: “ecología, naturaleza y cambio social”, plantea que la ecología es un “sujeto político” y como tal, surge el debate, en la década de los ochenta. ¿Qué implica esto del sujeto político? Para ella es la ampliación del enfoque de la economía política con una derivación explícita para entender la interacción con el medio ambiente, pero es también una modificación de la “vieja ecología cultural” en la que se introducen variables políticas en el análisis.

Como los demás autores hasta aquí vistos, Comas, plantea que la degradación ambiental en todas sus manifestaciones, tiene que ser vistas, desde las causas sociales, políticas, y económicas, de hecho, dice la ecología política surge en ese contexto, es decir, en el intento de explicación de las causas que llevan al deterioro de las bases ambientales de la subsistencia y plantea propuestas, alternativas, para el desarrollo. Para esto manifiesta necesario que “se identifiquen las actividades humanas significativas en la interacción sociedad/medio ambiente y de reconstruir el contexto social, político y económico en el que se producen las causas y efectos de tales actividades”. Esto, según Comas, tiene que ver con una perspectiva de la ecología política en la cual se amplía,

a su vez, el enfoque de la economía política al insertar otras dimensiones relacionadas con lo ambiental: “De hecho [...] combina los enfoques de la ecología humana y la economía política, al considerar la dialéctica entre sociedad y los recursos naturales, y entre clases grupos dentro de la sociedad”. (Comas, 1998: 119).

La referida autora menciona que la antropología tiene una larga tradición en el estudio de las relaciones sociedad/entorno, pero es crítica al decir que la misma presenta limitaciones a causa de dos cosas: un reducido interés por las causas de la degradación ambiental porque, manifiesta, ha predominado un modelo de equilibrios funcionales que margina los cambios que se dan en la sociedad y su entorno, y porque los mismos estudios han dado poco peso al factor político de la interacción con el medio ambiente, añadiría, quizá por una disputa misma en el campo del conocimiento entre la antropología y la sociología, cuyos enfoques son distintos, pero evidentemente complementarios.

Desde la perspectiva generada por la autora, la ecología política atiende aspectos contextuales donde convergen diversas disciplinas; esto para explicar en forma ampliada “la interacción de las relaciones sociedad-entorno con el cambio social”³¹. En ese sentido podremos ver que el hecho de que interaccionen disciplinas, es en sí, un hecho eminentemente político por que se presenta, como se ha mencionado antes, disputas en campos de poder claramente establecidos por los límites que se impone e impone cada ciencia o cada disciplina³².

Uno de los aspectos más relevantes abordados por la antropología es el que ha permitido encontrar otras racionalidades en la interacción con el medio, racionalidades que han estado mediatizadas por aspectos políticos, de hecho, la organización social en función de las relaciones con el entorno, marca las pautas para estructurar un tipo determinado de relaciones sociales y/o de organización social, esto, sin caer en reduccionismos o determinismos, pero es obvio que existe tal interacción y lógicas muy divergentes con la nuestra. Esto último, hace ver, por otra parte algo que es igualmente fundamental para comprender la configuración del campo de la política:

“[...] buena parte de la naturaleza que hoy queremos preservar ha tomado forma debido a siglos de actividad humana y es producto de una construcción social. Más aún, el paisaje natural es producto de relaciones de clase, de género, y étnicas: no es nada neutro, ni nada “natural”” (Comas, 1998: 122). Esto último menciona tomando a Soper (1996).

Siendo una construcción social es importante, como lo destaca posteriormente la autora, tomar en cuenta que el “enfoque de la ecología política asume la necesidad de vincular ecología y economía”. Esto es lo que hace con predominancia Martínez Alier, entre otros autores que asumen tal perspectiva.

Al hablar de economía se debe, también, hablar de dos aspectos centrales para entender su conexión con la ecología política:

“La producción -en tanto elemento de la esfera económica- es un acto de apropiación de la naturaleza e implica transformación de los recursos en productos utilizables [...] El entorno y la tecnología se construyen socialmente a través de las relaciones sociales que se establecen en la producción y que cristalizan el proceso de trabajo. Así pues, ecología, tecnología y trabajo están en estrecha relación [...] en la producción se ponen en juego las necesidades e intereses conflictivos entre los miembros de una sociedad, así como las distintas estrategias adoptadas por grupos particulares.” (Comas, 1998: 133-132).

Añadiría, que procuran “apropiarse de la naturaleza”, tal como lo indica Leff, y competir, por recursos cada vez más escasos, por ecosistemas menos alterados y quizá por un estado de naturaleza pensada, idélicamente, prístina y cada vez más utópica, cada vez más “antropizada” a una escala global. En esta parte bien cabría la pena repensar algunos de los matices del planteamiento de Hardin en la “Tragedia de los Comunes”, excluyendo radicalmente las perspectivas neo maltusianas y los equívocos de apreciación teórica. Es un posicionamiento “ecopolítico” que tiene que ver con la idea de que la humanidad debe imponerse ciertos límites para no socavar nuestra existencia como especie y la vida de las demás especies de la biosfera; un tema extremadamente complejo de resolver, pero ineludible de ser tratado.

En resumen, Dolors Comas muestra los aportes de la antropología social a la perspectiva de la ecología política, donde dice, el énfasis de la misma es el análisis de los factores sociales y políticos que intermedian la relación con el ambiente (en términos de uso), relación que esta al mismo tiempo atravesada por los problemas ahora tangenciales de degradación y destrucción, paradójica, de nuestro propio soporte de vida.

Para la autora, la ecología política estudia, precisamente, las causas de dicha degradación y menciona que las consecuencias de este problema son dos: “la acumulación de capital y el empobrecimiento”, es decir,

dos aspectos extremos. La ecología política, dice, analiza e investiga lo que sucede entre esos dos polos antagónicos de la condición humana, es decir, rastrea y se manifiesta sobre las relaciones diametralmente opuestas y también lo que sucede en sus intersticios.

Los problemas ambientales se han modificado en tiempo y han sufrido un proceso de “acumulación”, “complejización” y al igual o de forma paralela que los procesos económicos, se han globalizado. En este contexto otros autores³³ han reflexionado sobre la inserción del campo de la ecología política en esos contextos cambiantes. Por su parte, Lipietz intenta responder a la pregunta de ¿qué es la ecología política?, y lo asume como un proceso transformativo que tiene sus bases, nuevamente, en lo ambiental: la ecología científica, dice, es la ciencia de la relación triangular entre los individuos de una misma especie, la actividad organizada de esa especie y el medio ambiente donde tiene lugar esa actividad, pero acota, el medio ambiente es simultáneamente producto de y condición de dicha actividad (Lipietz, 2003: 14).

Es decir, nuevamente se ve que el campo de la ecología política implica entender esas relaciones triangulares. A diferencia de las especies no humanas, la actividad humana es para el autor en cuestión eminentemente política y se refleja en la organización social, en sus encuentros y desencuentros:

“De hecho, esta organización encuentra también sus crisis, pero, una especie política como la humanidad, puede resolverlas cambiando la organización social. La evolución socio-económica es la forma principal de evolución de la especie humana. Dicho de otra manera, la especie humana, única especie social y política, da lugar a una ecología específica, llamada ecología política [...]” (Lipietz, 2003: 15)

Este autor, a diferencia de los otros autores que hemos visto, dice que este campo de análisis es una ciencia, porque es la ciencia, valga la redundancia, de esta especie particular, es decir, la especie humana.

La ecología política, según Lipietz, estudia todos los vértices de esa triangulación, por el lado concreto de la ecología, y por el lado que va de la actividad social a su efecto sobre el medio ambiente y por el lado que va del medio ambiente al bienestar de los humanos (op.cit: 16). Por otra parte, y en una metáfora bastante ilustrativa, Lipietz habla de la convergencia de las disciplinas como un rasgo propio del campo de configuración de la ecología política: “la ecología política es más bien

un estado de espíritu que recoge las flores de las otras ciencias para reunir las en un ramo que se inserta en nuestro triángulo”, y se plantea la pregunta de la manera en la que nuestra organización social lleva a modificar el ambiente y los efectos que esto tiene sobre nosotros mismos.

Como se comprenderá, este es el eje de análisis que se plantea desde esta perspectiva, de la cual, no comparto la idea de Lipietz de que sea una ciencia porque la misma no se constituye como tal, es decir, no tiene una teoría definida, no se basa en un paradigma específico, y no dispone de un método. La respuesta es que es un campo de investigación y análisis y que no es una disciplina y menos aún una ciencia.

Algo en lo que convergen todos los autores estudiados es en el cuestionamiento al desarrollo, pero en el caso de Lipietz apela por defender el desarrollo sustentable, es decir, una forma de desarrollo más imbricado con el ambiente: “[...] de hecho, los humanos no están obligados a querer un desarrollo sustentable³⁴: la elección entre el Bien y el Mal es siempre posible. Pero escoger la vida en el planeta y la sobrevivencia de los humanos significa elegir el desarrollo sustentable”. En resumen dice, “no solo la ecología es política sino que toda política es una buena o mala ecología aplicada”, porque trata de las formas o perspectivas como se puede interpretar nuestras interrelaciones con el entorno.

De este autor, finalmente, se puede destacar que comparte la idea de conflicto en las interrelaciones sociales con el ambiente y en general: “los conflictos sociales existen porque, en nuestra especie social y política, se desarrollan relaciones sociales [...] entre sexos, clases, comunidades. Algunas de estas relaciones son contradictorias: los intereses de unos no son los intereses de otros.” (Ibídem).

Más adelante dice al respecto que las crisis ecológicas de una época son, en consecuencia, crisis de las relaciones sociales de esa época. Lo cual comparto, es una perspectiva acertada. Precisamente, los demás autores (Gudynas, Alimonda, Zimmerer y Bassett) junto con Lipietz estudian los intersticios, características y contenidos de esas épocas, y los ponen en diferentes planos y escalas que van desde lo local a lo global y viceversa.

Cada uno estudiando casos específicos desde la óptica de la ecología política, ya sea a través de los problemas que plantean las escalas, ya sea desde la crítica y la utopía, o desde las luchas, movimientos sociales y autonomías en los intentos de alcanzar un desarrollo sustentable con ejercicio propio del manejo de sus recursos -gobernabilidad ambiental,

y respecto a factores que están mucho más allá de las fronteras tradicionales y que afectan al mundo entero, tales como las consecuencias implicadas en el calentamiento global, el cambio climático y los riesgos que supone para la existencia humana y de las otras especies, lo cual es tratado ampliamente por Ulrich Beck (2006), es decir, hay una forma de “hacer” ecología política en ámbitos específicos de la interacción sociedad/ambiente, o en ámbitos más generales y como se ha mencionado a diferentes escalas; es por esto que se puede hacer, tal como lo plantea Gudynas, una “ecología política de la integración”.

Esto plantea una orientación política que impulsa a ir más allá de la conceptualización de la construcción de teorías, o del atrincheramiento académico para adentrarse en un campo pragmático de acción. En este punto advierto el nexo y puente entre la ecología política y la sociología de conflictos emergida de la matriz de la sociología de la acción pues se parte de la idea central de que hay un rol explícito de la sociología en la que se debe “activar la sociedad”, tal como lo manifestaba Alain Touraine. En resumen las perspectivas mencionadas plantean, por igual, acción frente a un problema cada vez más evidente y penetrante que tiene una fuerte base socio ambiental y donde el rol de lo humano tiene, ahora, mucho peso en el desenlace final que tiene que ver con nuestra propia subsistencia.

El último autor en revisar es Bebbington (2007) y nos permitirá enlazarlos con el aportado final de este capítulo porque estudia, a través del caso minero, los movimientos sociales y las respuestas que se generan para aproximarse a lo que llama la “ecología política de las transformaciones territoriales”; pero por otro lado, nos ayudará a entender con elementos importantes los umbrales de la ecología política, ya que, considero este autor hace una síntesis de este campo.

Al inicio de su artículo, Bebbington plantea que se puede entender a la ecología política como una “suerte de paraguas” en la que coexisten “distintas tradiciones y líneas de investigación política y ecológica”. Bajo esta cubierta, dice, se comparte preocupaciones comunes (éticas-políticas e intelectuales), pero sobre todo este compartimiento se relaciona, aunque con ciertos matices, con una misma perspectiva respecto al surgimiento de la ecología política no como una teoría, dice Bebbington, sino como un “espacio común de reflexión y análisis”. El umbral de la ecología política es que no es una ciencia, ni disciplina científica, ni una teoría, es un campo de investigación y análisis con un en-

foque específico (ambiente / sociedad / política) en proceso de maduración, y por lo tanto con mucho potencial.

Para este autor, la interpretación del origen y permanencia de este campo puede sustentarse en tres puntos. El primero es el que viene de la economía política, de la que dice, parafraseo, la ecología política se sustentó en sus inicios bajo el deseo de combinar el análisis crítico de la economía política con una preocupación por el medio ambiente, la gobernanza, su uso y su transformación. A este aporte Bebbington lo ubica como un elemento fundacional pues:

“[...] buscaron analizar las relaciones entre el empobrecimiento de grupos vulnerables y su acceso a, y uso de, recursos ambientales. Estos utilizaron marcos conceptuales muy influidos por la teoría de la dependencia y por los múltiples debates alrededor de la economía marxista” (Bebbington, 2007: 27).

Estos análisis, según el referido autor, fueron tratados dentro de lo que denomina una “cadena explicativa”, para entender el conjunto de relaciones subyacentes y procesos “escalonados” que van, siguiendo su ejemplo, desde los procesos erosivos de una parcela agrícola hasta “las relaciones internacionales que influyen en los precios de los productos agrícolas pasando por las políticas nacionales y las estructuras sociales y microregionales como escalas de análisis intermedio”. Bebbington plantea dada esta cadena explicativa, que no se puede entender la ecología sin antes entender la economía política, pues se debe especificar las relaciones de poder y desigualdad que se encuentran gravitando en el acceso y control de los recursos naturales, de igual forma, en la definición misma de sus usos.

En este mismo documento Bebbington habla de que los precursores de la ecología política estuvieron en la ecología humana (antropología), en la geografía y en los debates teóricos sintetizados en la sociología (Giddens). Sin embargo, la mayor parte de estudios y análisis, dice, estuvieron sesgados a causas de dos condiciones: la primera por el sesgo investigativo centrado en lo institucional (gobiernos, agencias, ONG, etc.) pues se hacía más fácil el acceso, y el segundo y más importante a su juicio por el “compromiso normativo” de los “ecólogos políticos”, lo cual planteo la necesidad de una relación justa y equitativa entre desarrollo y medio ambiente, considerando las perspectivas menos institucionales -locales- de los actores de la sociedad civil.

El siguiente punto de sustentación de este campo es el estudio de la “resistencia y movimientos sociales”, lo cual se empata, como veremos más adelante, con la sociología de la acción y la sociología del conflicto. Este punto de sustentación de la ecología política, como podrá suponerse, tiene un fuerte vínculo con la sociología, de hecho, Bebbington cita en su texto, como ya se ha mencionado, a Habermas, Giddens, y a otros autores paradigmáticos de la sociología, pero también confluye con el campo de análisis de Martínez Alier.

Bebbington menciona que varios sociólogos anglófonos produjeron en 1997 una “ecología política del tercer mundo” en la que se enfocan en el análisis del rol de actores sociales en “disputas ambientales”, es decir, hay un mayor acotamiento de la unidad de análisis u objeto de estudios hacia finales de la década de los noventa, lo cual contrastaba con el enfoque anterior que estaba predominantemente marcado por lecturas influidas por la economía política y por el cuestionamiento al capitalismo como tal.

Otra línea con diferente enfoque surge casi de manera paralela a esta, y en este caso según lo explicado por Bebbington, viene de una combinación de métodos de tipo sociológicos y antropológicos como el estudio etnográfico de poblaciones que sufren varias formas de dominación, y al mismo tiempo de las formas de respuesta en el marco de un estudio para entender la modernización agraria en Malasia. En este estudio se evidencian las llamadas “formas cotidianas de resistencia”, lo cual demostraba prácticas, respuestas, y conciencia respecto al problema sufrido por las poblaciones estudiadas.

Estas respuestas “micro” y su análisis según las observaciones de Scott (1990), tomadas por Bebbington, tenía limitaciones porque se observaba que a otras escalas la resistencia no surtía efecto, es decir, no se operaban cambios reales, sin embargo, los actores que bien podrían llamarse locales, estaban conscientes de sus propios límites al intentar cambiar la situación en su entorno y a otras escalas o niveles de relación. A estas acciones o capacidades de actuación de los individuos se los había llamado, como dice Bebbington, “agencia humana”.

Este autor habla de otro aspecto que es central en la ecología política y que ha sido desarrollado por Arturo Escobar (2001), ya que manifiesta que respecto a las cuestiones de “agencia humana”, resistencia y su clara relación con la “dignidad humana” son elementos que entran en la arena de análisis pues a partir de ello se hace la crítica al desarrollo

sobre “la base de las relaciones entre desarrollo, medio ambiente y dignidad humana”.

Desde otra perspectiva lo último puede verse con ciertos matices o aún siendo un correlato, en los planteamientos de “justicia ambiental”. Escobar, dice Bebbington, pone énfasis en la resistencia, pues es obvio, que la relación que plantea tiene expresiones sociales de ese tipo. Para muchos autores que abordan la ecología política el tema de la resistencia, de las respuestas y de los movimientos sociales se vuelve una unidad de análisis importante: “[...] los movimientos sociales se vuelven importantes, porque constituyen una forma de contrapoder desafiando a los poderes dominantes y abriendo la posibilidad de otro tipo de sociedad basada en valores distintos” (Bebbington, 2007: 31)

Del análisis de estos movimientos, respuestas, del contexto de dichas “agencias humanas”, y del cuestionamiento y crítica al modelo de desarrollo imperante surgen líneas más acotadas tales como la que se investiga en “ecología de los pobres” (Martínez Alier) o “ecología de la liberación” (de Richard Peet y Michael Watts).

Los planteamientos realizados en estas líneas tienen a más de la crítica al desarrollo la idea, como dice Bebbington, de crear “contrapeso a la expansión del capitalismo moderno” fuertemente ligado al actual modelo de desarrollo, y es donde se ve, metafóricamente hablando, al movimiento social como el contrapeso en la balanza.

Este planteamiento viene de la observación sistemática de que el capitalismo y el contexto de desarrollo termina siendo destructivo, y aquí algo importante, se ve al desarrollo no tanto como un “proceso establecido sino como un campo de disputa en el cual las relaciones de poder determinan lo que finalmente se acepta como “desarrollo””. Este aspecto es clave para entender la ecología política, y en este caso es un elemento conceptual que pretendo, entre otros elementos, tomar para el desarrollo de la tesis.

En el siguiente y último apartado de este primer capítulo de la tesis, planteo abordar tres aspectos importantes relacionadas con la parte conceptual; el primero tiene que ver con la argumentación del por qué usar una perspectiva combinada (ecología política y sociología de conflictos), el segundo la puntualización de la conexión entre las dos perspectivas y en el tercero se toman los elementos conceptuales que se usaran para abordar el estudio de caso, lo cual implica hacerse de una de-

finición derivada de la revisión teórica desarrollada a lo largo de este capítulo.

De la ecología política hacia la sociología del conflicto: atravesando el puente

La idea de “atravesar el puente” tiene que ver con el uso de dos perspectivas teóricas (ecología política y sociología de conflictos) con el fin de profundizar en la lectura, análisis y comprensión del caso planteado, es decir, el conflicto y las repuestas emergidas a partir de la construcción del nuevo oleoducto (OCP). La propuesta de esto es “transitar” entre los elementos que permiten aportar al estudio de caso planteado. Por una parte, la ecología política posibilita el análisis amplio de la problemática sociedad ambiente, pues como menciona Bebbington, alberga distintas tradiciones de pensamiento con lo cual se puede precisar el aspecto teórico de la problemática tratada, por su parte, la sociología del conflicto ayuda a entender el rol de cada actor social en el conflicto, así como sus perspectivas, esto se estructura en los cuatro campos: ético, político, social, económico sobre los que la sociología de conflicto establece su análisis y para encontrar las “lógicas racionales” o “lógicas de acción” (Fontaine, 2004).

Por otra parte, el uso combinado de estos dos campos permite un “puente” y por lo tanto la posibilidad de transitar entre perspectivas teóricas y metodología de análisis, ya que se enfocan en el conflicto a estos distintos niveles, y al mismo tiempo es una unidad de análisis.

Pasando al siguiente punto, y como se ha visto, una de las vertientes de análisis en el campo de la ecología política viene de “distintas tradiciones de pensamiento”, entre ellas como se menciona al final del acápite anterior, la sociología, por lo tanto esto supone que desde este hecho hay formas de contacto entre los campos de la ecología política y la sociología de conflictos³⁵. Por otra parte, la ecología política se nutre de diversas ciencias y a un nivel inferior de distintas disciplinas con sus respectivos enfoques. Una de las características de este campo es que precisamente recoge de todas ellas elementos que luego se integran en una forma de análisis atravesada por los factores ambientales, sociales y dentro de este último, por los elementos políticos, cruciales para la configuración de este campo y por lo tanto para realizar análisis a ese nivel. En este caso, la sociología, en cuanto en buena parte se enfoca en

los aspectos políticos, y si cabe el término está en su territorio, esto hace que el análisis político de lo ambiental se aproxime eminentemente a la sociología.

En algunas de las perspectivas de la ecología política se puede advertir que la unidad de análisis, son las tensiones sociedad/ambiente, el surgimiento de respuestas sociales, “acciones colectivas” en torno a las problemáticas ambientales, el surgimiento de movimientos ambientales caracterizados por distinto tipo de organización social, las respuestas sociales no organizadas frente a la problemática ambiental, y sobre todo los conflictos; en particular, el tema de los movimientos y de los conflictos es compartido tanto por la ecología política como por la sociología de conflictos, subrayando esto último. Para la ecología política es el paraguas explicativo, para la sociología del conflicto es un aspecto que subyace y se resalta a partir del análisis de los cuatro ejes (ético, político, económico, social).

Lo que quiero evidenciar y que a su vez sirve para el desarrollo de la tesis, es que de entrada se observa intrínsecamente la existencia de puntos de contacto entre los dos campos y desde la perspectiva que se plantea en el análisis son complementarios en la medida que el un campo - ecología política - aporta en el análisis que se puede hacer de la problemática ambiente - sociedad - desarrollo, y desde el otro campo - sociología de conflicto - por la metodología, la ubicación de actores y de las “lógicas de acción”

Para este efecto, y en una forma mucho más acotada que los otros ítems en los que se ha abordado el tema de la ecología política, me enfocaré en el Sociólogo francés Alain Touraine porque, si cabe el término y como ya se ha mencionado antes es la “fuente” (sociología de la acción) de donde emerge la sociología del conflicto.

Según Giner (2006), Touraine “se inserta en la tradición clásica de la sociología que tiene en cuenta la interpretación de la subjetividad”, de hecho, plantea que el tema de la “intencionalidad y la subjetividad son cruciales a lo largo de su obra”. Esta línea de reflexión proviene de Max Weber, que a diferencia de su predecesor sociológico, Touraine se inscribe políticamente hablando a la izquierda. Touraine, según Giner, ha dedicado su labor a la investigación de los movimientos sociales en América Latina y en Europa Oriental, y a la par es crítico del neoliberalismo y su concepción de democracia, dentro de la que se inscribe el

“paradigma” del desarrollo, cuestionado también por las diferentes perspectivas de la ecología política.

Ahora bien, si Touraine tiene filiación con la línea de Weber, ¿cuál es ese vínculo? Uno de los puntos centrales de análisis de Weber es el tema de la “objetividad del conocimiento”, y este interés lo traslada al campo de las Ciencias Sociales. Para este clásico de la sociología la objetividad no se obtiene del dato empírico ya que como lo sintetiza y cita Huisman, “es constantemente asentado sobre las ideas de valor que son las únicas que le confieren un valor”, de lo cual se deriva también una suerte de posicionamiento por las cuestiones éticas³⁶. Pero hay algo que está mucho más en línea con lo desarrollado posteriormente por Touraine, y es la búsqueda de Max Weber por comprender la “naturaleza y las causas del cambio social”, tal como lo refiere Giddens: “Para Weber, los factores económicos son importantes, pero el impacto de las ideas y los valores sobre el cambio social es igualmente significativo”, y por ello, dice Giddens, creía Weber, que la sociología debe centrarse en la acción social, no en las estructuras³⁷, por una parte, y por otra el autor citado dice, Weber creía que la sociedad moderna generaría cambios trascendentes en la “acción social”, de ahí se puede apreciar la fuente o perspectiva a la que se acoge Touraine.

Dentro de las perspectivas sociológicas podemos encontrar a dos de ellas que son de interés relevante para el tema que se aborda en la tesis, por un lado están las perspectivas que se basan en el conflicto en las que se rechaza la entrada funcionalista basada en el consenso. La perspectiva del conflicto enfatiza en la “importancia social de las divisiones”, y por ello se concentra, según lo descrito por Giddens, en las cuestiones de poder, la desigualdad, y la lucha: “suelen considerar que la sociedad se compone de grupos diferentes que persiguen propios intereses. La existencia de estos implica la constante posibilidad de conflicto y que unos grupos se benefician más que otros”.

La otra perspectiva que interesa como concepto para el desarrollo de la tesis es la que se basa en la “acción social”, esta teoría se enfoca en la acción e interacción social, lo cual posibilita formar estructuras. Esta línea teórica es relacionada, de alguna manera, con Weber, y la producción de Touraine se inscribe en ese contexto. En tanto práctica sociológica, esta supone, según Giddens, captar el significado de la acción y la interacción social, y no explicar las fuerzas externas al individuo que hacen que actúe de tal forma. De esta manera, la línea teórica de la

acción social se concentra en el comportamiento de actores individuales, y de sus relaciones entre sí y con la sociedad. (Giddens, 2001: 47).

De Coster (et. al) sintetizan la producción de Touraine respecto a la acción social: “Para Touraine es ilusorio pensar, conforme a una tradición determinista bien establecida, que “las reglas, las normas y la organización social parecen preexistir, como un decorado de teatro, en el momento que los actores entran en escena”, citando a Touraine (1984: 113). Más adelante dice:

“El análisis sociológico debe invertir la perspectiva para considerar que la regla no es anterior a la acción sino que es, al contrario, creada, discutida, incluso modificada por la acción. El orden no es más que una traducción parcial de los conflictos de poder y de las transformaciones de los modelos culturales (...) De ahí la importancia de los movimientos sociales, que ponen de manifiesto los vínculos sociales más fundamentales y muestran que las instituciones y las formas de organización social son producidas por los vínculos sociales, en vez de constituir un “estado” de la sociedad que determina las relaciones sociales” (De Coster, et. al, 2004: 111).

Touraine considera que el actor social es la suma de individuos; dentro de esto se encuentran los movimientos sociales que como se ha dicho, están en constante tensión por mantener intereses opuestos o antagonicos:

“[...] es el sentido de la actividad y de la estrategia de los diversos movimientos sociales a través de sus luchas por el control de los recursos económicos y sociales [...] la oposición de nuevas minorías activas, como los estudiantes, movimientos feministas, o los ecologistas, o finalmente disidentes es el que da forma a la sociedad de hoy.” (op.cit: 112).

De Coster (et. al) en su síntesis, plantea que Touraine tiene una concepción “global y exigente” del movimiento social, y que los estudios que él realizó lo llevaron a constatar tres elementos que se sitúan en las relaciones entre individuos y sociedad: “identidad colectiva, definición de adversario, y un proyecto de acción y de reforma de la sociedad”. Estos elementos son clave para entender la perspectiva de Touraine, y al mismo tiempo, para tratar de explicar las conexiones entre ecología política y sociología de conflictos. Finalmente, dentro de la sociología de la acción, Touraine plantea, como ya se ha dicho, un “método de interven-

ción sociológica”, en el cual propone “descubrir el sentido de las acciones colectivas”, y sobre todo, y ahí la conexión con uno de los planteamientos de Weber, que es tomar una entrada o perspectiva ética (activa):

“Según sus principios -de Touraine- el sociólogo debe conciliar distanciamiento y compromiso, donde su objetivo es hacer conscientes a los actores del sentido profundo de su acción histórica [...] el objetivo de la sociología es activar la sociedad, mostrar sus movimientos, contribuir a su formación, destruir todo lo que impone una unidad sustantiva [...]” (en: De Coster, et. al, 2004: 112-113)

La sociología de la acción, opera bajo este marco o planteamiento, y la sociología de conflictos toma, precisamente, el legado de Touraine, esto, se puede decir, esta dentro de una “cadena explicativa”. En los dos campos (ecología política y sociología de conflictos) el enfoque se concentra en las tensiones sociales, acciones colectivas, los movimientos sociales y conflictos, cada uno con sus propios matices, pero es evidente que la ecología política, por su propio origen pone énfasis en la relación sociedad/ambiente, sin desconocer que Touraine en sus últimas publicaciones también trata la problemática ambiental y la incertidumbre como lo manifiesta en su publicación ¿podemos vivir juntos? (2001). La propuesta de la sociología de la acción, y por ende de la sociología del conflicto, a mi juicio, no se excluyen, no antagonizan, sino, considero se complementan respecto a la ecología política y esta combinación ayuda al análisis de la problemática planteada en la tesis.

En un caso porque está acompañada de una línea teórica -sociológica- bien definida, con un objeto de estudio acotado (en el caso de la sociología de conflicto) y la ecología política, a más de ser, retomando las palabras de Bebbington, un “paraguas”, es flexible en la medida en que su enfoque predominantemente socio ambiental, puede acoger por su propio campo de sustentación, los enfoques, métodos o perspectivas de otras líneas teóricas, disciplinas o ciencias. En este caso hay un puente o vínculo sobre el cual se puede transitar, y obviamente, aporta en la investigación planteada.

En el tercer y último punto de este apartado, planteo tomar los principales elementos conceptuales y definiciones a partir de la ecología política y que servirá para el análisis del estudio de caso planteado en esta tesis.

Por una parte los procesos económicos y sociales son determinantes en la forma en la que los recursos naturales han sido explotados, es decir, plantean una evaluación de los factores ecológicos y sociales en la utilización de los recursos pero también en su degradación y efectos consecuentes. La política interviene de manera gravitante en el ambiente, esto desata conflictos entre distintos actores sociales, con intereses, generalmente, contrapuestos. (Schmink, Wood, 1987).

El Estado, como tal, juega un papel gravitante en los conflictos. La economía política, en tanto explica las contradicciones y antagonismos en el acceso a la distribución económica, da las pautas para entender el campo de la ecología política. La ecología política permite analizar las articulaciones de un área al sistema económico mundial; y a la vez entender los conflictos y los elementos de crítica al desarrollo (op. cit.).

Un ámbito de la ecología política es el entendimiento de la relación del “hombre y su medio” (Little, 1992), y la comprensión de la relación entre seres humanos mediatizado por los vínculos entre ambiente y política. Se debe tomar en cuenta los límites o constricciones que impone el medio al ser humano, la trasgresión de esos límites llevan a socavar nuestra propia existencia. Esos límites, se disciernen en el contexto de desarrollo y a partir de los elementos de la ecología política se hace una crítica al desarrollo. De esto hace una definición la cual tomaremos para esta tesis:

“[...] la ecología de cualquier comunidad -humana- es política en el sentido de que está moldeada y restringida por otros grupos humanos. La explotación, distribución y control de los recursos naturales esta siempre intervenida por relaciones diferenciadas de poder dentro de y entre sociedades” (op.cit). Esta es una aproximación a un nivel de definición.

La economía política, proporciona los fundamentes de la ecología política (Martínez Alier, 1997, 1999, 2004) en la medida que toma el concepto de los “conflictos de distribución económica” y los pone en paralelo con los “conflictos de distribución ecológica”; esta relación entre economía y ambiente incide en el desarrollo de la sociedad humana. Frente a esto, hay una propuesta de definición a otro nivel ya que, parafraseando, estudia la distribución ecológica de esas relaciones y estas a su vez son las “asimetrías o desigualdades sociales en el uso humano de los recursos naturales”; los recursos naturales se agotan y el uso humano genera impactos negativos en el ambiente. El campo de la eco-

logía política se mueve más allá de las situaciones rurales hacia un mundo más amplio ya que existe una fuerte conexión entre los distintos ámbitos local – global, global – local.

En otro elemento definitorio planteado por Martínez Alier se puede apreciar una mayor acotación:

“La ecología política estudia los conflictos ecológicos distributivos. Por distribución ecológica se entiende los patrones sociales, espaciales y temporales de acceso a los beneficios obtenidos de los recursos naturales y a los servicios proporcionados por el ambiente como un sistema de soporte de la vida. Los determinantes de la distribución ecológica son en algunos aspectos naturales (clima, topografía, patrones de lluvias, yacimientos minerales, calidad del suelo y otros). También son claramente sociales, culturales, económicos, políticos y tecnológicos. En parte, la ecología política se superpone a la economía política, que en la tradición clásica es el estudio de los conflictos de distribución económica.”(op.cit).

La unidad de análisis es el conflicto de acceso a los recursos y servicios ambientales y su destrucción. La problemática ambiental se permea ha distintos escenarios, entre ellos el político, esto genera una nueva conciencia sobre el valor de la naturaleza, y empuja a la crítica del desarrollo lo cual es un campo definitorio de la ecología política (Leff, 2000, 2004, 2006). Esto genera percepciones distintas del mundo y de nuestra relación con la naturaleza, para buscar “nuevas formas de estilos de convivencia y desarrollo” que empuja, a su vez, a una re-apropiación de la misma.

En tanto la naturaleza es una forma de construcción social y esta a su vez incide en la esfera humana, Deléague conceptualmente propone que: el humano crea sus “estados de naturaleza” y como tal es un actor de cambios ecológicos gravitantes. En esta relación hay un elemento que es clave ya que ‘hay un estrecho lazo entre las formas de usar la naturaleza y la forma de usar a los humanos’, lo cual genera tensiones entre sociedad y sociedad por la apropiación de la naturaleza.

Otro concepto importante es el de la relación que se establece entre ecología, naturaleza y cambio social, tal como lo plantea Dolors Comas, en donde la ecología es un “sujeto político”, que permite aproximarse a la explicación de las causas de la degradación ambiental en sus distintas

manifestaciones sociales, económicas, y políticas, pero también, permite entender las interacciones sociedad – ambiente - cambio social.

Una entrada conceptual importante es la que plantean, diversos actores respecto a enfocarse en las base ambiental de las transformaciones, estudiando, la interrelación entre individuos, actividad organizada, y el medio ambiente. Un elemento de la ecología política es el entendimiento de esas relaciones (Lipietz, 2002).

La ecología política es un espacio de reflexión y análisis, donde puede desarrollarse “cadenas explicativas” para entender la relación sociedad / ambiente, en procesos escalonados que pueden ir de lo local a lo global o viceversa. Hay que tomar en cuenta los vínculos entre sociedad a partir de las relaciones de poder y desigualdad que gravitan en el control y acceso a los recursos naturales. La ecología política establece compromisos normativos. Para el estudio de la resistencia y movimientos sociales se enfoca en el rol de los actores sociales ligadas a las disputas ambientales. Esta aproximación implica entender las “formas cotidianas de resistencia” implicadas en categorías de prácticas, respuestas, y conciencia respecto al problema.

La ecología política muestra la relación entre “agencia humana”, “dignidad humana”, disputas por estos estados éticos (justicia ambiental), el medio ambiente y su relación, crítica, con el desarrollo. Abre la posibilidad a otros tipos de sociedad basada en valores diferentes a los que se disputan desde el desarrollo convencional.

El modelo económico actual, termina siendo destructivo, y se mira al desarrollo, eje central de la discusión, no tanto como un “proceso establecido sino como un campo de disputas en el cual las relaciones de poder determinan lo que finalmente se acepta como desarrollo”.

Estos elementos, conceptos y definiciones enmarcan el contexto conceptual de análisis para los siguientes capítulos, pero especialmente, para entender el conflicto en el tercer y cuarto capítulo de la presente tesis.

Notas

- 1 En 1968 publica por primera vez la “Estructura Ausente”, pero esta obra es revisada y editada nuevamente en el 2005 como respuesta a los aportes importantes contenidos en la misma. Eco, no solo ha hecho aportes en el ámbito de la literatura, semiótica y temas afines, sino que también aportó en enfoques metodológicos, que son usados para este primer capítulo de la tesis.
- 2 (Eco, 2005: 23)
- 3 Martínez Alier (1999, 2004), Touraine (1997, 2001), Leff (2004, 2006), Alimonda (2003), Gudynas (2003), Becker (2001), Bedoya (s.f).
- 4 La sociología de conflictos tiene una fuerte conexión teórica con la sociología de la acción, preconizada por Alain Touraine (1965, 1984).
- 5 Dentro de la literatura revisada, la perspectiva de Lipietz es aislada en la medida que es el único que plantea explícitamente que la ecología política es una ciencia.
- 6 Acotación en negritas de autoría propia.
- 7 Utilizo el término “próximo” en el sentido que estos dos estudios remiten a una misma área biogeográfica, Cuenca Amazónica, que en el caso de “ecología política del Cuyabeno” a más de estar en dicha área geográfica esta en la provincia de Sucumbíos que es el sitio donde se enfocará uno de los estudios de caso, y es “próxima” también porque son pioneras para el caso amazónico en abordar los problemas socioambientales de esta gran región en términos explícitos de ecología política. Me refiero a explícitos porque los trabajos anteriormente realizados sobre la Amazonía pueden haber abordado el problema desde una perspectiva de ecología política sin que a la fecha de su publicación se haya acuñado este término. Un ejemplo de esto es “Amazonía un paraíso ilusorio” de Betty Meggers, publicado en 1976.
- 8 Las acotaciones entre guión de autoría propia.
- 9 Por la forma de apropiación, explotación, monetarización y comercialización de los recursos dentro de un mercado a diferentes escalas.
- 10 Relaciones que de paso muestra ser marcadamente antagónicas en un contexto ambiental tal como el de la cuenca amazónica.
- 11 Ya que puede estar regulado en el papel pero no en el ejercicio concreto de apropiación; es evidente, que los grupos dominantes han llevado históricamente las de ganar.
- 12 En traducción de: Carlos Soria.
- 13 La Antropología Ecológica en la definición adoptada por Little, comprende la descripción desde un punto de vista científico de la relación entre ser humano y necesidades energéticas. (Little, 1992: 18).
- 14 Algunos de los autores revisados atribuyen el origen de la ecología política a la Antropología, con sus variantes de enfoque contenidos en la Antropología Ecológica, la Ecología Humana, y la Geografía Humana o en diferentes formas de combinación. En todo caso, lo que plantean los distintos enfoques es entender la relación humano/ambiente desde las bases materiales de esa interacción, este es un núcleo de análisis importante para la revisión de la ecología política. Algunos autores, como Bedoya (s.f) atribuyen el origen de la ecología política a los antropólogos Eric Wolf y Clifford Geertz.
- 15 Citando a su vez a (Sheridan 1988: xvi-xvii).

- 16 Como referencia mencionaré que el referido autor es físico, historiador de la ciencia y catedrático de la Universidad de Paris VII, lo cual muestra que la discusión sobre la relación sociedad/naturaleza es un campo abierto a distintas perspectivas. Esto supone, por otra parte, que dicho campo de análisis no es privativo de las ciencias ambientales, y tampoco, de las ciencias sociales, por el contrario desde una perspectiva de la ecología política se coincide que el problema debe ser abordado desde la suma de distintas entradas. Al respecto Funtowics (2000) menciona que es un campo que requiere el enlace con diferentes ciencias y disciplinas. En el caso de Leff (2000) o de Arturo Escobar (2000) sostienen que dicha relación, muchas veces, debe ser vista desde los “*saberes ambientales*”, o desde el “*diálogo de discursos*”, es decir, desde conocimientos y perspectivas distintas a los que supone, en estricto sentido, la ciencia occidental.
- 17 El autor referido sostiene que la “naturaleza tiene una historia específicamente humana” y los humanos son los sujetos creadores de sus “estados de naturaleza”. Este es un planteamiento que entra, de alguna forma, en el campo de la ecología política.
- 18 Evito poner el término centrales, por que denotaría una idea jerárquica entre los distintos planteamientos del amplio “abanico” de autores que han abordado el tema. Considero que el conjunto de ellos han realizado aportes importantes para la sustentación de la ecología política.
- 19 Entre su abundante producción están las siguientes obras relacionadas directamente con la ecología política: *From political economy, to political ecology* (1997), *La ecología y la economía* (1997), *Introducción a la economía ecológica* (1999), *La economía ecológica y la política ambiental* (2000), *El ecologismo de los pobres: conflictos ambientales y lenguajes de valoración* (2004), etc.
- 20 Tales como los que plantea en el caso del Ecuador con la destrucción del manglar para la construcción de camarónicas, los problemas de depósito de basura en Zám-bisa, conflictos mineros al sur y norte del país, conflictos por petróleo y contaminación, o los extendidos conflictos mineros en Perú, Bolivia, Chile o el problema de la planta de celulosa en la frontera argentino-uruguaya.
- 21 Esta categorización de alguna forma tiene un correlato en la revisión que hace Bebbington de la ecología política (2007) cuando expone que: “Junto a Escobar, otro libro influyente en la ecología política y también influido por el giro post-estructural ha sido el de los geógrafos Richard Peet y Michael Watts, “*Ecologías de la liberación: Medio ambiente, desarrollo, movimientos sociales*” (2004). El libro explora la posibilidad de crear un contrapeso frente a la expansión del capitalismo moderno (que aunque sea moderno sigue siendo destructivo) y sugiere que el centro de tal contrapeso estaría en los movimientos sociales”. (Bebbington, 2007: 32).
- 22 Por ejemplo, tal como lo menciona Martínez Alier, esta la Antropología Ecológica y la Ecología Cultural como muestra de dicha relación. Estos campos de la antropología unen el estudio de la humanidad en función de sus relaciones ambientales o ecosistémicas. Dentro de esto, se encuentra también el Materialismo Cultural desarrollado en buena medida por Marvin Harris, el cual persigue los rastros de esa relación a través de un enfoque metodológico propio.
- 23 Bedoya (s.f), comparte la idea en la que el origen de la ecología política esta en la Antropología y la Geografía, y también atribuye a Erick Wolf el uso temprano de

- esta categoría. Al tiempo hace una precisión importante, pues dice que para Wolf “las formas de distribución de los recursos naturales y quienes tienen el control de dicha distribución influyen decididamente en la manera como se usan los ecosistemas” (ibid:223). Por otra parte, plantea que Clifford Geertz, así como otros antropólogos, sin usar el término ecología política, trabajaron en ese campo o perspectiva que vincula la relación sociedad/naturaleza.
- 24 Al respecto se puede ilustrar lo planteado con el siguiente análisis que realiza el autor: “...la ecología política viene a interrogar la condición del ser en el vacío de sentido y la falta de referentes generada por el dominio de lo virtual sobre lo real y lo simbólico, de un mundo donde [...] todo se desvanece en el aire...”. (Leff, 2004: 255)
 - 25 “Globalización, Racionalidad Ambiental y Desarrollo Sustentable” en: www.union.org.mx/publicaciones/guia/poblacionyambiente/globalizacion.htm (visitada: 01/11/08)
 - 26 La aproximación de Leff, es mucho menos retrospectiva que la de Martínez Alier, y por ello, creo, pierde consistencia cuando trata de enlazar una lectura actual de la problemática ya que es necesario tener ese tipo de soportes, si bien habla a groso modo de los problemas ambientales que precedieron a los actuales, y habla también de las reacciones institucionales hay un encadenamiento débil en el análisis de contexto del planteamiento de Leff.
 - 27 Deléage (1993), Comas (1998), Funtowicz (2000), Egon (2001), Lipietz (2002), Zimmerer (2003), Gudynas (2003), Alimonda (2003), Beck (2006), Bebbington (2007), Bedoya (s.f).
 - 28 Tomando a Moscovici, Serge (1968), *Essai sur l'histoire humaine de la nature*.
 - 29 J. Steward (1955), L. White (1959), C. Levi-Strauss (1964), M. Sahlins (1972), K. Polanyi (1977), D. Hardesty (1977), M. Godelier (1976), M. Harris (1982), P. Descola (1988), R. B. Lee (1999), etc, etc.
 - 30 Tal como también se plantea desde la Ecología Humana o desde la Antropología Ecológica.
 - 31 Desde mi punto de vista, este último aspecto es clave para entender el puente entre ecología política y sociología de la acción y su derivación en la sociología del conflicto, pues el enfoque se centra en el cambio social, ampliamente estudiado por Alain Touraine, lo cual lo veremos en el siguiente acápite.
 - 32 Silvio Funtowicz (2000), en “ciencia postnormal, complejidad reflexiva y sustentabilidad” plantea otras dimensiones de la lectura de la ecología política ligada a teorías, conocimiento, interacción de ciencias y la complejidad que esto supone para abordar un escenario cada vez más cambiante. De igual forma lo hace Egon Becker (2001) en su artículo “Trasformación ecológico social: notas para una ecología política sostenible.” Los dos presenta lecturas complementarias y alternas a las que hemos visto hasta aquí,
 - 33 Tales como: Lipietz (2002), Zimmerer y Basset (2003), Gudynas (2003), Alimonda (2003), etc.
 - 34 Para Lipietz el desarrollo sustentable equivale más allá de la cuestión intergeneracional -tiempo- y del matiz de las necesidades -acceso-, a “justicia mínima”, es decir, a satisfacer las necesidades de todos empezando por los más desposeídos o los más pobres. (Lipietz, 2003: 20). La ecología política desde muchas perspectivas

aboga por dicha justicia, o más específicamente por una justicia ambiental, como lo plantea Martínez Alier.

- 35 Me refiero a campos porque luego de analizar los fundamentos de la ecología política, se puede advertir que de forma similar la sociología del conflicto es también un campo, de lo contrario sería o bien una línea teórica, o una disciplina. Como se podrá ver más adelante, la sociología del conflicto es una parte subyacente de la sociología de la acción. Bajo estas apreciaciones, sostengo que comparten con la ecología política el hecho de ser campos de análisis.
- 36 “Es aceptable [...] asignar un lugar a las “evaluaciones prácticas fundadas en una concepción ética” (una visión del mundo), mas a condición de señalar (después de haber tomado conciencia de ello) lo que se debe a la constatación empírica de los hechos y lo que se debe a la evaluación práctica, y todo esto concediendo al mismo tiempo a todas las opiniones la posibilidad de hacerse valer” (Huisman, 2002: 247)
- 37 “Señaló que la motivación y las ideas del ser humano son las fuerzas que impulsa el cambio: las ideas, los valores y las creencias tienen poder para producir transformaciones. Según Weber, los individuos disponen de la capacidad para actuar libremente y conformar su futuro. No creía, como Marx o Durkheim, que hubiera estructuras fuera de los individuos o independientes de ellos. Por el contrario, las estructuras sociales se forman mediante una compleja interconexión de acciones. La labor de la sociología es comprender sus significados subyacentes” (Giddens, 2001: 42)

CAPÍTULO II

EL PROYECTO OCP EN LA ANTESALA DE CAMBIOS EN LA DIMENSIÓN PETROLERA DEL PAÍS

Tanto la ecología política y la sociología de conflicto, como se habrá podido advertir en el capítulo anterior, comparten determinados lugares comunes y un mismo “territorio” derivado de las relaciones: sociedad-sociedad/ambiente/tensiones/conflictos. El conflicto es el núcleo o unidad de análisis desde el que se puede observar cambios sociales cuya orientación deriva en posiciones variadas y por lo regular antagónicas que dinamizan las diferentes manifestaciones de tensión socio ambientales.

Al tiempo, se puede advertir que los conflictos tienen características y estructura propia, lo cual, de manera subyacente, se pudo apreciar durante la revisión de la literatura teórica vista en el primer capítulo, y específicamente a través de los casos estudiados desde la perspectiva de la ecología política³⁸. Los conflictos dejan entrever un carácter sumamente dinámico, contenidos del conflicto que se agregan en un balance pro-contra, al tiempo que su “naturaleza” se modifica y adquiere matices diversos. Desde la sociología de conflicto, se puede explorar la idea de que los conflictos, y las respuestas de los individuos, posteriormente agregados en colectivos de actores sociales y en ejes de análisis, permite cimentar la estructura (ética – política – social – económica) pa-

ra aproximarse a un nivel complementario de análisis visto desde las “cadenas explicativas” preconizadas por la ecología política.

Para esto, precisamente, el estudio comparativo de caso de la construcción del nuevo oleoducto (OCP) posibilita adentrarse en las diferentes dimensiones contenidas en los conflictos, y en su relación con entornos y problemáticas socioeconómicas mucho más amplias y complejas de lo que aparentan en un inicio, e igual, mucho más amplias de las que aparentemente impone el propio “perímetro” del conflicto que, en este caso, es la construcción y operación de la infraestructura de transporte de crudo pesado para incrementar la producción del sector petrolero del país (privado y estatal).

El propósito en este capítulo es ilustrar, a través del estudio de caso seleccionado (OCP), las diversas conexiones del conflicto, y una de ellas es la dimensión política, el manejo petrolero y el rol del Estado en la activación del mismo, pero también, se plantea una aproximación retrospectiva al contexto del manejo petrolero previo a la construcción del nuevo oleoducto porque es un antecedente importante de tomar en cuenta para el estudio propuesto. Tanto la ecología política como la sociología de conflictos precisan analizar dichas entradas y antecedentes.

En esta parte, también concentraré el esfuerzo en sistematizar algunos elementos necesarios con el fin de entender la situación sobre la cual se movió y se mueve el tema del nuevo oleoducto, su nexa con escenarios futuros de la relación petróleo – ambiente, y con la disyuntiva desarrollo – conservación, lo cual será visto en el último capítulo.

Para esto es necesario revisar lo que sucedía en el contexto petrolero del país antes de 1999 ya que, por una parte, es el año en el que se da paso a la construcción del nuevo oleoducto, y por otra parte, muchas de las decisiones tomadas responden a antecedentes que se articulan con la demanda creciente del hidrocarburo, su peso creciente en la economía del país, y como efecto de estas condiciones por los intentos sistemáticos de ampliar la explotación de este recurso estratégico.

El Ecuador contemporáneo pasa por tres momentos claves en relación con el tema petrolero: a finales de la década de los sesenta y principios de los setenta en el que se inicia la explotación petrolera en el nororiente ecuatoriano. Esta etapa coincide, a su vez, con la Dictadura Militar de corte “nacionalista-revolucionaria” como se autodefinió en su momento, y a fines de esta década con la transición hacia el régimen democrático del país (1979). Este período supuso el inicio de la activi-

dad petrolera a gran escala en Ecuador, y con esto una fuerte dinamización de la economía del Estado, a la par de la generación de una acentuada visión desarrollista fundada, sobre todo, en la generación de infraestructura para el país, así como el aumento del tamaño del Estado en cuanto estructura, aparato burocrático y sobre todo centralidad del Estado.

Este período fue calificado de “boom petrolero” (Larrea, 2006), con consecuencias que, suponía, por una parte la dinamización del desarrollo, y por otra con el inicio de modificaciones socio ambientales de gran magnitud para el país, cuyo balance probablemente se vea cuando haya fenecido la explotación del petróleo, que según las previsiones será en un corto plazo, probablemente, dos décadas más dependiendo de varios contextos, entre ellos las tasas de extracción, precio del petróleo, reservas, etc. (Acosta, 2006).

En el referido período de los setenta, se nacionaliza el manejo petrolero y se crea la “Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana” en 1972. Según varios de los autores revisados sobre el tema, entre ellos J. Gordillo M. (2006), el objetivo primario de CEPE fue en su momento la compra de las acciones de Texaco para obtener el control de este recurso por parte del Estado, ya que estaba en manos de esa empresa privada estadounidense. En 1973, Ecuador ingresa como miembro de la OPEP y coincide precisamente, tal como ahora³⁹, con una perspectiva nacionalista y estatista del manejo del recurso. En todo caso, el ingreso a una economía de anclaje petrolero le sirvió al Estado, desde el inicio de la exportación de crudo en 1972, para alimentar los hasta entonces magros ingresos, ya que en el pasado los mismos fueron evidentemente precarios: “Sólo las exportaciones realizadas entre 1972 al 74 llegaron a equivaler a un monto de ingresos similar a las exportaciones ecuatorianas de los -últimos- 140 años anteriores de vida republicana, pues los precios del barril exportado saltaron de US \$ 2.56 a US \$ 13,9(...)”⁴⁰, y a otro nivel Larrea (2006) menciona que entre 1972 y 1982 la explotación petrolera tuvo una fuerte incidencia económica nacional a tal punto que casi se duplicó, en esa década, el ingreso por habitante.

Como es bien conocido, esta expansión de la actividad petrolera dio paso a una etapa fuertemente desarrollista en Ecuador lo cual se expresó claramente en los procesos de industrialización, crecimiento empre-

sarial, modificaciones en la reforma agraria iniciada en la década de los sesenta, y generó un amplio proceso de integración subregional.

Ecuador experimentó un cambio cualitativo en el proceso de desarrollo pues en esta etapa contó con recursos suficientes para atender varios frentes tales como la educación, salud, infraestructura, seguridad social, comunicaciones, transporte, etc., y se inició el proceso de expansión de la frontera extractiva del petróleo y a la vez la complejización en el tema socio ambiental. Este momento del desarrollo del Ecuador, como ahora, estaría fuertemente unido al ritmo y posibilidades que los ingresos de la actividad petrolera y la disponibilidad del recurso lo permitían. El contexto internacional de los precios así como la disponibilidad de reservas, la capacidad de explotación y las políticas petroleras han sido gravitantes en la economía nacional.

Según datos de la fuente citada anteriormente el crecimiento económico en términos macro, valga la redundancia, llevó a un crecimiento anual del 10% en el PIB; sin embargo, y de forma paralela, la actividad petrolera y su consecuente impacto en la esfera del desarrollo conllevó también efectos sumamente drásticos en el ambiente, pues se abrieron nuevos frentes de colonización en la Amazonía, y el desarrollo de la infraestructura vial condujo sistemática e inexorablemente a afectar la existencia de recursos naturales, obviamente, el crecimiento indujo por ejemplo la ampliación de la frontera agrícola, y un proceso de deforestación que ha ido en crecimiento constante y que no se ha detenido en ningún momento. Son los efectos subyacentes implícitos de esta actividad y de un contexto de control débil o nulo por parte del Estado.

El Estado y sus respectivos gobiernos, a través de la detentación del poder de grupos dominantes, ha dinamizado sistemáticamente relaciones de desigualdad y esto impactó indudablemente en el ambiente y en el deterioro sistemático de la calidad de vida de la mayor parte de la población. La crítica a estas estructuras es un elemento constante en el manejo de la ecología política cuando la misma resalta la imbricación del problema con el medio ambiente.

El efecto ambiental del “boom” petrolero no estuvo aislado de una creciente polarización económica de la población entre los que más tenían (herederos de los grupos de poder que venían de antes) y el gran conglomerado de la población que menos tenía. La concentración de la riqueza se hizo evidente en esta década (Acosta, 2006).

En sentido estricto el auge del petróleo duró poco y se debió a los desajustes económicos que se presentaban por el caudaloso ingreso y egreso de divisas, endeudamiento masivo, y luego por la caída de los precios del petróleo. Este último escenario de la fluctuación en el precio del petróleo, muestra ser gravitante en lo que ocurre en el país, es un reflejo de la conexión con la esfera global de la problemática, y esto nos demuestra claramente que Ecuador no es una ínsula y que sufre los embates de lo que sucede a nivel global. El factor precio incide en el contexto socio-político, a diferentes escalas que van de lo local a lo internacional, porque hay una estrecha conexión.

Treinta y seis años más tarde desde 1972 en que Ecuador entró de lleno en el “mundo” petrolero ha experimentado con fuerza los cambios e incidencias del escenario internacional del mercado y de los precios fluctuantes del petróleo. Esas fluctuaciones e inestabilidad de mercado del petróleo han impactado, históricamente, en la política interna, en el contexto socio económico y ambiental y en la exacerbación de disputa de grupos de poder. Esto se observó, precisamente, en la etapa previa a la construcción del OCP en la década de los noventa, es decir, había un contexto social, político y económico deficitario:

“[...] recordemos que el siglo XX concluyó con una crisis sin precedentes. Luego de un prolongado período de estancamiento desde 1982, al año 1999 se le recordará por registrar la mayor caída del PIB y como el año en el que se agudizó el deterioro institucional del país [...] Esta implosión de la economía comenzó a fraguarse años antes (también como consecuencia de los ajustes derivados de la “enfermedad holandesa⁴¹” de los años setenta), encontrando su punto más complejo entre 1999 y 2000” (Acosta, 2006: 90).

A pesar de este contexto se puede afirmar, hipotéticamente, que el “avistamiento” de la creciente demanda internacional del crudo por la puesta en escena de los países de economía emergente y por el ritmo de crecimiento propio de la economía de los países del norte, encabezada por Estados Unidos, presionó para la creación de una nueva infraestructura -oleoducto- en el país, lo cual está unido a otros efectos que serán analizados posteriormente.

Retomemos la retrospectiva de la historia del Ecuador petrolero. El cambio en la orientación de la política interna tras el relevo en la Dictadura Militar⁴² coincide con el mantenimiento del Estado como fuen-

te principal de desarrollo, se mantiene la centralidad en la política petrolera y se abren a la inversión (capital) extranjera, aperturismo por el cual, se flexibilizan las políticas económicas y fiscales.

La caída en el precio del petróleo a mediados de los setenta, significó una disminución de recursos y liquidez en las arcas fiscales del Estado, por esto se emprendió en un agresivo endeudamiento externo que ha influido, negativamente y con gran peso, en lo que va de la historia contemporánea (años sesenta en adelante) del país. El precio de petróleo y endeudamiento ha sido dos aspectos que van de la mano, esto, por la obvia y fuerte dependencia mantenida en las últimas cuatro décadas hacia este recurso.

Por otra parte, en los años setenta, se puede ver la existencia de un fuerte interés por parte del Estado, como ya se ha dicho, de controlar el manejo del petróleo. En 1979 se hace la transición a un nuevo período de gobierno democrático y se deja atrás la dictadura militar. Es importante mencionar que en los años setenta se construyó, si cabe el término, el núcleo de la infraestructura petrolera del país donde se cuenta los campos o pozos petroleros, refinerías especialmente la de Esmeraldas, y el “Sistema de Oleoducto Transecuatoriano” (SOTE), que al momento lleva 34 años en funcionamiento.

En la siguiente década de los ochenta, la transición democrática emprende un camino difícil para su establecimiento por varias razones, entre ellas, la crisis económica que la acompaña a consecuencia del contexto económico -recesivo- mundial, debido al endeudamiento crónico de los países de la Región del cual no escapa Ecuador y por la implementación de un modelo aperturista con políticas económicas de corte liberal: “modernización”, “reducción” del tamaño del Estado, “substitución de importaciones”, etc., lo cual marcó el inicio del repliegue del mismo Estado frente a los temas asociados al desarrollo y en general en su función mediadora con la sociedad respecto a sus obligaciones en las áreas del desarrollo y manejo de sus recursos.

En esta década gobernó fugazmente Jaime Roldós debido a su fallecimiento, luego le sucedió Oswaldo Hurtado. A fines de los ochenta e inicios de los noventa gobernó Rodrigo Borja. Debido a la referida crisis económica y a los efectos en el plano político y social, a este período de los setenta y parte de los ochenta se le conoce como la “década perdida”, cuya metáfora es muy ilustrativa en cuanto se ajusta a la realidad que se vivió en América Latina, lo cual marca un retroceso fuerte

en las perspectivas de desarrollo, retroceso en el crecimiento económico y una creciente influencia omnímoda de las políticas de ajuste tuteladas por organismos multilaterales de crédito, y en particular por las inefables recetas dictadas por el Fondo Monetario Internacional.

El gobierno de Hurtado optó por varias estrategias para sobrellevar la crisis económica y su enfoque puso énfasis en los equilibrios macroeconómicos y en las exigencias del FMI, a la par, que se sentaron las bases, por medio del “gradualismo” económico, para una nueva forma de concebir la administración del Estado y de sus recursos que posteriormente recaería en lo que se conoce como neoliberalismo, ampliamente desplegado por la siguiente administración. Al gobierno de Hurtado le sucede el de León Febres Cordero (1984 – 1988) ubicado en la derecha política, quien dio paso en la administración pública del Estado a sectores privados, empresarios, banqueros e industriales con lo que se refuerza el crecimiento y dominancia de este sector, a la época, con intereses fuertemente vinculados en la administración del Estado, y en los recursos que este administra.

El esquema acogido por este gobierno fue el emergente modelo económico “neoliberal”: “[...] la problemática económica del país fue reenfocada y el papel del Estado definitivamente cuestionado, afirmándose la apertura al capital externo, la liberalización del mercado y a fe casi absoluta en los valores desarrollistas de la empresa privada”⁴³

Entre estos dos gobiernos (Hurtado – Febres Cordero) se consolida el surgimiento de grupos de poder enquistados en escenario del manejo petrolero. El período gubernativo de Febres Cordero termina en una creciente crisis social e inconformidad de la población.

En el gobierno de Rodrigo Borja (1988 – 1992) se inicia una reforma a la institucionalidad responsable del manejo petrolero del país (1989) y se hace la transformación de “CEPE” a Petroecuador, lo cual significa cambios cualitativos en el manejo de la actividad petrolera. En tanto, al final de la referida década de los ochenta los precios del petróleo se mantienen bajos provocando un flujo mermado de divisas a las arcas fiscales del Estado. Esta situación se modificaría progresivamente al entrar la década de los noventa.

El inicio de los noventa hasta el final de los mismos es importante tomar en cuenta para el análisis del tema de la tesis porque es el período previo a la concreción del proyecto del nuevo oleoducto, y por esta razón es necesario entender con énfasis este escenario previo. Veamos a

través de algunos elementos destacables para el análisis lo que acontecía en dicha década.

A inicios de la década del noventa, los precios del petróleo mejoran respecto a la década anterior, pero posteriormente, es decir, a mediados y finales de la referida década se tornan inestables con fuertes fluctuaciones⁴⁴:

“[...] existen grandes variaciones en el precio, llegando al punto mínimo en 1998 con un precio por barril de \$ 9,20. Después existe una recuperación en 1999 cuando el precio se eleva a \$ 15,50 por barril, básicamente este incremento se debe a la reducción de la producción mundial de petróleo, cuando la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) decide reducir la cuota de producción a 1,5 millones de barriles por día.” (Vizcaíno, 2005: 37)

Al tiempo que el contexto internacional (conflictivo por la primera guerra del Golfo entre Estados Unidos e Irak en 1991) mantiene un estado de tensión que se reflejará posteriormente en un sistemático incremento de los precios del petróleo aproximándose, abruptamente, a los \$25 a finales de los noventa e inicios del dos mil, esto a consecuencias del escenario geopolítico internacional, reflejado en la crisis del medio oriente, (mayor proveedor de petróleo a nivel mundial), y en las previsiones o al menos expectativas respecto al rendimiento decreciente de las reservas mundiales de petróleo.

Esta situación tendrá su reflejo en un ascenso progresivo en los precios del petróleo, a la par, que la demanda del petróleo va en ascenso, también, por la dinamización industrial concomitante con el consumo de petróleo y con el rol cada vez más activo en ese escenario de países con economía emergente tales como China, India, y Brasil en América Latina.

El gobierno de Rodrigo Borja se distanció de la política económica de su predecesor, y procuró al Estado una mayor participación en la dinamización de la economía. En este período se flexibilizó el tema laboral y se mantuvo una línea de manejo liberal de la economía. La crisis socioeconómica afectó, como siempre, la atención a los temas de desarrollo social y postergó sistemáticamente la obligación del Estado por superar la condición de pobreza de la gran mayoría de sus ciudadanos.

En el siguiente período gubernativo encabezado por Sixto Durán (1992 – 1996) se retoman la perspectiva empresarial en la administra-

ción pública del Estado, se insiste en la reducción y modernización del Estado y se abre el campo para incursionar en las privatizaciones, en una mayor articulación con el sistema de mercado y con la “libre empresa”, es decir, se retoma con fuerza el modelo neoliberal. Tal como se verá más adelante, se abre el camino para emprender reformas en el manejo petrolero de Ecuador, sin lugar a dudas, punto estratégico que desembocaría en la apertura hacia la participación de la empresa privada en la construcción del nuevo oleoducto. En esta etapa se crean las condiciones legales y administrativas para que eso suceda.

El corto período de gobierno de Abdala Bucaram (1996-1997), estuvo marcado por una inestabilidad política y social, así como repartos de los sectores estratégicos del Estado como parte de cuotas políticas, de hecho, uno de los ministerios más disputados fue el de Energía, Minas y Petróleo en el cual hubo un manejo corrupto. En este período se planteó crear un nuevo oleoducto (SOCO), pero el mismo no se concretó⁴⁵.

Ahora bien, de los datos revisados en este capítulo y en especial de Llanes (2006) -que en adelante se utilizará con recurrencia debido a su trabajo sistemático en el tema-, se puede entrever que los sucesivos gobiernos trataron de cambiar, sistemáticamente, los contratos petroleros con el objetivo de beneficiar, ante todo, a las empresas petroleras no estatales en detrimento del sector estatal.

“La modificación de los contratos petroleros la impulsó el gobierno de Sixto Durán Ballén, con el objetivo de cambiar los contratos petroleros de Asociación y de Prestación de Servicios por los de Participación. El cambio de estos contratos los realizaron en sus respectivos períodos: Sixto Durán Ballén, Abdala Bucaram, Jamil Mahuad y Gustavo Noboa, “en forma directa, sin licitación pública con las mismas compañías”, pues en los Contratos de Prestación de Servicios le generaron al Estado enormes pérdidas económicas, y en los de Participación se produjeron incumplimientos contractuales”⁴⁶

En la publicación, “OXY Contratos Petroleros” (2006) toma el autor referido el período (1999 – 2003) como eje de análisis y el mismo finaliza con el gobierno de Gustavo Noboa para recorrer, precisamente, en el análisis del manejo petrolero del país visto desde la política del sector, lo cual se trata adelante.

En función de esta entrada de análisis no me detendré en hacer una revisión historiográfica de la “herencia” del gobierno de Gustavo Noboa; el enfoque en este punto se plantea mucho más específico y se concentra en el manejo de las políticas petroleras por parte de los gobiernos de turno ya que es una parte fundamental para entender el contexto y los antecedentes de la construcción del oleoducto. En este sentido, pretendo mostrar a grandes rasgos, la problemática del manejo de las políticas petroleras previas porque permite vislumbrar el escenario en el que se “movió” el entonces proyecto OCP.

Por otra parte, es necesario resaltar que los cambios en los contratos y en la “política” petrolera permiten ver, desde el campo de análisis de la dimensión política en la sociología de Conflicto el entramado del manejo de las políticas, normativas y recursos del Estado, lo cual es abordado ampliamente por diferentes autores relevantes para el tema⁴⁷.

El contexto del manejo de la política petrolera antes del proyecto OCP

Llanes (2006) aborda el tema de los “contratos petroleros”, que es una de las partes de la trama y del contexto previo a la construcción del oleoducto; el manejo de este instrumento normativo deja entrever, la relación que existe entre las “regulaciones” y la relación del uso del instrumento con intereses específicos de grupos de poder. El referido autor inicia su análisis indicando que en el Gobierno de Hurtado se “impulsó la reforma a la Ley de Hidrocarburos con el objetivo de crear condiciones favorables para la participación de la inversión extranjera”. De igual forma, y años más tarde se haría una nueva reforma a la Ley de Hidrocarburos en 1999 para dar paso a la construcción del nuevo oleoducto, es decir, se evidencia una conexión entre gobiernos, orientación política y articulación con intereses específicos y dominantes que se han mantenido como un continuum, porque se puede advertir, siempre ejercieron presión, de las más variadas maneras, en cada gobierno de turno.

En la antes referida publicación, se menciona la existencia de dos tipos de contratos petroleros: el primero que se manejaba desde el Gobierno de Hurtado bajo la forma de “Contrato de Prestación de Servicios”. Durante el Gobierno de León Febres Cordero, se mantuvo y se suscribieron varios contratos bajo esta modalidad con empresas ex-

tranjeras, lo cual implicó la adjudicación de campos en la región amazónica y en la costa. Desde el Gobierno de Durán Ballén, y los sucesivos⁴⁸ los contratos fueron de otro tipo, es decir, de “Participación”. Un análisis detenido del contenido de esta división en los tipos de contratos y su repercusión en los ingresos de la renta petrolera es analizado en el libro “Detrás de la cortina de humo” editado por Bustamante (2007) y en Arauz (2006), de los cuales se puede sacar conclusiones respecto al aporte inicial positivo del sector petrolero al desarrollo económico del país y su posterior limitación en el impacto del desarrollo del país a consecuencia de un errático manejo de las políticas petroleras, pero también de la coyuntural variabilidad del aporte económico de la actividad petrolera sujeta al vaivén de los precios internacionales de este recurso.

Varios de los autores revisados⁴⁹ coinciden en que las reformas petroleras implementadas durante el Gobierno de Sixto Durán, sentaron las bases para un manejo ampliamente abierto a la perspectiva neoliberal, y a una mayor participación de la empresa privada en diferentes áreas estratégicas del Estado.

Como se podrá advertir, en el manejo petrolero se da una suerte de ciclo entre el estatismo y la apertura a un manejo menos estatal del recurso, lo cual obedece a intereses dominantes y a coyunturas de la tendencia política de cada gobierno, es decir, históricamente se percibe un manejo errático y voluntarioso del tema porque nunca se ha constituido como una política de Estado como tal con objetivos claros y definidos, sino que cada gobierno a manipulado su “política” para adecuarla a los intereses dominantes, porque es importante mencionar que detrás de cada gobierno, ciertamente, hay grupos de interés que presionan por sacar las mayores ventajas a partir de los recursos del Estado.

En el Gobierno de Sixto Durán, por ejemplo, afirma Llanes: “no solamente que se Reformó la Ley de Hidrocarburos, sino que se puso en vigencia todo un marco jurídico destinado a transferir los bienes públicos al capital privado”. Durante el referido gobierno, y siguiendo la misma fuente se da el dato que en esta administración se crean los Contratos de Participación y los Campos Marginales (antes en manos del Estado) para exploración y explotación del recurso, al tiempo que creó condiciones para generar beneficios a las empresas privadas: “Las compañías, de acuerdo a las Bases de Contratación [...] tienen una partici-

pación entre el 81,5 y 87,5% de la producción diaria de los yacimientos, y el Estado recibe la diferencia, entre el 12,5% y el 18,5%”.

A la par crean incentivos tributarios de amplio beneficio para las empresas. En el manejo de la política exterior petrolera se da un cambio pues Ecuador se retira de la OPEP. El manejo de la política petrolera de Sixto Durán, fue a todas luces favorable a los intereses de las compañías petroleras foráneas y esta fue, si cabe el término, la base que abrió la posibilidad de delinear el interés en un proyecto como el de OCP que potenciara la actividad petrolera.

Durante el gobierno de Abdala Bucaram, hubo cambios en los estatus contractuales de dos empresas petroleras cuya consecución se puso en duda por el procedimiento que se consideró ilegal. En el siguiente gobierno de Fabián Alarcón, según los datos del mismo autor, se elimina “las áreas estratégicas de la economía que contemplaba la Constitución Política del Estado de 1979” y menciona que este cambio legitimó la ilegalidad de las reformas a la Ley de Hidrocarburos generadas durante el período gubernativo de Sixto Durán Ballén.

Así, se puede apreciar que durante algunos gobiernos se dieron muchas reformas a la Ley de Hidrocarburos, y lo que se puede deducir es que dichas reformas estuvieron claramente encaminadas a favorecer intereses específicos del sector no estatal, como se ha mencionado antes. El objetivo de esto era crear mayores oportunidades de aprovechamiento del recurso a las empresas privadas, y el “manejo” de la ley se manifiesta como un núcleo importante de la dimensión política que, a posterior, se conecta con la preparación del terreno para incursionar en la construcción de un nuevo oleoducto, pues cualquier modificación de la ley se topaba sistemáticamente con la limitación en la infraestructura de transporte petrolero, considerado un aspecto clave para potenciar esta actividad extractiva.

Ahora bien, los intentos de este manejo orientado a las intereses no estatales, según el autor en referencia, fueron más que evidentes en el gobierno de Alarcón, Noboa y Gutiérrez, pero las presiones sociales, e igual, de los otros grupos que han disputado históricamente el control del manejo de este recurso, hicieron contrapeso y limitaron, también, estas intenciones, lo cual muestra otra de las vertientes o campos de análisis que pueden ser ampliamente entendidas a partir de la ubicación de actores en la dimensión ética del esquema analítico propuesto en la sociología del conflicto.

En el gobierno de Mahuad se hicieron cambios en algunos de los contratos petroleros en bloques específicos y campos marginales sin que las empresas arriesgaran en la exploración, pues el Estado a través de Petroecuador, ya lo había realizado, es decir, se entregaba campos para la explotación. De igual forma, Llanes, pone en evidencia que los convenios que se realizaron entre la estatal petrolera y las compañías privadas favorecieron ampliamente a estas, perjudicando en el transporte de crudo que se llevaba por el SOTE, debido a las mezclas entre crudo pesado y crudo liviano. La opinión de este autor, que bien valdría contrastar con otras, es que en general se hizo un manejo tendencial del recurso y nuevamente se pone en evidencia el hecho de que a pesar de que hay matices en las “políticas” petroleras, las fuerzas que han presionado sistemáticamente en los diferentes gobiernos, condujeron a una continuidad en el manejo petrolero que revela la prevalencia del interés privado por sobre el interés estatal.

La pregunta qué se puede hacer al respecto es ¿qué sectores o fuerzas fácticas estaban detrás de varios períodos?, y ¿qué permitió que tenga continuidad ese manejo petrolero en gobiernos que habían sido inestables, desestructurados, y en ocasiones sin línea común de filiación política?; son interrogantes que bien valdría la pena analizar en otro tipo de investigación.

El otro planteamiento que se puede hacer es el que más allá de los intereses locales, hay fuerzas de presión devenidas del mismo modelo de conducción económica adoptada por los distintos gobiernos, nada más que con matices respecto a determinadas acciones políticas y el favorecimiento de grupos de poder cercanos a cada gobierno. En todo caso, lo importante de destacar, a manera de hipótesis, es que este escenario favoreció la concreción del nuevo oleoducto. De hecho, cuando se llamó a oferta este proyecto pugnó el Estado con las empresas privadas que habían ganado campo por las diferentes “políticas” petroleras implementadas desde el Estado.

En el gobierno de Gustavo Noboa, se concreta la construcción del nuevo oleoducto, y en términos generales la política petrolera es similar a la que se venía dándose desde el gobierno de Durán Ballén, lo que se hizo, según el autor tomado como fuente de referencia, fue generar “iniciativas orientadas a consolidar los intereses de grupos de poder vinculados al negocio de los hidrocarburos”.

En adelante son de mucho interés los datos porque explican el contexto mismo en el que se gestó el proyecto OCP:

“En primer lugar, se reformó la Ley de Hidrocarburos para entregar de forma directa y sin licitación la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), favoreciendo a un grupo de compañías que controlan la industria de los hidrocarburos –exploración, explotación, transporte y comercialización. Para el efecto: el Ejecutivo conformó una “comisión sin rostro” para dotar de “transparencia” al proceso de adjudicación del OCP” (Llanes, 2006: 35).

Lo cual tras el aparente velo de transparencia, dice el autor, es fuertemente criticable porque no hubo mayor beneficio para el Estado, y por el contrario, se le perjudicó. En el gobierno del que se está hablando hubo una gran cantidad de cambios de contratos y se puso mucho énfasis en este aspecto del manejo petrolero, pues al parecer el interés en particular de esta administración se concentró, con fuerza, en esta área estratégica de la economía del país, quizá motivado por una creciente y sostenida alza en los precios del petróleo.

“Para los años siguientes el precio tiende a incrementarse, especialmente desde el 2002 debido a los ataques a Estados Unidos del 11 de septiembre del 2001 y la decisión de Washington de invadir Afganistán y luego Irak. Finalizada la guerra contra Irak los precios se han mantenido altos, debido especialmente a la incertidumbre del mercado con respecto al futuro manejo de las reservas de crudo de Irak (las segundas reservas comprobadas del planeta, después de Arabia Saudita)” (Vizcaino, 2005 :37).

Es evidente que por este fenómeno de alza de los precios del petróleo se intensificó el interés de los grupos enquistados, dentro de los distintos gobiernos, para sacar la mayor ventaja posible; esta, fue la tónica de gobiernos que defendieron intereses sectoriales y no los intereses comunes del país. En este mismo contexto, el gobierno de Lucio Gutiérrez potenció la línea de privatización de los recursos hidrocarburíferos, a través de manejos irregulares, y pretendió por varias ocasiones manipular los Reglamentos de la Ley de Hidrocarburos para favorecer a las empresas que operan en el distrito petrolero de la Amazonía ecuatoriana. Esta misma línea de comportamiento fue más allá del periodo de construcción del oleoducto:

“[...] Con este procedimiento -modificaciones a los reglamentos-, Gutiérrez buscaba una vía rápida para satisfacer los intereses de grupos de poder vinculados al negocio de los hidrocarburos, para lo cual puso en vigencia una serie de Acuerdos Ministeriales y Decretos Ejecutivos orientados a institucionalizar el despojo de los bienes públicos” (Llanes, 2006: 38).

De hecho, según el mismo autor, envió al Congreso Nacional de la época dos proyectos con carácter urgente en materia económica para reformar la Ley de Hidrocarburos en la que proponía reformas al Contrato de Asociación que facilitaba la entrega de campos con reservas probadas, como las del campo ITT y reformulación al Contrato de Servicios Específicos para entregar, según el autor referido, al capital internacional las actividades de la industria petrolera a cargo de Petroecuador; de igual forma, pretendió entregar los Campos Marginales. En otra materia, planteó la devolución del IVA a las compañías petroleras con procedimientos que se perfilaban irregulares.

Según el autor referido, para financiar el Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva, y Reducción del Endeudamiento Público (FEIREP): “[...] la ley dispuso que este fondo se constituya con los ingresos generados por la transportación de “petróleo crudo” que el Estado realice por el OCP”, y agrega que esto no se cumplió porque no había la existencia suficiente de crudo que permitiera la transportación por el oleoducto privado.

A este hecho, el autor liga otras problemáticas asociadas al tema del favorecimiento a los tenedores de papeles de la deuda pública interna, en relación con un manejo “artificial” de la calidad de los crudos, y del crudo pesado en particular. En este contexto, se inicia una disputa entre Petroecuador y OCP Ecuador S. A. por la transportación del crudo del Estado a través del nuevo oleoducto, disputa que se liga con los precios de transportación y con el problema de las mezclas de crudos de diferente calidad.

Lo que se quiere evidenciar es que en cada gobierno la Ley de Hidrocarburos y el manejo petrolero ha sido un nodo en el cual se han articulado intereses muy fuertes, y al mismo tiempo ha sido el “compás” de tensiones, disputas, conflictos y luchas por el acceso al manejo de este recurso, lo cual como se advierte a grandes rasgos, es una tónica constante que va, históricamente, más allá del período en el que se

construyó el oleoducto. La ecología política permite, entre otras entradas, aproximarse a una lectura de los campos en disputa, sus contextos y las incidencias que esto tiene a diferentes escalas y con diferentes actores sociales lo cual, muchas veces, se devela en los conflictos.

Una de las preguntas de investigación está relacionada con saber, precisamente, cómo este “contexto” afecta la suerte de poblaciones que por una u otra razón se vinculan de forma directa o indirecta en la problemática, es decir, ¿qué pasa cuando hay una decisión tomada desde los administradores de turno del Estado respecto a un proyecto, tal como el de la construcción del oleoducto?, y se implanta, por así decirlo unilateralmente y bajo un contexto dominado por intereses sectoriales. Posiblemente hay muchas respuestas, así como muchas más preguntas; algunas de ellas se absuelven en el capítulo tercero que es el estudio comparativo del caso entre Mindo y El Reventador.

En el siguiente ítem, nos adentraremos en una parte del objeto de estudio, pues es necesario hacer este corte para entender la conexión del contexto de la política petrolera, con la viabilización de este proyecto y los elementos iniciales del conflicto.

El contexto de construcción del nuevo oleoducto de crudos pesados:

El aperturismo desatado desde el gobierno de Sixto Durán y el fracaso del proyecto SOCO planteado en el Gobierno de Bucaram, se encadenó con la orientación, igualmente aperturista, del gobierno de Jamil Mahuad (1998 – 2000) que es donde se da paso a la construcción del nuevo oleoducto para la transportación de crudo pesado. Fue, también, en parte, una respuesta a la crisis petrolera de los ochenta, al argumento del deterioro de la infraestructura petrolera estatal y a la perspectiva de ampliación del potencial extractivo lo cual ha sido, sistemáticamente, interés de varios gobiernos en vista de la creciente necesidad de recursos financieros para el Estado.

El proyecto inicia en Febrero de 1999 con la presentación de una propuesta al gobierno de turno por parte de seis empresas petroleras transnacionales que operan en Ecuador, y parte de las cuales posteriormente conformarían el consorcio OCP Ltda. En Marzo de ese mismo año el entonces Ministro de Energía y Minas (René Ortiz) suscribe una carta de entendimiento con las empresas en la que se comprometen, es-

tas últimas, a realizar los estudios técnicos para el proyecto de construcción de un nuevo oleoducto (Reyes, Ajamil, 2005).

En noviembre de 1999, y en medio de una creciente inestabilidad económica y política, el entonces ministro secretario de Economía y presidente del CONAM (Consejo Nacional de Modernización), Xavier Espinoza, menciona durante una entrevista⁵⁰ que tiene por estrategia modernizar el sector petrolero para hacer frente a las continuas crisis del Estado, y se enfoca en cinco puntos inscritos dentro de la “modernización del sector petrolero” y que son claves para entender el tema planteado en la tesis: “[...] construir el OCP, reactivar la producción de Petroecuador, la exploración y explotación del Ishpingo Tambococha Tiputini (ITT), la exploración suroriental y la incorporación de capital privado a la refinería La Libertad [...]” Estas reformas, como puede advertirse, se concentran en el sector petrolero, es decir, ratifican esa dependencia crónica de la actividad extractiva. Este es un núcleo de interés que ha “sobrevivido” a distintos gobiernos, incluido el actual del Economista Correa, pues el OCP, metafóricamente, hablando es la llave que posibilita abrir esas alternativas, especialmente, la relacionada con el campo ITT y posiblemente con Pungarayaku.

El 21 de Enero del 2000 Mahuad es derrocado, sin embargo, la propuesta no pierde continuidad y el nuevo gobierno encabezado por el entonces Vice Presidente Gustavo Noboa, luego de recibir el informe técnico de las empresas, da paso en Agosto de ese mismo año a la convocatoria en la que se invita a participar con propuestas técnicas para la construcción del nuevo oleoducto.

Al final del plazo dado en la convocatoria quedan tres grupos de interés: la empresa Williams Internacional (que construyó el oleoducto transecuatoriano), el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (asociado con la empresa Andrade Gutiérrez) y el consorcio OCP⁵¹. Tras fuertes tensiones manifestadas en conflictos de interés y protagonizadas por los grupos oferentes, prevalece la propuesta presentada por el consorcio OCP y se adjudica a dicha empresa la construcción del nuevo oleoducto. A partir de esto se despliega una gran campaña mediática para difundir las bondades del proyecto, los potenciales beneficios para el país y el gran despliegue del argumento tecnológico del ducto, causando un efecto de amplia expectativa en Ecuador, y en particular en las áreas por donde estaban trazadas las rutas propuestas para la construcción del ducto.

El 26 de Junio del 2001 se inicia, formalmente, el plazo de dos años para ejecutar el proyecto⁵². La propuesta técnica del trazado del oleoducto planteaba, como se mencionó, dos rutas alternativas, sur / norte, para su construcción. La primera ruta proponía la entrada por el sur de Quito afectando áreas protegidas (Reserva Antisana), pasaba muy próxima al proyecto Mica-Tambo de abastecimiento de agua a la capital, y afectaba a una población bastante grande (aproximadamente 260.000) asentada al sur de la ciudad (OCP, s.f.: 2).

La ruta norte, que es la que finalmente prevaleció, planteaba el ingreso por el norte de Quito, pasaba cerca de Papallacta otro de los sitios importantes de abastecimiento de agua para el norte de la ciudad, afectaba áreas protegidas (Reserva Cayambe-Coca) y el Bosque Protector Mindo-Nambillo de propiedad mixta (Estado/Propietarios privados) y afectaba, según indica el documento del consorcio, en menor cantidad a pobladores asentados al norte del distrito metropolitano.

Esta disyuntiva de las rutas (sur/norte) y la posterior afirmación del trazado para la construcción del oleoducto por el área de Mindo dio inicio a un primer tipo de conflicto de contenido predominantemente ambiental que se manifestó en la defensa del Bosque Protector Mindo-Nambillo considerada un área ambientalmente sensible por su alta biodiversidad. Paralelamente, la construcción del oleoducto que inició en Lago Agrio (Agosto del 2001) dio, por su parte, origen a otro tipo de conflicto de un contenido distinto y predominantemente económico-político. La gran mayoría de los conflictos generados a lo largo de los 500 kilómetros de construcción de esta infraestructura tuvieron ese carácter coyuntural; sin embargo, el conflicto de Mindo tuvo a más de esto un matiz particular en la medida que se levantó una campaña intensa a diferente escala y con distintas estrategias articuladas a lo local - nacional e internacional en oposición al proyecto con el argumento, menos coyuntural, de la defensa del medio ambiente que, como se puede constatar hasta la actualidad, se proyectó en la red global (Internet) con mucha fuerza⁵³.

Al final de la construcción (Agosto del 2003)⁵⁴, el oleoducto atravesó por 31 parroquias, 11 cantones, cuatro provincias (Sucumbíos, Napo, Pichincha y Esmeraldas) y su costo se aproximó a los 1.400 millones de dólares. Luego de concluida la obra y de entrar en funcionamiento, los conflictos disminuyeron progresivamente pero no desaparecieron del todo. La puesta en operación del oleoducto nuevo, por otra

parte, dio paso a nuevas tensiones y conflictos que han surgido en determinadas coyunturas y que serán revisados en el tercer capítulo.

La magnitud de la construcción de la nueva infraestructura y los primeros conflictos desatados hicieron que los medios de comunicación prestaran interés en el desarrollo del proyecto; dicha situación produjo abundante información que es una fuente de análisis de los acores del sector de opinión pública lo cual demostró posiciones encontradas en distintos medios de comunicación, pero también, demostró una información que favorecía los intereses de las empresas que conformaron, en su momento, el consorcio OCP.

El desarrollo del proyecto y los momentos del conflicto emergentes:

La lectura diacrónica de la ejecución del proyecto OCP nos permite, en esta parte de la tesis, identificar cuatro momentos básicos relacionados con la activación del conflicto:

El primer momento del conflicto: la pugna institucional y las primeras respuestas sociales.

Respecto a la licitación y al potencial beneficio del OCP, algunos de los datos revisados apunta a señalar que en el mejor de los casos y manteniéndose la producción regular de petróleo, no podría transportar los 300.000 barriles diarios, y en esta medida la infraestructura estaría subutilizada.

La opinión pública cuestiona el proceso de concurso de ofertas y el criterio técnico respecto de la capacidad de la infraestructura en relación con lo que podría transportar, pues se prevé una subutilización. Se evidencia un intenso conflicto de intereses. Los actores de este primer momento del conflicto fueron: Estado (Gobierno) – empresas oferentes – sectores de opinión pública y económica (en esta parte se advierte una primera dimensión política del problema). Se unen agrupaciones sociales (Febrero del 2000) en torno a la discusión de la posible ruta del oleoducto pues se conoce que una de las vías propuestas pasaría por el bosque protector Mindo-Nambillo, considerado un sitio de bosques primarios, de una importante biodiversidad y una zona reconocida internacionalmente como “*Important Bird Area*” (IBA) por la gran presencia y diversidad de aves.

El segundo momento del conflicto: ¿ruta norte o sur?

Una vez que el consorcio OCP gana la convocatoria se pone en discusión el trazado del nuevo oleoducto (ruta sur – norte) y al final optan por la construcción del mismo en la ruta norte. Esta ruta seguiría paralela al SOTE, y pasaría por los dos sitios de estudio, en un caso por El Reventador, y en el segundo por la cumbre del Bosque Protector Mindo - Nambillo.

La decisión de construir el oleoducto por la ruta norte fue uno de los detonantes principales del segundo momento del conflicto, pues la población de Mindo y organizaciones ambientales (nacionales) rechazaban ese trazado que afectaría la integridad de dicha área protegida, y era también a juicio de los llamados ecologistas o ambientalistas, según la adscripción que les hizo la prensa nacional a las personas que reclamaban la defensa del Bosque, un mal antecedente para las áreas protegidas del país ya que se vulneraba su estatus. Este fue a breves rasgos y de manera retrospectiva, uno de los núcleos principales del conflicto por la magnitud de la respuesta, conjuntamente, con el que se presentó en Sucumbíos en los cantones Lago Agrio, Gonzalo Pizarro y en Esmeraldas, no por las mismas razones cuanto por las negociaciones locales para el paso del oleoducto por el denominado “derecho de vía”, y en este momento se buscó, a través de los gobiernos locales, sacar la mayor ventaja posible.

El tercer momento del conflicto: ruta norte, el conflicto central se destapa.

Al prevalecer el criterio de la ruta norte, se inicia el tercer momento del conflicto cuya fuerza, en cuanto manifestación colectiva, estaba concentrada en la Parroquia Mindo, pues el trazado por esta ruta estimuló la posición de defensa del medio ambiente y por extensión de la misma población de Mindo que depende en gran medida de los atractivos que brinda el área de influencia del Bosque Protector, ya que hay una alta biodiversidad, de hecho, un año antes del inicio de la construcción del nuevo oleoducto fue declarada, por reconocimiento internacional, como IBA. Los actores del tercer momento del conflicto fueron: el Estado (gobierno de turno) – el consorcio – la empresa constructora Techint, la población de Mindo, y agrupaciones ambientalistas del país liderados por Acción Ecológica, y otras organizaciones ambientales (ONG) locales e internacionales.

El cuarto momento del conflicto: de la Amazonía a la Costa levantando el polvo.

El plazo para la construcción del oleoducto se inicia el 26 de Junio del 2001 y de esa fecha en adelante se generan varios acuerdos con organismos del Estado (Policía Nacional – Ejército) para coordinar la seguridad que el consorcio de empresas demandaba a fin de ejecutar la obra. La construcción del nuevo oleoducto va hasta Junio del 2002 y en el transcurso de un año sucede el grueso de los conflictos a lo largo de toda la ruta, con especial fuerza en Esmeraldas, Mindo, El Reventador y Lago Agrio. En el año 2003 entra a operar el OCP.

En esta parte se distinguen dos elementos del conflicto generado por la construcción del ducto: el primero se relaciona con el proceso de negociaciones para configurar el “derecho de vía” con los diferentes propietarios de tierras por donde estaba trazado el oleoducto y el segundo elemento que son la serie de conflictos, de diversa índole, que se dan en la etapa de construcción del oleoducto con actores institucionales.

Esto, como se puede advertir, se vincula con el hecho de que los conflictos tienen una secuencia, un desarrollo y obviamente contenidos. La sociología de conflictos permite observar, si cabe el término, las estructuras y la dinámica de los mismos. Estas observaciones preliminares llevan a su vez a retomar algo de la sociología de la acción, pues como se recordará, este enfoque teórico plantea que los conflictos generan cambios y al interior de estos se revelan actores sociales cuyo rol puede desplazarse en uno o varios de los cuatro ejes analizados (éticos – económicos – políticos – sociales), pues bien, el estudio comparativo de las respuestas generadas nos ayudará a entender esta dinámica.

Notas

- 38 Por ejemplo en Martínez Alier (2004) y Bebbintong (2007), entre otros.
- 39 Precisamente en el 2007, Ecuador reingresa como miembro activo al cartel del petróleo luego de quince años de haberse retirado de la OPEP. Esto coincide, una vez más, con una visión reivindicatoria de la soberanía del Estado en relación con el recurso, su manejo futuro y el escenario internacional en el que ha planteado su reingreso con el compromiso de incremento en la producción petrolera de cara al cumplimiento de una cuota mínima requerida por el cartel.
- 40 Fuente: www.dlh.lahora.com.ec/paginas/historia/historia11f.htm (Visitada en: 24/09/08)
- 41 Naranjo (2006) da una definición del término “El término “enfermedad holandesa” fue utilizado por la revista “The Economist” en 1977, para describir los fenómenos de desindustrialización ocurridos en Holanda años antes [...]. En los modelos de la enfermedad holandesa, se analiza una paradoja que hace referencia al “impacto positivo”, “que constituye el flujo de divisas provocado por un auge sectorial, como el petrolero por ejemplo, sin embargo, puede causar problemas de ajuste y de cambios estructurales radicales en una economía”. Acosta plantea la existencia de cinco tipos de efectos negativos y cuatro de ellos están, según el autor referido, insertos en la economía Ecuatoriana.
- 42 En 1976 es depuesto el Gral. Rodríguez Lara por el Triunvirato conformado por tres generales de distintas ramas de las Fuerzas Armadas. De una perspectiva nacionalista se pasa al lado opuesto, a una perspectiva aperturista y liberal en el sentido económico del término.
- 43 Fuente: www.dlh.lahora.com.ec/paginas/historia/historia11f.htm (Visitada en: 24/09/08)
- 44 Anexos Gráfico 1: “Evolución del precio del crudo (1996 – 2007)”.
- 45 Fuente: comunicación personal con el Dr. Iván Narváez, y referencia al SOCO mencionada en el artículo publicado en Diario El Comercio, en la Sección A, del 04/08/2001 “El oleoducto y la ruta Mindo”
- 46 Fuente: www.asambleaconstituyente.ec/asamblea/index.php?option=com_content&task (visitada: 22/10/2008)
- 47 Acosta, 2004, Arauz, 2004, Bustamante, 2007, Gordillo, 2004, Fontaine, 2004, Larrera, 2004, Llanes, 2006, Ortiz, 2004, etc.
- 48 Bucaram (1996-1997), Mahuad (1998-2000), Noboa (2000-2003), Gutiérrez (2003-2005), Palacios (2005-2007).
- 49 Gordillo 2004, Llanes 2006, Reyes, 2005.
- 50 Diario El Comercio, Secciones A1 y B3, del lunes 29 de noviembre de 1999.
- 51 El Consorcio estaba constituido en ese momento por ARCO (AGIP), CITY (ENCANA), OCCIDENTAL (OXI), ORIX (PERENCO), YPF (REPSOL YPF), y KERR MCGEE, y la propuesta consistió en un costo de construcción de 594MM\$ (1.100 millones de dólares) y una capacidad de transporte de 356 mil barriles diarios de crudo avalado por garantías internacionales. (Reyes, Ajamil, 2005)
- 52 El Comercio, 26/06/2001
- 53 En el motor de búsqueda Google con los parámetros: OCP-Ecuador-Conflictos, se despliegan 15.700 registros relacionados directa o indirectamente al tema (revisión al: 15/11/2008)
- 54 El Comercio 21/08/2003

CAPÍTULO III

DE MINDO AL REVENTADOR, EL CONTEXTO Y EL ESCENARIO RETROSPECTIVO

Un aspecto relevante para entender los conflictos socio ambientales, a más de tener en cuenta la evolución del conflicto visto a través de una cronología⁵⁵, es también, el análisis del contexto socioeconómico donde el problema emerge y se expresa. Si bien es cierto, el problema y su temática como se ha visto tiene conexiones a diferentes escalas, es evidente, que los resultados de esa cadena de vínculos tiene su expresión más tangible en los sitios donde recaen las acciones que desembocan en el conflicto y en las dinámicas en las que deriva, y en esa medida es importante tomar en cuenta dicho contexto desde una entrada descriptiva de su situación a través del análisis, en este caso, comparativo de sus indicadores y de la revisión retrospectiva del conflicto que es lo que contiene este tercer capítulo.

En este sentido es importante aproximarse desde una visión descriptiva y panorámica al contexto de cada población de estudio para entender adecuadamente el desarrollo y la respuesta generada en el conflicto; por otra parte es útil para revisar la evolución del conflicto en forma cronológica. Esto posibilita ver las distintas dimensiones del conflicto y sus conexiones entre los distintos actores y lógicas de acción consideradas en el análisis de la sociología de conflicto.

Entre Mindo y El Reventador: el medio y su historia

Mindo es una parroquia del Cantón los Bancos, provincia de Pichincha; esta al noroccidente de Quito, aproximadamente, a setenta y cinco kilómetros de la capital. Geográficamente se ubica en las siguientes coordenadas: 00°03.048 Sur y 078°46.438 Oeste. Esta a una altura de 1.177 m.s.n.m⁵⁶.

Algo que llama la atención de Mindo, a parte del paisaje hermoso y bucólico de la zona, es la promoción de servicios turísticos que reflejan una percepción local interesante: antes de llegar al centro poblado, y en algunos de los anuncios de hospedaje y de servicios se ubican letreros que dan la idea de estar entrando al “séptimo paraíso”, de haberse alejado de la vorágine citadina o de un mundo caótico y perverso “fuera de babilonia” y se ofrece, sitios donde se puede “vivir despacio” (propuesta análoga a la tendencia del *“slow down”* de deceleración del ritmo de vida del hábitat urbano); así se podría recoger varios ejemplos, pero bastan estos para ilustrar la idea de que Mindo es considerado, localmente, un mundo aparte del común de los mundos, donde reina la naturaleza y donde el ser humano coexiste en tranquilidad y buena relación con su entorno social y natural. Es una primera impresión que deja el contexto local y de entrada enfatiza su opción por una actividad considerada, relativamente, sustentable como es el ecoturismo.

De hecho, cuando inicié el trabajo de campo me encontré con un joven quiteño que huía constantemente de los mundos recalitrantes de la ciudad y viajó por muchos países buscando un lugar donde se pudiera vivir a plenitud el vínculo con lo natural y en Mindo encontré una ínsula en medio de un océano turbulento y amenazante para una “nueva” forma de vida alejada del pandemónium del consumismo y, obviamente, de sus cruentas derivaciones.

En gran medida las personas que llegan a Mindo tienen en común la idea de encontrar una experiencia distinta a una usual y expansiva forma de vida, en la que puedan tener por contraste una relación, aunque fugaz, estrecha con el mundo natural. Es un aspecto tangible de un comportamiento que bien podría estar inscrito dentro de los elementos que, hemos visto, caracterizan la ecología política.

El actual Mindo, y la zona del noroccidente de Pichincha e Imbabura, era un enclave de la población, pre inca, Yumba asentada en lo que ahora se conoce como “bosque nublado” o “bosque de neblina monta-

no”, según la clasificación de Rodrigo Sierra. Esta etnia ya extinta hace algunas centurias que sobrevivió la conquista inca y luego la española hasta bien adentrada la colonia se caracterizó, como lo indica Frank Salomon⁵⁷, entre otros etnohistoriadores, en el intercambio de productos con los grupos étnicos del área septentrional de los andes ecuatorianos; esta rápida descripción para indicar que este hábitat fue colonizado y transformado desde mucho tiempo atrás, pero que debido al tipo de relación con el ambiente pudo conservarse hasta nuestros días. Los bosques que rodean los “*cununcos*” (caminos pre incas), son testigos de una época en la que sus antiguos habitantes interactuaron con el medio ambiente pero provocaron un mínimo de transformaciones, esta etnia era predominantemente cazadora, recolectora y se abastecía de una agricultura itinerante, todas estas actividades adaptadas al entorno natural.

La Historia reciente de Mindo, según los testimonios entramados en la tradición oral, viene de la ocupación de la zona (Nanegal – Mindo) por parte de tres familias que consolidaron la tenencia de latifundios en forma de haciendas⁵⁸; posteriormente entraron otras familias y junto con ellos trabajadores con distinta procedencia pero especialmente de Esmeraldas y Colombia; de estas familias queda aún poca descendencia en el actual poblado.

El área de Mindo se caracterizó en el pasado por ser una zona agrícola donde se transformó grandes extensiones de bosque por plantaciones de caña de azúcar, superficie de cultivos agrícolas de ciclo corto y superficie de pasto para ganadería; sin embargo, dado el aislamiento de la zona⁵⁹ y su accidentada topografía, una considerable superficie de bosques poco intervenidos pudo conservarse en buen estado. El hecho de estar en un área cordillerana bastante accidentada ayudó a este aislamiento y por lo tanto “posibilitó” la conservación de muchos de sus recursos naturales que ahora son un icono del actual Mindo.

Una de las características importantes que destacan los habitantes antiguos de Mindo es que no requerían de circulante para subsistir, pues se proveían del mismo medio para cubrir muchas de las necesidades básicas, pero también, el aislamiento impedía un intercambio comercial, en gran medida. La economía para la gran parte de sus habitantes era predominantemente de subsistencia, solo los hacendados estaban articulados a una economía de mercado y extraían, artesanalmente sus productos y para el transporte usaban las bondades de la “in-

dustria arriera”⁶⁰, es decir, el uso de caballos y mulares para “sacar” los productos que el medio “proporcionaba”, entre los que se contaba con la madera del viejo bosque nublado. Se puede prever que el bosque tubo, también, históricamente distintos usos.

Desde la reflexión que se puede hacer a partir de la ecología política la intensidad de uso del entorno natural cambió progresivamente y fue en aumento desde la época de los yumbos, colonización inca, colonización española, colonia, época republicana hasta el presente. Es una constante que desemboca en articulaciones distintas frente al medio ambiente, pero también de cara a posiciones -problemática- que han cambiado radicalmente conforme se han dado también, valga la redundancia, cambios en el tipo de relacionamiento con el entorno determinado, a su vez, por distintos tipos de economía.

Haciendo uso de una mirada retrospectiva, Mindo era un conjunto de haciendas con una población pequeña y, desde cierto punto de vista, cautiva dentro de un sistema clientelar y de un medio geográfico que funcionó en su tiempo como una ínsula. Ese fue el núcleo inicial de la actual parroquia de Mindo.

Según los testimonios recogidos de los viejos pobladores, que aún sobreviven, este asentamiento fue asolado por dos ocasiones a fines del siglo XIX e inicios del XX; en el un caso por una gran inundación y deslave del río del mismo nombre y en el otro caso por la propagación de la fiebre amarilla que diezmo a su pequeña población. Estos dos acontecimientos, también, expulsaron una parte de la población. A partir de los años cuarenta, con los pocos habitantes que quedaron, se reinicia el poblamiento; las haciendas aún pervivían, pero la población ya no estaba tan sujeta a esa dependencia.

En esa década, según los testimonios registrados, llega un grupo de austriacos, checos y alemanes, probablemente huyendo de la segunda guerra mundial, pero nuevamente salen del lugar por las condiciones inhóspitas y el aislamiento, pues mencionan, que tenían intención de aplicar los conocimientos de sus lugares de origen para transformar el agreste paraje y domesticarlo, pero el gobierno de turno no atendió los requerimientos de los lugareños y migrantes para abrir una carretera y terminaron su peregrinar en otros lados, dos de las familias de extranjeros que llegaron en la mencionada época se quedaron en la actual cabecera cantonal de Los Bancos.

Recapitulando, la comunidad de Mindo vivía de la hacienda, de las propias actividades productivas en las pequeñas parcelas que lograron obtener y se mantienen sistemáticamente aislados. Esta situación comienza a transformarse a mediados de la década de los setenta pues llegan nuevos habitantes y también Mindo forma parte del destino del éxodo de lojanos que huían de la sequía, esta migración en forma intermitente se da hasta la década de los ochenta.

Entre los años setenta y ochenta, el pueblo comienza a consolidarse y Mindo ya no es tan dependiente del trabajo en las haciendas, de hecho, estas se habían fragmentado por efecto de la repartición de herencias, quedando unos pocos miembros de las familias Garzón, Goetchel y Aguirre con tierras en la zona; la familia Goetchel tiene propiedades hasta la actualidad y un establecimiento de hospedaje turístico en las proximidades de la población.

Mindo crece paulatinamente, y en 1982 había una población considerablemente grande compuesta por 1542 personas, según los datos censales de la época⁶¹, a pesar de que había un mejor acceso a la zona, las características del medio, como los terrenos con pendientes fuertes favoreció, relativamente, la conservación del bosque y parte de su entorno, pero en esta misma década de los ochenta comenzaron a llegar al área de Mindo nuevos actores sociales (nacionales y extranjeros) que tenían una preocupación distinta respecto a la relación con el entorno natural pues, en buena parte de los casos, conocían de la destrucción progresiva de la naturaleza o habían vivido esa experiencia en sus lugares de origen, ya que procedían de países industrializados o desarrollados según las distintas concepciones económicas.

La preocupación ambiental de una parte de los habitantes de Mindo es mucho más anterior a la construcción del oleoducto, y de hecho, surge agrupaciones de jóvenes desde la década de los ochenta que planteaban como objetivo la conservación del bosque ya que la misma actividad que ejercían (carpintería) ponía en riesgo la base de su subsistencia, es decir, los árboles. Esto promovió, tempranamente, el cuidado del bosque y de sus entornos. Estas iniciativas se mantuvieron en el tiempo y se reforzaron por la idea de vincular la riqueza en biodiversidad con la actividad turística pues el área de Mindo, brindaba desde años atrás lo que la ciudad y otros lugares del país iba perdiendo: naturaleza.

Entrada la década de los noventa, se inicia la llegada de turistas al lugar, en un inicio, según una de las personas entrevistadas (cdg: 1), eran mayoritariamente extranjeros, pero, conforme se mejora la infraestructura vial en la zona, se incrementa el turismo de nacionales, especialmente de Quito dada su proximidad a la capital (dos horas en transporte terrestre). El turismo despunta con fuerza a mediados de la década de los noventa, y decae a finales de dicha década a consecuencia de la crisis política – económica, y posteriormente debido a la erupción del “Huahua Pichincha” (2000) que amenazaba, dicen, supuestamente a Mindo⁶². Cabe mencionar en esta parte que la erupción de Huahua Pichincha sí afectó en el pasado a esta área del noroccidente.

La construcción del oleoducto y el paso por el Bosque Protector Mindo-Nambillo es parte de la historia local, pero la misma será descrita más adelante. Hasta aquí esta breve revisión retrospectiva del poblamiento de esta parte del bosque nublado de Mindo, que de paso, toma su nombre por el río Mindo, importante eje de esta cuenca hidrográfica.

La población actual de El Reventador se asienta en las estribaciones orientales de la cordillera oriental y toma el nombre del volcán activo; al igual que el acceso a Mindo hay que bajar la cordillera por parajes verdaderamente hermosos, y la vista, en un punto del camino entre esta parroquia y su cabecera cantonal Gonzalo Pizarro permite ver un mar verde de bosques que van en descenso desde la alta Amazonía hacia la baja Amazonía. Lo que se ve tras los bosques es un conjunto de vida silvestre en peligro sistemático de ser fraccionada por una dinámica humana que, progresivamente, generará más presiones e impactos en la insaciable búsqueda de recursos naturales.

El Reventador, es un sitio de tránsito hacia una de las zonas petroleras más importantes y complejas del país⁶³; de hecho, la historia de esta población, así como de la gran mayoría de los colonos asentados en el nororiente, está estrechamente ligada al desarrollo de la actividad petrolera en el nororiente de la Amazonía ecuatoriana; una historia bien conocida que puede resumirse, como lo veía Little en la superposición de varias visiones, varias dimensiones, pero también en la constatación innegable de impactos sumamente fuertes sobre las comunidades nativas y posteriormente colonas que en parte sobrevivieron, a diferencia de los Yumbos del noroccidente, a la presencia de un abanico importante de actores sociales y a cambios fuertes en los modelos económicos y en la forma de relacionamiento, tradicional, con el ambiente.

El Reventador es una pequeña población que se localiza a 190 kilómetros al nororiente de Quito; comparativamente están más alejados respecto a Mindo ya que el viaje hasta este sitio toma entre 4 a 5 horas. Al igual que Mindo, el área de la población del El Reventador, está en el bosque nublado del nororiente y tiene parajes bastante agrestes. La cabecera parroquial se ubica a 00°02.760 Sur y 077°31.841 Oeste a una altitud de 1.438 m.s.n.m ⁶⁴.

La historia de esta pequeña población se inicia en la década de los setenta cuando se estaba construyendo paralelamente el SOTE y la vía hacia el centro petrolero de Lago Agrio, de hecho, uno de los entrevistados mencionó que la actual vía no es sino la ampliación y modificación del derecho de vía del referido oleoducto porque, considera, no es una carretera en el sentido estricto, lo cual se puede fácilmente constatar en el viaje hacia el nororiente. Al inicio de la década de los setenta la vía secundaria Quito – Lago Agrio estaba atravesando la antigua jurisdicción de la parroquia Gonzalo Pizarro por el sector donde ahora se asienta la parroquia El Reventador y en este sitio se estableció uno de los campamentos y con ello llegó gente que venía de varios sitios del país; una vez que se terminó de construir ese tramo de la vía y del oleoducto, algunos de los trabajadores optaron por quedarse en el sitio y formaron en 1973 una pequeña comunidad de pocas personas; una vez asentados en el sitio trajeron a sus familias y se acogieron a las leyes de colonización impulsadas desde el antiguo IERAC que les otorgaba cincuenta hectáreas con la condición de que sean trabajadas, es decir, deforestadas en un 50% como mínimo y era condición que tengan una considerable superficie deforestada y cambiado el uso del suelo a la agricultura o ganadería para otorgarles el título legal de posesión, y mencionan también que era condición para obtener más tierras, de hecho, cada colono que se quedó en el área de El Reventador en la actualidad tiene 250 Ha en promedio como un reflejo de esa política de expansión de la frontera agrícola, esto implicó una intensa deforestación ⁶⁵.

Una vez consolidado la pequeña comunidad de El Reventador, vino a finales de la década de los setenta una migración de personas procedentes de la provincia de Tungurahua, especialmente, del Cantón Baños y ellos desarrollaron el cultivo de naranjilla dulce y tomate de árbol, de hecho, estos cultivos aunque en menor intensidad que en el pasado todavía prevalecen y son importantes para la economía local.

En este período deforestaron intensamente esa parte del bosque nublado del nororiente y cada vez avanzó más la conversión de esa área natural a superficies para pastoreo y uso agrícola. Debido al aislamiento de las grandes ciudades y de Quito esta pequeña comunidad creció muy poco a lo largo de tres décadas, y en su historia como poblamiento se han dado cuatro hechos importantes: el terremoto de 1987 en la que su población fue severamente afectada y esto representó un freno más a su crecimiento, luego se dio en la década de los noventa la construcción del poliducto que dinamizó un poco la economía local y generó un leve crecimiento de la población, luego en el año 2001 se produjo la reactivación del volcán El Reventador sin que esto haya afectado directamente al centro poblado y sus habitantes, y en este mismo año se inició la construcción del OCP el mismo que pasó por el mes de junio por este tramo generando un conflicto que duró dos meses, es decir, el tiempo en que se instaló el oleoducto en la jurisdicción de esta parroquia nororiental. El volcán El Reventador erupcionó en dos ocasiones más y las últimas de intensidad importante ocurrieron en el 2005 y en el 2007 sin que haya afectado a la población. Otro hito en la historia de esta comunidad es la terminación del asfaltado de la vía que se dio hace un año, luego de esperar por aproximadamente quince años.

Este hecho en la actualidad ha dinamizado un poco más la economía local porque hay mayor afluencia de personas que llegan por turismo de aventura, por el hecho de que “paran” en este sitio los buses que van en tránsito a Lago Agrio y por este hecho usan los pasajeros el servicio de alimentación o hacen compras en las tiendas locales. Según el testimonio de todos los entrevistados, en lo que va de dos años atrás han llegado nuevas familias con la expectativa de la puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico “Coca – Codo – Sinclair”.

En la actualidad la población vive de la ganadería, el cultivo de naranjilla y tomate de árbol, el empleo en sectores del Estado, el empleo esporádico en empresas petroleras como mano de obra no calificada y ocasionalmente se emplean en los trabajos de remediación ambiental cuando hay derrames de petróleo en el área. Según las personas entrevistadas la actividad de la ganadería y la agricultura ha decaído por la falta de mercado para los productos lácteos, por los costos de producción y en el caso de la agricultura por el decrecimiento de la producción, por el costo de los insumos agroquímicos que cada vez necesitan

más por efecto del empobrecimiento del suelo y por la mayor resistencia de las plagas a los pesticidas que se usan.

En el Reventador no hay letreros como los que anuncian la llegada a Mindo señalando que entran a otro mundo natural, sino se advierte letreros, deteriorados por el clima y el olvido, de los “aportes” del sector petrolero al desarrollo local y otros que indican el lugar por donde se está pasando y los kilómetros que faltan para llegar a diferentes destinos. También hay otros letreros que señalan los numerosos ríos, accidentes geográficos, y los cruces de camino.

Una diferencia substancial entre Mindo y El Reventador, a más del hecho gravitante de la cercanía a la capital, es que Mindo se encuentra en un enclave fuera de la vía, aproximadamente a ocho kilómetros de la carretera principal y El Reventador, como ya se señaló, está atravesado por la vía principal y por tres ductos (SOTE, Poliducto y OCP) y estas características son muy importantes tomar en cuenta en el contexto explicativo del conflicto, pero también son relevantes para entender muchas de las perspectivas locales respecto a la problemática y relación sociedad/ambiente.

Mindo y El Reventador el contexto comparativo visto desde indicadores socioeconómicos.

En 1982 la ex parroquia Gonzalo Pizarro, dentro de la que se incluía la pequeña comunidad de El Reventador tenía 1.097 habitantes, es decir, era una población sumamente pequeña y en proceso de crecimiento. Para ese mismo año censal, Mindo consta, por el contrario, como una parroquia relativamente grande con 1.451 habitantes. En este año Mindo, tenía más habitantes que la parroquia Gonzalo Pizarro y obviamente que El Reventador y su crecimiento demográfico fue constante hasta el año 2001 en que tiene 2.429 habitantes. El Reventador ha tenido un crecimiento más bien pequeño de su población y en el último censo contaba con 1.125 habitantes, lo cual muestra una diferencia bastante significativa de habitantes (1.304) respecto a Mindo.

En las proyecciones de población que hace el INEC y el SIISE hay un dato curioso respecto al comportamiento demográfico de las dos poblaciones; por un lado la población de Mindo decrece hasta llegar a 1.777 habitantes, es decir, 26,8% (652) menos que la población registrada en el censo del 2001 y en el caso de la población de El Reventador

por el contrario crece a 1982 habitantes, 43,2% (857); lo cual se presenta como una tendencia totalmente inversa a lo que sucede en Mindo, y es necesario explicar esa situación de decrecimiento ya que la información de campo indica que se mantiene la actividad turística con tendencia a incrementarse, esto supone que o bien se mantiene constante o bien crece, pero no se puede esperar que la población de Mindo decrezca. Entonces se debe revisar si tiene o no sustento esta proyección y de ser así hay que encontrar los elementos que dinamizan o bien el decrecimiento o el crecimiento. En el caso de El Reventador, igual, porque la situación de esta parroquia mostraría más bien un contexto inverso, ya que el crecimiento es muy poco progresivo o incluso podría decrecer por que no hay incentivos para que la población aumente (Anexo 2: Gráfico 2). En síntesis, al año de construcción del oleoducto, Mindo tenía una población marcadamente mayor (2429) a la que se tenía en El Reventador (1125).

La escolaridad, es decir el número de años aprobados en la población en edad escolar censada, es similar entre Mindo y El Reventador, pues en la primera población el porcentaje de escolaridad es de 6.6 y en la segunda 6.2, pero en cuanto al nivel de instrucción superior es, evidentemente, más alto en Mindo que en El Reventador ya que hay una diferencia porcentual de 5,1 donde Mindo presenta el porcentaje más elevado de población con instrucción superior. En cuanto a analfabetismo funcional, que se refiere a las personas que aún sabiendo escribir y leer tienen una capacidad limitada de comprensión es similar entre las dos poblaciones: en Mindo el analfabetismo funcional es de 20,6% y en El Reventador 19,1%. Es evidente que una población con personas que tienen una mayor instrucción formal es una base importante para generar movilización y crítica en torno a temas que se vinculan, sobre todo el relacionado con la justicia o la defensa de derechos civiles, que sí estuvieron presente en el conflicto desatado por el OCP. En cuanto a la defensa de la naturaleza el tema de la educación formal, no necesariamente atraviesa el grado de escolaridad, pues el simple hecho de amenazar sus fuentes de sustentación de vida, el bosque y sobre todo el agua, vital para toda la actividad humana, aglutinó a un sector mayoritario de la población de Mindo. En el Reventador, fue este aspecto pero sobre todo la amenaza a sus tierras y a la producción local centrada en la actividad ganadera. En Mindo, el acento crítico no solo entra en

relación con un espacio natural a ser protegido, sino con un cuestionamiento a un modelo de desarrollo (Anexo 2: Gráfico 3).

Las variables económicas y sus indicadores muestran que la población en edad de trabajar es mayor en Mindo que en El Reventador, esto supone, en principio, más necesidad de búsqueda de plazas de trabajo lo cual esta, parcialmente, cubierto por la actividad turística que es el eje económico de esta población del noroccidente (Anexo 2: Gráfico 4). En el caso de El Reventador, hay también, proporcionalmente una fuerte demanda de plazas de empleo, pero en el contexto de esta parroquia es más limitado porque son escasos los sectores donde puedan emplearse ya que no tiene una economía tan dinámica como en Mindo, sin embargo, la tenencia de tierras -que es el caso de la mayor parte de familias-, absorbe relativamente esta necesidad ya que una gran parte de su población se dedica al trabajo agropecuario. El Reventador vive prácticamente de la actividad ganadera y agrícola. En este sentido las perspectivas de este sector de la población frente a una oferta de empleo pueden ser distintas o relativas por sus respectivos ejes económicos: turismo (sector terciario servicios) – ganadería y agricultura (sector primario).

La población económicamente activa es mayor en Mindo y esta se encuentra directa o indirectamente inserta en alguna actividad económica ya que el turismo dinamiza fuertemente el empleo, obviamente, también es proporcional a la cantidad de habitantes de cada parroquia, sin embargo, se puede ver que en El Reventador por el escaso mercado laboral -no agropecuario- tiene mayores requerimientos a ese nivel; en esta parroquia hay pocos sitios donde pueden emplearse, y uno de ellos es el trabajo ocasional en el mantenimiento del derecho de vía del oleoducto (Anexo 2: Gráfico 5).

Para dimensionar el tema de la pobreza en cada sitio de estudio, se tomó en consideración tres indicadores relacionados con esa problemática, por un lado está la extrema pobreza vinculada a las necesidades básicas insatisfechas (nbi), por otro con la pobreza en relación con el mismo indicador (nbi), y al final con la incidencia de la pobreza vista desde el consumo (Anexo 2: Gráfico 6). En los tres indicadores se puede apreciar que El Reventador está en situación más precaria que Mindo; en la extrema pobreza hay, relativamente, poca diferencia pero en la pobreza en general El Reventador presenta mayor población en dichas condiciones respecto a Mindo y la diferencia es de 15,2%. La diferencia

se acorta en la incidencia de consumo, pero en términos generales se ve que en la parroquia del nororiente hay más énfasis, en sentido general, en este problema, es decir, el contexto de pobreza es mayor en El Reventador.

Debido a la migración que recibe Mindo a consecuencia de la actividad turística, y por el propio crecimiento interno, hay más hacinamiento en Mindo que en el Reventador, pero la diferencia es mínima (Mindo: 24,9% - El Reventador: 23,5%); a otro nivel, el problema de hacinamiento crítico en El Reventador es un poco más elevado que Mindo, esto por las características de las viviendas pues en la parroquia del nororiente son viviendas más precarias, y esto se puede ver, por ejemplo, en el hecho de que Mindo tiene una mejor infraestructura habitacional lo cual se expresa, por ejemplo, a través de la existencia o mejor dicho disponibilidad de servicios higiénicos exclusivos. Por otra parte, el acceso a agua entubada por red pública en casas, es substancialmente mayor en Mindo (31,3%) y muy precario en El Reventador (12,1%) (Anexo 2: Gráfico 7). Esto indica, como se pudo observar en el trabajo de campo que Mindo tiene, comparativamente, mejores condiciones de vida que en El Reventador y si cabe el término, está en una situación de evidente desarrollo o crecimiento económico.

Esto desde la perspectiva ambiental relacionado con datos censales, en la información que proporciona el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). Finalmente, hay un indicador llamativo que es el “uso de leña para cocinar”, y en Mindo se usa, comparativamente, más leña que en El Reventador, posiblemente, por el hecho de que tiene más bosques cercanos y porque es un área donde todavía se puede obtener leña, al contrario, El Reventador a pesar de tener bosques están más distantes y las condiciones del medio no se prestan para usar este tipo de combustible (Anexo 2: Gráfico 8).

Lo que se puede observar de esta serie de indicadores es que las condiciones socioeconómicas de El Reventador, en términos generales, son más precarias que las condiciones de Mindo; esta última población ha tenido un proceso más sostenido de consolidación y la presencia de actores externos o de actores sociales con conexión con otros medios, más el contexto socio ambiental, frente a la construcción del nuevo oleoducto generó respuestas sustentadas de defensa del medio ambiente a parte por el hecho fáctico de la existencia de una relación estrecha entre economía y conservación del bosque nublado.

El Reventador se muestra como un medio cerrado al “mundo” exterior, con problemas que se expresan en posiciones de tipo más individual respecto al conflicto suscitado a raíz de la construcción del oleoducto, de hecho, no hubo mayor articulación con las demandas que hacían otros grupos ambientalistas de apoyo en protesta por el problema; Mindo, por el contrario, es un escenario más abierto y con conexiones, si cable el término, globales por el despliegue informativo de sus características y recursos. En El Reventador no hay tal articulación ni actores externos que movilicen, sustancialmente, otro tipo de ideas y posturas frente al problema ambiental; hay posiciones más individuales es que colectivas y que tienen una lectura o perspectiva con un argumento explícitamente ambiental del problema. Se puede afirmar, que el contexto y el medio es un factor determinante en el desarrollo de un conflicto.

La construcción del OCP y la irrupción en dos escenarios distintos noroccidente y nororiental:

El ensamblaje de la “serpiente” tecnológica: la reseña del conflicto

Unos pocos meses antes de la construcción del oleoducto y obviamente durante la construcción, se generaron respuestas de adhesión a la lucha que planteaban los pobladores de Mindo, algunas organizaciones ambientales y en general el activismo ecológico; una de dichas respuestas ilustró bastante bien la articulación del problema con el fenómeno de la globalización y fue la que hizo llegar, en solidaridad con Mindo, el africano Nimmo Bassey que procede de Nigeria, un país productor de petróleo, atravesado por numerosos oleoductos y por una problemática socio ambiental compleja. La conexión Mindo – Nigeria se manifestó en forma poética, en versos libres, y en una retórica que plasma una clara posición frente a la actividad petrolera y a los ductos de transporte de crudo y gas: desprecio, rechazo total y lucha social.⁶⁶

El mensaje de fondo tiene varios componentes relacionados con la ecología política y la sociología de la acción: respectivamente por el enfoque ambiental y político del problema que refleja en el fondo una crítica a una forma de vida o a un modelo de desarrollo, y por otro, el reconocimiento de una identidad colectiva (“Las marcas faciales ayudan a la gente a reconocer los miembros del clan – de cara a foráneos que

irrumpen en su sitio de vida-), definición de un adversario (“Hacheros ilegales eco devoradores transnacionales”), un proyecto de acción colectiva -basado en argumentos socio ambientales- (“Nos enajenan de nuestro suelo, Ahora somos extraños en nuestra propia tierra, Venid, juntaos almas valientes, Alejad de nuestro suelo las serpientes malignas, que sagrado es nuestro mundo, Unid esas manos a través de los mares, Ceguemos esos ductos con nuestros puños colectivos...”) y un planteamiento de reforma social que se revela en la idea de recuperar su pertenencia, sus tierras, la unidad allende los mares, y recuperar la sacralidad de la tierra. ¿El fin?, parar uno de los pilares basados en el consumo energético de la sociedad contemporánea: el petróleo y su oceánica gama de implicaciones en la esfera social y ambiental. En el fondo el planteamiento ecológico, es frenar, detener o cambiar una forma de vida eminentemente destructiva a los ojos de Nimmo Bassey, visión no alejada de buena parte de los moradores del actual Mindo y de una perspectiva que cada día gana más terreno por la evidente destrucción del planeta y de nuestro propio soporte de vida.

Lo interesante de esto es considerar las conexiones y escalas en las que pueden conectarse actualmente problemas ambientales, es decir, tal como lo advierte la ecología política, no hay fronteras para los impactos negativos sobre el ambiente, y de cierta forma tampoco para las respuestas porque el problema social se engloba cada vez más: un enclave poblacional del bosque nublado se conecta con algún lugar de un país africano, se podría aventurar usando una categoría de la ecología, una relación ecosistémica frente a un problema dado, pero es una relación de dos vías en defensa de posiciones ambientales y en defensa de relaciones económicas transnacionales, complejamente imbricadas en lo que desde la ecología política se ha denominado, como se recordará, el “sistema mundo” o lo que se denomina actualmente “globalización”, cuyo análisis demanda la intervención de muchas otras perspectivas, disciplinas, ciencias; la complejidad demanda respuestas integradas.

En una retórica menos poética y más tecnocrática se promocionaba al inicio de la construcción con grandes pompas publicitarias al estilo de “por donde pasa el OCP suceden cosas buenas”⁶⁷ ya que por una parte se decía este proyecto sería la tabla de salvación económica del país ya que incrementaría la posibilidad de mayor producción petrolera (eufemismo usado para indicar explotación), atraería la inversión extranjera, generaría alianzas estratégicas para explotar otras áreas de

reservas probadas de petróleo, incrementarían la inversión las empresas socias del consorcio para potenciar la capacidad extractiva, entraría mayor cantidad de divisas al fisco, generaría durante la construcción 52.000 empleos, aportaría con la instalación de una fibra óptica para conectar, transversalmente, al Ecuador y parte de la misma fue usada por el consorcio para controlar su sofisticado sistema operativo “*Scada*” con un gran despliegue tecnológico para reducir al mínimo la eventualidad de problemas de derrame de crudo.

Se mencionó en su momento una prometedora “revolución en las telecomunicaciones” asociadas al OCP, y a un nivel más amplio y complejo los responsables de la política petrolera y directivos del consorcio OCP vaticinaban “estar a las puertas del segundo boom petrolero”⁶⁸.

En todo caso, el inicio de la construcción del nuevo oleoducto estuvo marcado básicamente por posiciones bastante antagónicas, aquellos que veían en el proyecto un potencial desastre ambiental con énfasis en la zona de Mindo, y aquellos que por el contrario veían una verdadera tabla de salvación para la economía nacional y lo que es más importante para el análisis, la potenciación del sector petrolero al cual la economía, como se mencionó, ha estado fuertemente unida ya sea en épocas de “vacas flacas” o de “vacas gordas”. En esta parte de la tesis, quiero sobre todo evidenciar dos formas de discurso político que penetran en el campo del conflicto que es la unidad de análisis principal de la tesis a través del estudio de caso comparativo entre Mindo y El Reventador.

Un poco antes del inicio de la construcción ya se habían levantado conflictos que emergían de manera aislada; frente a esto, que a su vez generaba incertidumbre y temor de cara a los impactos socio ambientales, se levantó un discurso de evidenciación de los beneficios -ya mencionados- y se impulsó una campaña mediática para contrarrestar u opacar el argumento del daño ambiental que es el que surgía con más fuerza; la base de dicha respuesta mediática fue el argumento tecnológico en el cual se mostraba al oleoducto, como una opción, que comparativamente con el antiguo oleoducto (SOTE) de más de treinta años de antigüedad, era una evidencia grotesca ya que la nueva propuesta llevaba décadas de avance tecnológico y un contexto socio ambiental distinto; sin embargo y haciendo un paréntesis, la ecología política demuestra los entramados complejos de la relación entre tecnología e incertidumbre tal como lo plantea Ulrich Bech (2006) porque no solo se trata de una infraestructura aislada de transporte de crudo, sino de una

infraestructura conectada a diferentes problemáticas que van de lo local a lo global; un ejemplo de esto es la hipótesis planteada en esta tesis es la idea de que el oleoducto, efectivamente, creó las condiciones -hasta ahora aletargadas por los vaivenes de la política y el contexto internacional- para explotar el campo ITT en una de las áreas de conservación más importantes del país por su alta biodiversidad y por albergar una forma de vida en proceso de extinción (Huaorani: Tagaeri - Taromenane - Oñamenane) pues su explotación enterraría por siempre esta forma de vida y generaría un incremento en el “aporte” de emisión de CO₂ a la atmósfera, con lo cual se estaría poniendo, irónicamente hablando, un granito más de “arena” al calentamiento global de cuyo efecto, por supuesto, Ecuador como el resto del planeta no puede substraerse.

El aporte de la sociología del conflicto: el contexto retrospectivo y la narrativa del conflicto:

Este proyecto como se habrá podido apreciar en el anterior capítulo es el resultado de una “política” petrolera, de un juego evidente de poder y de un contexto más amplio como es la globalización, la transnacionalización y el objetivo de captar más recursos energéticos por parte de los países industrializados con los cuales hay relación comercial. La posibilidad de ampliar la extracción de petróleo había estado represada o constreñida por la existencia de un solo oleoducto, en este sentido, la construcción del oleoducto, como decía su propio eslogan corporativo, “transportaba algo más que petróleo” (2004) porque evidentemente es el medio infraestructural que ha dejado abierta la puerta para ampliar la frontera extractiva en el nororiente. En ese sentido, efectivamente, el OCP es algo más que una infraestructura.

Esta infraestructura es también el resultado de un proceso de intenciones sistemáticas por ampliar la extracción de petróleo e incrementar los ingresos del fisco, aunque para que el Estado tenga pleno beneficio habrá de pasar, ahora, quince años más porque la concesión termina en el 2024, a muy poco tiempo de que acaben las reservas petroleras del Ecuador si no se explota el ITT o Pungarayaku que, en ese caso, prolongaría un poco la “vida” petrolera del país, y en este contexto el nuevo oleoducto, se puede decir, es la llave que permite esta posibilidad desde la perspectiva de transporte de crudo pesado que es lo que hay, por ejemplo, en las reservas del ITT.

El proyecto, como tal, se inicia con la idea de “modernizar el sector petrolero” para cumplir con el propósito de captar más recursos para la administración del Estado a través de cinco objetivos: construir un nuevo oleoducto de crudos pesados (OCP), reactivar la producción de Petroecuador, exploración y explotación del ITT, exploración suroriental e incorporación de capital privado a la refinería de La Libertad.

En Febrero del 2001 se anuncia, con un gran despliegue mediático, las bondades de la construcción de nuevo OCP creando gran expectativa por los ofrecimientos de un “segundo boom petrolero”, por el advenimiento de una “revolución tecnológica”, por la “generación de abundante empleo” y beneficio al país en su generalidad y, obviamente, a los sitios por donde pasaría el OCP. En junio del mismo año se anuncia el inicio del proyecto y por lo tanto el arranque de la obra para construir el nuevo oleoducto.

Un mes más tarde de dicho inicio -julio dos mil uno- comienza en Alemania una campaña (uno de los movimientos ecologistas de dicho país) para impedir el financiamiento del nuevo oleoducto por parte del WestL Bank. En agosto, el Alcalde de Nueva Loja toma medidas de hecho e impide el ingreso de maquinaria; paralelamente todos los Municipios de Napo (aunque únicamente Quijos y Chaco entraba en la ruta del OCP) realizan un paro denunciando la falta de cumplimiento de las ofertas de compensación social, la contratación mayoritaria de colombianos y articulan esta medida de hecho a un planteamiento regional para que prevalezca la Ley del Fondo de Ecodesarrollo Regional Amazónico; es decir, el sentido de la protesta en contra del consorcio OCP toma otra derivación.

En Quito, un grupo de mujeres ecologistas, se toman las oficinas del consorcio OCP en protesta por la construcción, las mismas son desalojadas pacíficamente. Unos días más tarde otro grupo de mujeres y hombres se toman las oficinas del partido político Izquierda Democrática (porque la mayor parte de concejales son de esa tienda política) con el fin de pedir que no se otorgue el permiso que debe conceder el Municipio de Quito para que pase el oleoducto por su jurisdicción. En varias de las comunidades de la jurisdicción del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) hay protestas por la construcción del oleoducto, pero las mismas tienen otro matiz y no están articuladas a la respuesta generada en Mindo.

En Nueva Loja, capital de Sucumbíos, las autoridades y la población de la cabecera provincial declaran un paro en protesta por la construcción de la Estación Amazonas que es desde donde inicia el bombeo de petróleo. A finales de agosto e inicios de octubre del 2001, se incrementa el conflicto al nororiente y la “Asamblea Provincial del Napo” toma la decisión de una medida de hecho, en la que a más de protestar por los incumplimientos del consorcio OCP, decide bloquear la actividad petrolera en los cantones Arosemana Tola, Archidona, El Chacho y Quijos para impedir que se elimine las preasignaciones que constan dentro de la Ley del Fondo de Ecodesarrollo Regional Amazónico, y plantean unirse, para generar un efecto más amplio, al “Consortio de Municipios Amazónicos”; cabe mencionar que en esta coyuntura de los conflictos desatados por la construcción del oleoducto, se debatían recortes a leyes que benefician directamente a la región o también se planteaban posiciones respecto a reclamos de la región por la marginalidad con la que ha sido tratada históricamente la Amazonía ecuatoriana; La construcción del OCP multiplicó las protestas y demandas en dicha región, fue uno de los efectos subyacentes de la implementación de este proyecto.

El cinco de octubre, una parte de los moradores de Mindo y el grupo de ecologistas bloquean, nuevamente, los trabajos en Guarumos y se produce el desalojo; otro grupo de población de Los Bancos, quince días más tarde se toma la Estación de Puerto Quito y las oficinas de OCP en esta cabecera cantonal; De manera paralela hay protestas de organizaciones ecologistas en Alemania rechazando el financiamiento del WestLB al proyecto del nuevo oleoducto. El día veinticuatro el mismo grupo de moradores de Mindo y ecologistas se toma el acceso al Bosque Protector Mindo - Nambillo para impedir el avance de trabajos del oleoducto. Estas acciones de toma del acceso al bosque, se prolonga por un mes. En noviembre no se registran acciones de este tipo y nuevamente en diciembre retoman nuevas acciones de protesta.

En este mismo mes de octubre se desarrollan acciones de protesta por parte de activistas internacionales en apoyo a la posición de los habitantes y activistas de Mindo, dichas manifestaciones se producen en Alemania, Estados Unidos e Italia, que son los países que tienen que ver directamente con el conflicto, en Estados Unidos por las petroleras accionistas del consorcio, en Alemania por el financiamiento del WestLB y en Italia por el financiamiento del Lavoro y por los accionistas del

grupo ENI. Las acciones a nivel internacional son respuestas coordinadas. El nexo en Ecuador era Acción Ecológica que apoyó intensamente a esta campaña.

En diciembre, como ya se mencionó, nuevamente se toman las maquinarias de OCP en el Bosque Nublado de Guarumos con el objetivo de detener el avance de la construcción del oleoducto y la afectación al Bosque Protector Mindo – Nambillo. Los manifestantes son, sistemáticamente, desalojados por la policía. Dos días más tarde (10/12/2009) se dan protestas en Nono y se adhieren algunos grupos a la protesta de esta población entre ellos moradores, grupos ecologistas, y activistas ambientales; a este movimiento coordinado le denominan “resistencia activa”.

Entre tanto, al oriente se amenaza con la paralización de las poblaciones de los Municipios de Quijos, Chaco y Gonzalo Pizarro dentro de la cual se encuentra El Reventador; esta acción se plantea realizar en el mes de diciembre. Esperan que se adhieran los cantones de Nueva Loja y Cascales, pero estos actúan de manera independiente.

En vista de que los conflictos se multiplicaban el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Mundial que tienen intereses directos por su relación crediticia con el Estado, promueven una reunión que se da a mediados de diciembre del 2001 y en ella intervienen autoridades de los ministerios de Energía y Ambiente, la DINAPA, ESPOL, y representantes de OCP para conocer la situación, pues plantean que hay fuertes críticas de los sectores sociales respecto a la construcción del OCP basadas en el reclamo por los problemas ambientales que genera en el área de Mindo y por la falta de cumplimiento de acuerdos relacionados con la compensación social y se plantea que revisen tales demandas de los sectores sociales e indican que: “pedimos que la legislación se adapte a los requerimientos de los bancos (WestLB y Lavoro), para asegurar que las cosas vayan bien...”, porque es evidente que si algo falla en el sistema de créditos, garantías y leyes internas del país, esto puede afectar directa o indirectamente a estos organismos internacionales de crédito.

De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) observa con detenimiento los sucesos relacionados con el desarrollo del proyecto OCP y esto se manifestó claramente cuando en enero del 2002, el FMI revisa las cuentas petroleras y el desarrollo del proyecto para que el gobierno pueda entrar en una renegociación del crédito de contingencia por 300 millones de dólares. La delegación del FMI se reúne con los direc-

tivos del consorcio OCP para conocer el avance de la obra y para conocer las cifras que se estiman se generarán cuando se incremente la “producción” petrolera pues son evaluaciones económicas, políticas y legales que hace este organismo para dimensionar la viabilidad de los pedidos del gobierno de turno. Por otro lado, la presencia de estos organismos a raíz del conflicto demuestra la preocupación ante las movilizaciones sociales y acciones de protesta que amenazan, en conjunto, al eje económico del país que es el petróleo.

Retomando el desarrollo del conflicto, en Lago Agrio se genera un paro de los trabajadores de la Estación Amazonas que desemboca en el despido de 131 personas (13/12/01); este conflicto interno de OCP se supera el siete de enero del siguiente año. Por su parte, el Alcalde de Nueva Loja pide se trate sobre las obras de compensación social. Este diálogo se establece para el mes de enero del 2002, pero entre tanto hay un cabildeo con los concejales de dicho Gobierno Local lo cual generará, posteriormente, un fuerte conflicto al interno del Municipio de Nueva Loja.

Los primeros días del mes de enero del 2002, a espaldas del Alcalde y saltándose el proceso legal, se firman contratos con los concejales del Municipio de Nueva Loja por un valor de \$ 600.000 dólares como parte de las “obras de compensación social” y se establece un listado limitado de obras a ejecutarse. En este período de enero entran en litigio el Alcalde, los concejales y diversas tiendas políticas que se dividen en pro ejecución del proyecto OCP y contra proyecto OCP, sobre todo, basadas en los beneficios que podría dejar tal o cual posición al gobierno seccional.

Entre tanto, al noroccidente las medidas de hecho se radicalizan y se instalan campamentos en el Bosque Protector Mindo - Nambillo para impedir el avance del oleoducto. Parte de las estrategias optadas por algunos moradores y activistas de Mindo, es encadenarse a los árboles y se aprestan a construir viviendas en el dosel del bosque⁶⁹.

El conflicto en Nono continuó en enero, pero esta vez, no hubo conexión con las acciones de Mindo⁷⁰, de hecho, Nono opta por hacer demandas puntuales para esta población, y la Junta Parroquial de esta jurisdicción plantea un presupuesto de \$ 2 millones de dólares. Para esta parte de tramo del oleoducto en el noroccidente (Nono-Mindo) la empresa tenía un presupuesto límite de \$300.000 dólares. En este punto, las protestas de Nono y Mindo se separan y cada una toma un propio

curso, así, la lucha de Mindo con el argumento ambiental queda atrás, si cabe el término, en un enclave y las reivindicaciones económicas a lo largo de la ruta del oleoducto prevalecen más que otro tipo de argumento ambiental.

El veinte de enero Nono hace un paro pero no dura mucho tiempo y llegan a un acuerdo para hacer obras de compensación social mínimas pues no tenía fuerza esta parroquia. La demanda de los dos millones de dólares se evapora rápidamente y quedó en unas cuantas obras de bajo costo.

Al nororiente los conflictos continúan multiplicándose y los moradores y autoridades del cantón Gonzalo Pizarro, donde está la parroquia El Reventador, se declaran en paro por problemas generados a partir de la construcción del oleoducto y bajo la expectativa de las obras de compensación social. De manera aislada, los Alcaldes de Nueva Loja y de Cascales inician una paralización el veinte de febrero; el Alcalde de Nueva Loja pide tres obras más de las que habían pactado con los concejales y cuestiona la validez del convenio con la empresa pues violentaron la Ley Municipal. Paralelamente, hay la amenaza de sumarse al paro la provincia de Orellana. La medida se radicaliza en los siguientes días y en respuesta, el 25 del mes en cuestión, se militariza Lago Agrio y Cascales. Orellana se suma al paro y hay bloqueo de toda actividad y toma de pozos petroleros.

Los militares no pueden controlar el paro y como consecuencia de esto, baja la producción de petróleo ya que se deja de extraer 57.000 barriles diarios. En las dos provincias se toman en total 60 pozos petroleros. El Presidente Gustavo Noboa decreta el estado de Emergencia, pero se mantiene el bloqueo. En Mindo, las protestas se mantienen; en este punto, la medida de presión es más fuerte al nororiente. Los dirigentes del paro reclaman obras para las dos provincias (Sucumbíos y Orellana).

A pesar del decreto de emergencia, el paro se mantiene y radicaliza produciéndose el día 26/02/02 enfrentamientos violentos con los militares, especialmente en Sucumbíos. Las demandas tanto de Sucumbíos como de Orellana se incrementan. La tensión entre el Presidente de la República y el Alcalde del Cantón Lago Agrio aumentan. Los militares resguardan el campamento de OCP ya que es objeto de protestas. Debido a las presiones sociales y al cabildeo político, la medida sede el 27 de Febrero y se establecen pautas para un diálogo.

Se puede decir que el conflicto más fuerte se dio en el nororiente en el mes de Febrero, y en el siguiente mes toma, por el contrario, más fuerza en el noroccidente. Cabe mencionar que entre las respuestas del nororiente y noroccidente no hay coordinación, actúan por separado. Acción Ecológica intervino, como se verá más adelante, en coordinación con la “Red Amazónica” y sus denuncias apuntaron a aspectos puntuales con énfasis en el mal trato de campesinos y en reivindicaciones económicas por el paso del oleoducto en los cantones de Lago Agrio, Cascales y especialmente en el cantón Gonzalo Pizarro.

Debido a las presiones de los moradores de Mindo, de los grupos ecologistas nacionales e internacionales y por la actuación poco cuidadosa de la contratista Techint (pues se resaltan impactos ambientales), el Ministerio del Ambiente suspende temporalmente la Licencia Ambiental al consorcio OCP el 6 de marzo del 2002; esto frena las obras por aproximadamente quince días, luego de lo cual se devuelve la Licencia y se reanudan los trabajos una vez que “remedian” los impactos ambientales en Guarumos. Los activistas continúan en la toma del Bosque y son desalojados violentamente el 25 de marzo. Entre el 26 y el 28 de marzo los activistas extranjeros que acompañaban en la medida de hecho a los de Mindo son deportados y los activistas o manifestantes de Mindo son detenidos. A estos últimos se les libera el 1 de abril del 2002 por medio del recurso de habeas corpus interpuesto en el Municipio de Quito.

Para inicios del mes de abril la obra “global” de construcción del nuevo oleoducto había avanzado un 30%, y la estrategia fue construir simultáneamente en diferentes tramos que inicio tanto en Esmeraldas (al final del oleoducto) como en Lago Agrio (inicio del oleoducto) ya que eran los trabajos más complejos en términos de construcción y puntos estratégicos del sistema operativo del oleoducto, pero también por ser los sitios de mayor complejidad social pues se enfrentaban con poblaciones grandes como las del DMQ. Obviamente, otra de las partes complejas en la construcción era el área del Bosque Mindo – Nambillo (Guarumos) por lo accidentado del terreno y claro, por las respuestas sociales particularmente intensas. En este punto la empresa hace un balance respecto al aporte en cuanto a empleo e indica que contrató a 5.359 personas, apenas el 10,3% de lo ofertado antes de la construcción del oleoducto (52.000 plazas).

El conflicto en las provincias de Sucumbíos y Orellana estaba latente y como efecto de las negociaciones y presiones políticas que ejerce el Gobierno de turno y el mismo consorcio, se genera divisiones internas entre los que apoyan la construcción del OCP y aquellos que tienen una posición contraria. Esta división provoca alianzas y una de ellas es el apoyo que da el Prefecto de la Provincia de Sucumbíos al Alcalde para que sea restituido pues los concejales que estaban a favor de la construcción del oleoducto, como ya se indicó, en una maniobra política aislaron al Alcalde y lo destituyeron ilegalmente.

La tensión en esta provincia fue también intensa entre los meses de abril y mayo del 2002; hay despidos de 400 obreros, se denuncian malos tratos y en una de las pocas veces en el contexto del conflicto, emerge el reclamo de la “Red Amazónica” en articulación con Acción Ecológica y denuncian violencia, atropellos y presiones (físicas y psicológicas) a quienes no han llegado a acuerdos con el consorcio para permitir que el oleoducto pase por sus propiedades; el énfasis del reclamo en este caso son las indemnizaciones que consideran fueron totalmente desiguales y arbitrarias. Uno de los miembros del consorcio de ese entonces (Repsol YPF) contesta a la Red Amazónica y Acción Ecológica increpándoles que la información sobre esas denuncias es parte de una estrategia y solicitan presenten pruebas pero no se registra más acciones de respuesta a este nivel.

A mediados de mayo en el noroccidente, los activistas y pobladores de Mindo retoman los campamentos en Guarumos, pero en poco tiempo son desalojados y nuevamente puestos en prisión; en este frente se plantea (Acción por la Vida y Acción Ecológica) iniciar demandas por violación a los derechos ciudadanos y por violación a la propiedad privada. Nuevamente hay un recurso de habeas corpus y son liberados en poco tiempo. En esta parte del trayecto del oleoducto y como parte de las estrategias planteadas por los grupos ecologistas y los moradores de Mindo, se plantea comprar terrenos por donde pasará el oleoducto para impedir la construcción por ese trayecto. En otros casos los propietarios de bosque en el área reclaman sus derechos y en este punto dichos actores rechazan las negociaciones para que el oleoducto pase por sus propiedades. Este aspecto del conflicto es el que perdura y se judicializó, tal como sucedió en algunos casos de los cantones Cascales y Gonzalo Pizarro.

El consorcio no sede a las medidas de presión en el noroccidente e indica que la ruta no será cambiada y se abre una disputa entre ecologistas y OCP por la compra de tierras en el área. OCP indica, el quince de mayo del 2002, que el oleoducto pasará a 200 metros de las tierras de los “ecologistas”; en este punto, el consorcio pide, como recurso, se imponga la servidumbre a favor de la estatal petrolera Petroecuador y que esta ceda el derecho a favor de OCP. En esta parte se registra un dato importante en la cronología respecto a una de las dimensiones del conflicto que tiene que ver con las personas que se resistieron a negociar para que el oleoducto pase por sus propiedades, según el dato de la fecha eran 135 personas (de los 1.804 propietarios de tierras por el trazado del oleoducto) y de ellas, como parte de una estrategia para minimizar la posibilidad de agrupación de las personas en litigio, se indica que se ha vuelto a negociar con la mayoría y que restan personas “por negociar” (42 personas en total).

Las protestas no cesan al noroccidente y nororiente, y en el nivel internacional hay también manifestaciones de apoyo particularmente a la posición de los moradores y activistas de Mindo, así el 29 de Mayo activistas italianos protestan en Roma contra el Banco Nazionale de Lavoro por financiamiento al consorcio OCP, de igual manera, manifiestan durante la Asamblea de Accionistas de ENI en Italia ya que esta empresa misma forma parte del consorcio OCP en Ecuador.

En junio del 2002, Acción Ecológica denuncia que en el nororiente se ha producido abusos, desalojos y detenciones de campesinos que se oponen al paso del oleoducto por sus tierras; en unos casos indican el rechazo por el paso del oleoducto en sus propiedades, en otros argumentan los daños en el taponamiento de vertientes de agua y de arroyos y los perjuicios ocasionados por este efecto; en otros casos denuncian las indemnizaciones pobres recibidas por el consorcio internacional y mencionan la forma de protestas con campamentos a lo largo del trazado del oleoducto.

El apoyo internacional se hace presente en este mes de junio cuando un grupo de activistas italianos de la “Caravana Internazionale de Solidarità de Italia” llega al Ecuador para observar los impactos de la construcción del OCP y se toman pacíficamente las oficinas de la Empresa Italiana ENI en Quito con la consigna de que esta transnacional abandone el consorcio OCP. Esta delegación lleva las denuncias a un plano internacional de la situación social y ambiental haciendo énfasis

en lo que sucede en Mindo y en general en los impactos que deja la explotación de crudo en la Amazonía ecuatoriana. A la par llegan, también, miembros del Partido Verde italiano para recoger pruebas contra OCP y llevarlas al Banco Internazionale del Lavoro para que suspenda la financiación. Este objetivo no se cumple.

A inicios de julio del 2002 llega al país una de las más emblemáticas activistas de la lucha por la protección de la naturaleza la cual es Julia Butterfly Hill para apoyar la campaña de protección al Bosque Nublado de Mindo – Nambillo; Julia hace un recorrido con los activistas de Mindo y de organizaciones ambientalistas por el trazado del oleoducto; también acompaña a los campamentos en el área de Guarumos y su presencia de apoyo y solidaridad tiene repercusiones, aunque cortas, en los medios de comunicación y en general en la red. La permanencia de Julia Butterfly Hill es interrumpida cuando se da la orden de deportación. Ella junto a otros activistas locales y de otros países estaba en actitud de protesta. La expulsión del país se da el día 17 del mes indicado.

Junto con las nota de prensa respecto a la expulsión de Julia, se reitera las ofertas de beneficios que traería el OCP, esto es las 52.000 plazas de empleo, y una vez concluida la instalación de la infraestructura del oleoducto, la transportación de 518.000 barriles diarios que es la capacidad de transportación de crudo pesado. Un mes más tarde, bajan las expectativas de la posibilidad de transportación de crudo por las limitaciones que impone la frontera extractiva del crudo y se estima que el oleoducto iniciará operando 190.000 barriles diarios con la cuota de extracción de las empresas privadas. En este punto, los socios del OCP asumen cuotas de transportación para ocupar al máximo posible el oleoducto.

Por su parte en septiembre los activistas alemanes hacen protestas en Renania y solicitan a los directivos del WestLB que suspenda el crédito a OCP por que el mismo no respeta los estándares ambientales internacionales; plantean que constituyen una amenaza para la forma de vida indígena. En esta discusión se involucra el Banco Mundial. El préstamo no se suspende y continúa el financiamiento de la obra.

En el mes de octubre se produce un paro en Puerto Quito al noroccidente con el fin de incrementar los pedidos al consorcio y solicitan la ampliación de la vía del noroccidente en la jurisdicción de ese cantón con un rubro de 5 millones de dólares; este pedido es desestimado y entran en negociaciones con las autoridades de ese Municipio pero no

cambian los puntos acordados previamente. El paro de Puerto Quito se suspende al poco tiempo.

En noviembre de ese mismo año del 2002, se produce la erupción del volcán El Reventador y se teme afecte el proceso de construcción del oleoducto en esa parte del tramo nororiental. En este punto indican que el avance de la obra está al 70%. Este fenómeno natural no afectó al proceso ni a la parte de la infraestructura instalada. A partir de este mes los conflictos bajan en intensidad y el oleoducto atraviesa los puntos críticos de conflicto. Para marzo del año siguiente (2003) se indica un avance del 93% de la obra, y en esta parte los conflictos disminuyen notoriamente. En el caso de Míndo y El Reventador, el oleoducto fue instalado y las poblaciones afectadas bajaron la intensidad de las protestas y manifestaciones: el problema estaba dado.

En mayo del 2003 las compañías que conforman el consorcio OCP incrementan la “producción” petrolera con el propósito de alcanzar la meta establecida para iniciar la transportación de crudo que se habían fijado en 220.000 barriles diarios; con las inversiones y mejoramiento técnico estiman que podrían alcanzar la transportación de 203 mil barriles diarios. En estas estimaciones se incluye el envío del crudo estatal por el nuevo oleoducto, pero surge el problema de las mezclas en la calidad de los crudos y que fue uno de los argumentos por los cuales se dio paso al nuevo oleoducto, pues requerían que no se mezcle el crudo pesado con el liviano porque esto bajaba la calidad del crudo de exportación y obviamente la cotización del mismo.

Al final del mencionado mes de mayo tras hacer una evaluación y las precisiones del caso, los directivos del OCP bajan las expectativas de transporte de crudo y lo ubican, sin el aporte del petróleo estatal, en 179 mil barriles diarios para el inicio de las operaciones del nuevo ducto; es decir, esperaban el aporte de 41 mil barriles diarios desde el Estado. Tres meses más tarde, en agosto, se confirma que la construcción del oleoducto ha concluido, se recalca el beneficio recibido por el fisco por impuestos que es de 200 millones de dólares durante el período de construcción, se crea un fondo ecológico fiduciario (ECOFONDO) por 16 millones de dólares para programas de conservación manejado por el Ministerio del Ambiente y se ratifica la concesión de veinte años para que las empresas socias del consorcio operen y se beneficien del oleoducto. En septiembre del 2003 se inician las operaciones de prueba y lo hacen con un volumen de 179.000 barriles diarios.

Entre el 2001 y 2002 como se podrá advertir sucede el grueso de los conflictos y es el período en el que se ha focalizado esta descripción retrospectiva. Sin embargo, hay algunos datos que son importantes para entender que el conflicto en realidad no cesó del todo y que por el contrario es un aspecto latente y que puede reactivarse, eso se puede ver a partir de dos hechos: El primero el paro bi-provincial de Sucumbíos y Orellana en el que hubo protestas sumamente violentas, tomas de los pozos petroleros y se generó un estado de convulsión en dichas provincias petroleras del nororiente. El paro duró casi dos semanas y se perdió una cantidad importante de ingresos porque se suspendió la extracción y transporte de crudo por el SOTE. Este paro incluyó a todas las petroleras pero también, aunque no fue blanco directo de conflicto, al nuevo oleoducto de cuyo consorcio, forman parte algunas de las empresas que estaban la mira del conflicto.

La construcción del OCP dejó levantando el “polvo” en el nororiente y se incrementaron substancialmente las expectativas y las demandas de recursos para estas provincias, lo cual, tiene su explicación también en el hecho de que estas provincias han sido sistemáticamente marginadas. El segundo en Febrero del 2006 debido a demandas de recursos económicos de los gobiernos seccionales de la provincia del Napo se produce un paro, como medida de hecho, se toma las instalaciones de la “Estación Sardinias” de OCP y se suspenden las operaciones de transporte por algunos días.

Como se puede apreciar, el “núcleo” del conflicto se ha atenuado porque ya se construyó la infraestructura, se ha puesto en funcionamiento y operación desde hace cinco años y el consorcio OCP ha trabajado en el área de Responsabilidad Social Corporativa a lo largo de los 500 kilómetros de la ruta del oleoducto para cumplir con el compromiso adquirido con el Estado; sin embargo no deja de estar activa la posibilidad de conflictos porque el oleoducto representa desde el punto de vista local (Mindó y El Reventador) algo más que una infraestructura, es de alguna manera un “actor social” de las zonas donde está instalado y en los dos casos (Mindó – El Reventador) hay la percepción de que el conflicto no pasó del todo y que la presencia de una infraestructura de esta naturaleza genera incertidumbre y riesgo por los potenciales impactos que puede generar en la población y en el medio ambiente, en el eventual caso de ruptura del ducto.

Notas

- 55 Anexo 4: Tabla 1: Cronología del conflicto por la construcción del OCP 1999 – 2001 – 2007.
- 56 Dato registrado en campo.
- 57 Salomón, Frank (1980), Los Señores étnicos de Quito en la época de los Incas, Colección Pendoneros N°10, IOA, Otavalo.
- 58 Estas familias fueron los Garzón Thomas, Goetchel y Aguirre; antes de estas familias se supone según las entrevistas con el Sr. Pedro Peñafiel, Sr. Pedro Villota, conocedores de su historia, fueron tierras del Mariscal Sucre.
- 59 Porque hasta hace no muchos años atrás solo se podía acceder al lugar por los antiguos “*cununcos*” que eran vías de tránsito de a pie construidas y usadas por los yumbos y luego vías usadas para el tránsito de mulas y caballos para conectar la costa, la ceja de montaña con el bosque nublado y el área interandina cuyo destino principal de interacción era y es Quito.
- 60 Es un concepto usado, por ejemplo, en la “Guía Comercial Agrícola e Industrial de la República del Ecuador”, publicada en 1909.
- 61 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, IV Censo de Población y V de Vivienda, 1982, INEC, Quito.
- 62 Manifiestan las personas entrevistadas que los medios de comunicación alarmaron a los turistas indicando que la erupción del Huahua Pichincha destruiría el área. Hay un manifiesto malestar por la forma en que los medios de comunicación informan sobre los eventos locales.
- 63 Me refiero a complejas, no solo por la problemática ambiental derivada de la actividad petrolera, colonización, sino por el hecho de estar en un área de frontera con los múltiples y agudos problemas que devienen de la relación con el vecino país de Colombia.
- 64 Dato registrado en campo.
- 65 Entrevista, código 8.
- 66 Anexo 3: “poema marcas faciales”, Nimmo Bassey
- 67 Slogan de la campaña publicitaria de OCP desde el 2005 en adelante; el punto de inflexión de esta estrategia publicitaria de posicionamiento social es el derrame de petróleo sucedido a fines de febrero del 2009 en el Chaco Cantón Quijos, provincia de Napo y sitio cercano a El Reventador. Esto pone en manifiesto el “claro oscuro” del paso del oleoducto y de sus implicaciones socioambientales.
- 68 Fuente: Diario Hoy, 7A, del viernes 16 de Febrero del 2001.
- 69 Esta última estrategia de hacer campamentos en la copa de los árboles es tomada de las que en su momento hizo Julia Butterfly Hill en el Valle Luna sobre los viejos árboles de secuoyas en Estados Unidos. Esta forma de lucha tuvo mucha respuesta de apoyo en el mundo entero, por el caso que defendía Julia que era evitar la tala de las secuoyas y salvar el bosque de la extracción maderera.
- 70 Porque las demandas eran distintas o al menos en el caso de Nono se enfatizaba en el aspecto económico de la compensación social, más no era tanto la protesta por los factores socioambientales; de hecho, unas semanas más tarde se evidencio la posición de las autoridades locales de Nono y de la población cuando hicieron un pedido millonario al Consorcio.

CAPÍTULO IV

EL ESTUDIO COMPARATIVO DE CASO Y SU RELACIÓN CON LAS DOS PERSPECTIVAS DE ANÁLISIS

En el capítulo anterior vimos una descripción narrativa de los momentos relevantes del conflicto con énfasis en el período 2001 – 2003, y esto se hizo desde una de las herramientas metodológicas de la sociología de conflictos que tiene relación con el recuento cronológico e identificación de actores de los hechos que marcaron la dinámica de la construcción del oleoducto y su relación con los conflictos generados; en esta parte se presenta la visión de los actores locales de Míndo y El Reventador que vivieron el conflicto, que accionaron frente a él.

Este aspecto es metodológicamente complementario con la cronología porque tiene la virtud de presentar de forma cualitativa la percepción de los actores sobre temas críticos del conflicto, su desarrollo, impactos y sobre la perspectiva de la situación dejada tras el proceso descrito. A su vez, es importante también mencionar que esta parte se circunscribe en el contexto de estudios de caso comparativos, muy usados en la antropología, porque permite arribar a un análisis amplio de la problemática planteada; en este sentido a continuación se presenta los resultados de la información primaria recolectada a través de las entrevistas realizadas con actores relevantes para el contexto de la investigación (actores claves)⁷¹; esta descripción se hace a partir de un eje na-

rrativo centrado en la visión del conflicto y sus repercusiones, lo cual se conecta a su vez con la perspectiva de la relación en torno a la problemática ambiental (visión de la naturaleza) y social (visión del desarrollo), que es uno de los aspectos centrales o foco de discusión de la ecología política y en la que se podrá ver el aporte de la sociología del conflicto a este campo de análisis.

El conflicto y sus repercusiones en el noroccidente: “Oleoducto sí, por Mindo no”.

Como se recordará Mindo tiene una trayectoria importante en el tema de la conservación y esto supuso el desarrollo de una perspectiva ambiental importante y fundamentada en la idea de las relaciones equilibradas entre sociedad y naturaleza; por otra parte la economía de esta población depende en gran medida de los ingresos que genera la actividad turística desde mediados de la década de los noventa. La preocupación por los temas ambientales viene de dos vertientes: la primera de la influencia de actores externos llegados a Mindo en diferentes décadas, posteriormente por la misma influencia y contacto con turistas nacionales y extranjeros con una experiencia y visión distinta respecto a la problemática ambiental, y la segunda, proviene de las personas que llegaron desde Loja huyendo de la sequía provocada por los daños ambientales. Los primeros tuvieron una influencia más determinante en empujar un nivel de concienciación importante respecto a una relación cualitativamente distinta y constructiva con el ambiente.

En este contexto, y habiéndose desarrollado el turismo como un eje principal y alternativo de la economía de Mindo llegó la noticia de que se construiría un oleoducto y que el mismo pasaría, según unas versiones, por las inmediaciones de la población, incluso por el centro del mismo parque de Mindo⁷², y según otras versiones que se daban en el momento, pasaría por el Bosque Protector Mindo Nambillo. Esta información llegó a los pobladores de Mindo de tres maneras, la primera por parte de una persona de nacionalidad extranjera que estaba al tanto de la situación, la segunda por la información que proporcionó una ONG ambientalista, y la tercera porque se conocía que una probable ruta del oleoducto pasaría por el noroccidente a la altura de Mindo. Pero concomitantemente con una ausencia de información oficial, en Mindo el conflicto se inicia abruptamente:

“En abril del 2000, un Sr. P. G. nos entregó un pequeño contenido de un memorando que había firmado el anterior Ministro de Energía del Gobierno de Jamil Mahuad, que a su vez había también firmado un memorando de entendimiento con Techint, y dejaba pendiente un posible acercamiento con Williams, pero era un texto de la tercera parte de una hoja y eso nos mostró. Al mismo tiempo, resulta que la gente de Techint ya se metió al Bosque Protector haciendo una pica, y la gente del sector vio personas extrañas metiéndose al bosque, este bosque una parte es privada y la otra es del Estado, pero en esa ocasión se metieron en un trayecto privado del bosque, no pidieron permiso a nadie, ni al Ministerio del Ambiente, y sigue un proceso legal en el que les sancionan con \$ 13.200 dólares que para ellos no es nada, es como unos trece centavos”. (Entrevista, código: 1)

Frente a esto se preparó las primeras acciones que fueron las de pedir los estudios de impacto ambiental, lo cual no tenían al momento que ingresaron al bosque:

“Nosotros (los moradores de Mindo) les dijimos que por qué primero hacen y luego presentan el estudio de impacto ambiental, porque ya entraron a hacer la trocha en el bosque, si lo que primeramente debían hacer es primero el estudio y luego aprobar el proyecto y el paso, pero hicieron totalmente lo contrario. Dijeron que es una decisión del gobierno y que el Presidente Gustavo Noboa estaba en esto. Nos cogió verdaderamente por sorpresa, casi de la noche a la mañana. Nos reunimos varias personas y pensamos en lo que tendríamos que hacer. Entonces fue ahí que nos unimos todos los compañeros guías, las autoridades del pueblo y Acción Ecológica, y ellos nos recogieron más información.” (Entrevista código 5)

Una constante en las entrevistas es el hecho de que se atribuye una falta de información clara y transparente por parte del consorcio y de la empresa encargada de la construcción del oleoducto, en este caso, Techint y ese es uno de los elementos que coadyuvaron a exacerbar el conflicto porque dio lugar a muchas especulaciones donde se manejaba versiones distintas y confusas de lo que estaba sucediendo. Aún las personas que, posteriormente, estuvieron abiertos al paso del oleoducto por el área de Mindo mencionan que hubo dicha ausencia de información:

“faltó socializar o dar a conocer el proyecto al pueblo de Mindo, que iba a pasar el oleoducto por esta zona, y una parte del problema nació de una cantidad de mala información -desinformación- y por esa falta de conocimiento” (Entrevista, código: 7)

Este contexto de incertidumbre, a su vez coincidió en el caso de Mindo, con un fuerte acervo de una gran parte de la población por la preocupación ambiental, de hecho, sus actividades se habían enfocado claramente desde la década de los ochenta y noventa a estrechar sistemáticamente una relación entre medio ambiente – conservación de recursos naturales – y economía local dinamizada desde el turismo, lo cual había ganado espacio y estaba en proceso de consolidación. En este sentido, la propuesta de construcción de una infraestructura de tal naturaleza chocaba frontalmente con esa opción por la que había optado Mindo, pero también estaba de alguna manera intensificada por el panorama que se proyecta desde la información de Acción Ecológica respecto a lo que sucedía en el oriente y lo que podría, eventualmente, pasar en Mindo:

“[...] es el tema del oriente, la contaminación, el caso de Texaco, la contaminación del agua, se acaba el turismo, se generan enfermedades en la piel, enfermedades cancerosas, no va a ver pesca, se van a quemar las plantas, es un tema que nos afectaba brutalmente, no tendrían que comer las aves (que son objeto de interés turístico), es decir, nos afectaba a todo nuestro nivel de subsistencia; entonces, claro, quien va a querer perder el trabajito y la subsistencia, claro, y la alimentación, entonces por ley hay que generar un rechazo total; bueno, hasta ahora no podemos saber cual puede ser el grado de afectación en caso de un derrame, es decir, hay la incertidumbre esa de que pueda pasar algo con el oleoducto, eso no ha desaparecido del todo.” (Entrevista, código: 4)

Por otra parte, desde hace algunos años atrás antes de que se construya el oleoducto, la gente estrechó un lazo bastante fuerte con el bosque y por ello es que en un proceso organizativo local, estimulado en buena parte por la presencia de personas de Europa (Alemania e Inglaterra) la población de Mindo desarrolla una relación muy cercana con el bosque Mindo – Nambillo y se desarrolla una relación bastante particular con los espacios naturales, de hecho, Mindo se constituye en el buen sentido de la idea en una suerte de ínsula, en cuanto población, porque la gran bastedad del noroccidente fue totalmente alterada en las

condiciones naturales durante el proceso de colonización, apenas unos cuantos espacios de Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito conservaron remanentes relativamente pequeños de bosques, en parte, como consecuencia de la escasez de recursos de los primeros dueños para explotar el bosque y hacer un cambio en el uso del suelo para la agricultura y ganadería; son en estos sitios donde posteriormente se instala, otro tipo de ínsulas económicamente más selectivas en cuanto al acceso, de gente con más recursos que adquirió esas tierras y algunos de los cuales deciden aprovechar esos espacios no deforestados y con riqueza paisajística para instalar hosterías y lo que se podría llamar “*ecolodge*”.

De hecho, se considera que la opción de Mindo y su apuesta por la conservación del bosque, su entorno y la dinamización del turismo se irradió al noroccidente y esta es una visión bastante extendida en sus pobladores:

“[...] o sea Mindo vive por el bosque porque es el atractivo, es lo que llama la atención, y no solo hay esa relación directa en Mindo, sino que la actividad que se ha desarrollado alrededor de Mindo se ha difundido al noroccidente y a la región. Lo que pasa es que es tan grande el tema del bosque protector que lugares tan alejados como Puerto Quito, con la hostería Arasha, por ejemplo, promocionan el bosque protector Mindo – Nambillo, indicando que son parte de, pero eso no es la verdad [...]” (Entrevista, código: 6)

En el contexto social de esta población la idea de conservar el bosque, que es uno de los grandes “*leitmotive*” del conflicto ha sido vital, pues no solo se defendía por el hecho de que es crucial para la supervivencia económica de la población, sino también, por el hecho de que hay una conciencia fuerte de que estos espacios naturales poco o nada alterados, brindan servicios vitales, y específicamente, la preocupación que se desató por la probable afectación a las fuentes de agua hizo que el rechazo al proyecto del nuevo oleoducto sea generalizado. En algunas de las entrevistas realizadas se menciona, por ejemplo, que se hizo un sondeo, con apoyo de instituciones ambientalistas y especialmente de Acción Ecológica, donde más del 90% de la población estaba en contra de que el oleoducto pase por este sitio.

La posición de Mindo, no era un rechazo a que se construya el oleoducto y así lo revela una de sus principales consignas: “Oleoducto sí, por Mindo no”, la cuestión es que el paso del ducto por el Bosque significaba un grave atentado a un núcleo importante de su concepción, a una opción de vida, y en última instancia un golpe a lo que genera sustento para su reproducción económica, el turismo. El argumento de la oposición al paso del oleoducto tenía todas estas implicaciones, que a juicio de una buena parte de sus habitantes eran irrenunciables, y que el gobierno de turno no quería reconocer bajo el argumento de que el oleoducto, tal como dijo en su momento el Presidente Gustavo Noboa, era una “prioridad de Estado”. La prioridad del Estado, irónicamente chocaba frontalmente con la prioridad de una parte de ese Estado que eran una gran mayoría de los ciudadanos de Mindo. Es una dimensión claramente política del conflicto.

Una de las primeras dinámicas del conflicto que se revelaron en Mindo es el hecho de que en un inicio, bajo esas preocupaciones legítimas, la gran mayoría de la población estaba en desacuerdo con el trazado del oleoducto por el área de Mindo, pero la situación fue cambiando conforme el conflicto se complejizaba y conforme el consorcio OCP con su brazo ejecutor del proyecto la empresa Techint y otras más penetraba en el escenario social. De esta primera postura de rechazo mayoritario emergieron nuevas posiciones y a su vez, tal como lo identifica la sociología de conflicto, nuevos actores con intereses distintos, y que en suma se definirían, por lo fáctico de su acción, como gente que se opone al paso del oleoducto por el área de Mindo, otra como indiferente o de posición expectante, y otra que están en una posición favorable; obviamente, y como una consecuencia del cambio de posturas los argumentos también varían y se diversifican, porque en un conflicto cada uno de los actores legitiman su posición, y esa legitimación suele presentarse en forma de concepciones distintas del problema, sus consecuencias y respuestas:

“En la lucha esta -de los tres actores-, las autoridades de aquí se pusieron en parte del lado de nosotros y en parte de OCP, de mostrar acuerdos, entendimientos, benevolencias y ante la empresa, es decir, medaban con la empresa y el gobierno; el otro grupo se puso a la distancia por miedo, por desconocimiento, y porque siempre hay gente que no quiere estar ni en un lado ni en el otro, así es el ser humano y hay que

saber contar con eso, y la otra parte de esto era la parte de la población que estaba en contra de la construcción del oleoducto [...]” (Entrevista código: 1)

Lo interesante en esta parte es ver que en rasgos generales hay tres grupos de actores con posiciones distintas y dos de ellos (opuestos/favorables) con posiciones totalmente antagónicas, y que al interior del grupo de actores con una posición opuesta a la construcción o paso del oleoducto, habían otras posturas relacionadas con la intensidad de la posición respecto al problema:

“[...] unos más radicales, otros menos radicales, otros más pragmáticos que buscaban intensamente información para poder argumentar su posición, otros solamente gritando sin dar ningún fundamento”. (Entrevista, código: 1)

Algunas de las personas que tenían una postura menos radical, cuando ya estaba avanzando la construcción por el área, hicieron medidas de protesta conjuntamente con los que estaban radicalmente opuestos, y plantearon como una alternativa que el oleoducto pase por una parte más baja que era la vía antigua a Mindo, les plantearon recurrentemente durante el conflicto otras rutas alternas, pero el consorcio no cedió, y por el contrario, el gobierno de turno mandó refuerzos de policías y militares para hacer frente a las personas que habían tomado acciones de resistencia y el conflicto se incrementó en fuerza.

Para el sector movilizad, que en ese entonces les comenzaron a llamar ecologistas o activistas ambientales, tenía no solamente una preocupación pragmática por la posible destrucción de una parte del bosque, por el hecho de que se atentaba la integridad de las fuentes de agua generadas en el bosque nublado o por la posibilidad futura de un derrame que contamine la cuenca hidrográfica de la cual depende Mindo, sino era también parte de una hostilidad frente a una concepción igualmente legítima y claro, frente a la violación de derechos ciudadanos porque hubieron personas que se resistieron a negociar el paso del oleoducto por sus propiedades privadas y a pesar de eso el oleoducto pasó con el aval de la fuerza pública, de las autoridades de gobierno, y violando los derechos consagrados en la Constitución de 1998; este era uno de los aspectos más críticos en cuanto se refiere a la afectación de los actores locales opuestos al paso del ducto.

Desde el punto de vista de la concepción, para las personas que tienen una relación estrecha con el bosque y la naturaleza, el problema iba más allá de haber afectado una parte del área de Guarumos, sino era un mal antecedente en general para las áreas protegidas porque se violó, igualmente, ese estatus y porque no se consideraba las amplias y complejas relaciones ecosistémicas de un bosque, lo cual era conocido por una buena parte de los habitantes de Mindo por su trayectoria en el trabajo de temas ambientales y por su contacto con el conocimiento de personas, entre ellos científicos, que han llegado a Mindo:

“La mayoría de gente decía, ¡pero por esos catorce kilómetros el problema que hacen los mindeños, son el colmo, son el colmo, no están pasando por la mitad, no están haciendo un destrozo, es decir, el bosque se afecta solo una pequeña parte!; pero la situación no es esa, vera es como si alguien viene y nos dice, de su rostro solo le vamos a sacar un ojo, todo lo demás queda sanito, es un pequeño espacio no más el que ocupa un ojo, pero no es así, funcionalmente ¿cuánto es lo que sirve un ojo?, en este caso la cuestión es ¿cómo se ve físicamente? y ¿cómo se ve funcionalmente?. Esa es la cuestión.” (Entrevista, código: 1)

Por otra parte los argumentos relacionados con el tema del riesgo y la incertidumbre también fueron elementos gravitantes en el argumento de la oposición al paso del ducto, pues las razones del conflicto no solo se centraron en esa preocupación inmediata de la afectación al bosque, sino que también estaba y está estrechamente relacionado con la presencia de una infraestructura, que pese a la hipotética y muy promocionada “tecnología de punta” no deja de ser un riesgo, aunque enterrado a cinco metros bajo tierra, omnipresente en la problemática socio ambiental de las comunidades por donde atravésó.

“[...] imagínese que la montaña es esta servilleta (triangular) que ese sea el Bosque Protector Mindo Nambillo, entonces este flanco (occidental) es prácticamente perpendicular e incluso en una parte se mete dentro de la montaña, y por qué, le doy la explicación, porque vienen los vientos monzones y socavan o erosionan esa parte de la montaña, golpean ahí, en esa parte de la pared y ahí se desgasta porque los vientos vienen desde la costa por toda esta cuenca hidrográfica y chocan con esa pared y se erosiona, se forman también las cuchillas (aristas de la montaña). Entonces es la razón natural, es la cuestión erosiva y por la topografía. En esta pared hacia abajo esta el río Mindo y al otro lado

está el río Alambí, que es el que va a Nono, Tandayapa, Nanegalito, por ahí” (Entrevista, código: 1)

En este sentido, el temor de un derrame que afecte a ambos flancos de la montaña y a las cuencas hídricas del río Mindo y el Alambí, era una más de las preocupaciones, de hecho, y aunque pasó por el lugar y OCP remedió ambientalmente este sitio, no deja de haber esa preocupación y es un aspecto latente que dejó el conflicto y la construcción del ducto por esa zona. Una de las explicaciones, desde el punto de vista de los actores locales opuestos a la construcción de la razón por la que pasaron por este bosque, se enfoca a un cálculo económico (más inversión que termina costando al mismo Estado) para justificar un tiempo más prolongado de concesión, es decir, los 20 años pactados, según su punto de vista, era la única razón por la que atravesaron por un sitio tan difícil y ecológicamente sensible como la cresta (Guarumos) del bosque nublado Mindo – Nambillo⁷³.

La construcción del oleoducto en este tramo noroccidental, tomó cerca de tres meses, y en este período de tiempo hubo una continua tensión en la que se enfrentaban pobladores opuestos al proyecto con la empresa constructora. Las formas de lucha y resistencia fueron distintas, lo cual iba desde paralizaciones de la vía, toma de la maquinaria de la empresa constructora hasta la instalación de campamentos en el bosque de Guarumos que era el sitio por donde iba a atravesar el ducto. Esta reacción en lo local; luego en un segundo espacio habían protestas y reclamos de los derechos civiles en instituciones de la capital, de hecho, se tomaron la sede de uno de los partidos políticos que tenía mayor número de miembros en el concejo del Distrito Metropolitano de Quito, se tomaron las mismas oficinas de OCP, y había protestas frente a los Ministerios involucrados. A otra escala, la protesta se conectaba con redes de apoyo internacional especialmente en Alemania, Italia, España, Canadá, Estados Unidos, etc, que son los países donde las empresas o la banca financieras tiene sus lugares de origen y sedes principales, es decir, y a diferencia de los otros sitios por donde pasó el ducto, fue una respuesta que se desató a diferentes escalas y con una amplia gama de actores sociales e institucionales.

En un inicio, y en el espacio local, hubo una importante cohesión entorno al planteamiento de rechazo al paso del oleoducto por el área, y de hecho, según los testimonios recogidos las familias aportaban con

viveres, con apoyo logístico, con lo que tuvieran a mano para hacer los campamentos en el bosque nublado de Guarumos y esta relación se mantuvo por buen tiempo hasta que comenzó a generarse división como consecuencia de un cambio en la perspectiva de las autoridades locales debido a la presión ejercida desde el gobierno, por que vieron que era imposible un cambio en la decisión del gobierno y del consorcio en el cambio de la ruta, y de manera subyacente, porque estaban renunciando a la posibilidad de hacer obras básicas para la parroquia, ya que dentro de los términos del contrato con el Estado, las empresas agrupadas en el consorcio están obligadas a hacer obras o proyectos de “compensación social” esto, obviamente, ha sido una estrategia desarrollada, no solo en este proyecto sino en todos, para disminuir la resistencia y bajar la intensidad de los conflictos, que de paso, era obvio que se presentarían a lo largo de toda la instalación del ducto.

A la posición de las autoridades locales que se abrieron al paso del ducto se cuestionó fuertemente, igual a los otros miembros que divergían del punto de vista de las personas que estaban opuestas. Esta situación provocó tensión y enfrentamientos en menor intensidad entre los mismos pobladores de Mindo, entre tanto, la construcción avanzaba y se estaba aproximando al bosque.

En la misma medida las acciones y medidas de hecho de a los que posteriormente les llamarían ecologistas o activistas, se radicalizarían con acciones de encadenamiento a los árboles, formación de campamentos, bloqueos de las vías y la puesta de información sobre el conflicto en la red y en algunos medios de comunicación locales. Un aspecto central de la resistencia era el apoyo y respaldo que recibían de personas con las mismas perspectivas de defensa del ambiente o con una fuerte preocupación por estos temas. A ese nivel se daba una importante cobertura de las acciones locales en la red, entre tanto, la prensa escrita nacional trataba, a juicio de los manifestantes, de minimizar sus acciones y de distorsionar la información, porque desde su punto de vista, la prensa se había vendido a quien tiene más dinero, y desinformaban o criticaban las acciones de los pobladores de Mindo, de las organizaciones de apoyo y en general de quienes tenían una posición coincidente con los “ecologistas” de esta pequeña parroquia del noroccidente. En otros casos opacaban la intensidad de las protestas indicando que la construcción traería beneficios importantes para las zonas por donde estaba pasando, para el país y a la vez cooptaban, según la

perspectiva de uno de los líderes de la resistencia de Mindo, a los periodistas:

“ofrecieron todo en un boom de ofertas, y lo hicieron hasta conseguir el paso, compraron a los medios de comunicación, hicieron propaganda, compraron la conciencia de los medios de comunicación, y les dijeron, nosotros compramos las cuñas en los medios de comunicación, pero no les den paso a los ecologistas, y eso era la consigna, eso me participaban a mí, varios periodistas, porque habían otros periodistas que al ver nuestros argumentos participaban de nuestra posición, y ellos nos daban apertura” (Entrevista, código: 6)

En los primeros momentos del conflicto en Mindo, los actores que actuaban en oposición al paso del oleoducto tuvieron, en parte, una postura bastante radical, a tal punto que esto, posteriormente, sería un elemento o motivo para que emerjan otras posiciones respecto al problema y al conflicto:

“Esto empezó [...] digamos con una reacción tremenda, un rechazo total, no se daba paso a nada, y de hecho, no se pudo aprovechar casi nada de lo que debía la empresa compensar a Mindo” (Entrevista, código: 4)

Pero por otra parte había una subestimación del consorcio porque, probablemente, no habrían esperado una respuesta con tal fuerza, lo cual devenía de la idea prácticamente catastrófica de impacto al ambiente y la comunidad:

“[...] cuando inició el conflicto con OCP dijeron, va si son solo un grupo de activistas no más, pero detrás de ese grupo al que le calificaban como activistas estaba seres humanos, y como seres humanos aprendimos aquí en Mindo a convivir con la naturaleza. Aquí nos informamos de los antecedentes de la Texaco en el oriente, entonces dijimos no pues, sí eso hacen en la Amazonía, como nos van a dejar en Mindo...” (Entrevista, código 4).

Este temor caló bastante en la población, quien sabía, según la visión de las personas que intervinieron en el conflicto, era una lucha difícil, dura, y totalmente desigual ya que un grupo importante de la población se enfrentaba a la fuerza pública y al poder ejercido desde el consorcio. No obstante, lo que llamaron resistencia fue por el tiempo que duró la construcción y posterior a esto, porque incluso se conside-

ra, tal como sucede, que el conflicto tomó otro giro y no ha terminado, si no que se pasó a otra etapa donde un grupo del activismo llevó el caso a la justicia y el otro grupo de jóvenes se convirtieron según la persona entrevistada en “generadores de opinión” respecto al tema ambiental y a la amenazas que se ciernen sobre Mindo, amenazas externas como una probable contingencia con el oleoducto, por los intentos de incluir al área de Mindo en el mapa minero del país y por las amenazas internas que enfrentan por el problema del crecimiento desordenado de la población con los efectos negativos sobre el ambiente.

El conflicto tuvo distintas intensidades, pero es evidente que cuando los trabajos para la construcción se acercaban al área del bosque nublado de Guarumos, las acciones se tornaron violentas y hubo una fuerte represión por parte de la policía y el ejército. Hubo enfrenamientos y aprensiones de activistas que estaban resguardando el bosque protector en campamentos.

“[...] fue una lucha desigual, éramos diez personas las que estábamos en el campamento de Guarumos y vinieron treinta policías y treinta militares a desalojarnos de una propiedad privada diciendo que vamos a hacer un atentado. Era una locura.” (Entrevista, código: 5).

A la par, se multiplicaron las protestas en Quito, y llegaban personas en apoyo a los ecologistas desde la capital y de otros países, de hecho, en los campamentos estaban personas de Mindo, Quito y de nacionalidad extranjera. La lucha de Mindo se había ampliado a otros actores sociales en el país y fuera del país. Sin embargo, a pesar de toda esta resistencia y de los apoyos conseguidos a nivel nacional e internacional, el oleoducto pasó luego de dos meses de construcción por el sitio. Esto implicó, para los jóvenes de Mindo, el encarcelamiento por dos ocasiones, la deportación de activistas de otros países y la deportación de Julia Butterfly Hill (07/2002) que llegó en apoyo a la posición de los activistas de Mindo. Para este entonces, la población se había dividido y uno de los efectos de este conflicto fue, precisamente, el fraccionamiento en la comunidad.

En la parte ambiental, hubo un impacto en el bosque nublado, probablemente no de la magnitud que se anunciaba en un inicio o que pensaban los moradores de Mindo sucedería, pero es evidente que el bosque que había sido conservado se afectó al menos en el área por

donde pasó el oleoducto, y este aspecto más el trato represivo hacia los manifestantes fue dado a conocer internacionalmente. De manera subyacente, Mindo de pronto estaba con fuerza en la red y en las noticias locales e internaciones. Este hecho hizo que esta pequeña población enclavada en el bosque nublado sea conocida a diferentes escalas, en una parte por los problemas asociados a la construcción del oleoducto que tomaron la forma de conflicto fuerte, y por otra por que se daba a conocer lo especial del lugar por la biodiversidad existente, en particular, en lo que se refiere a las aves.

Retomando el efecto de la división, la gente se separó de la causa de la defensa del bosque en parte por las ofertas del consorcio y en parte porque se tenía una perspectiva distinta de lo que se quería para Mindo, por un lado querían un desarrollo aún poco comprendido en que se debía dar un énfasis al tema ambiental y a su entorno que debía conservarse tal cual como una comunidad imbricada en un entorno más natural, y otra perspectiva en la que, por el contrario, se aspiraba que, en un sentido de desarrollo con énfasis en la cobertura de necesidades básicas y de dotación de infraestructura, pueda tener mejoras como cualquier otra ciudad. Era la manifestación de una perspectiva distinta del sentido o de la comprensión del desarrollo y de las expectativas que tenían de un evento que incidía con fuerza en la vida de una pequeña población y que podía ser asumido individualmente o de manera colectiva.

Una parte de la población de Mindo cambió de posición respecto al paso del oleoducto por el área por la posibilidad que se le abría de captar recursos de la construcción de esta infraestructura por el área que estaba atravesando:

“La gente dijo, bueno, en verdad voy a tener trabajo, aquí va a venir gente, va a comer, se va a hospedar, y vamos a tener nuestros recursos, entonces fue ahí cuando la gente se comenzó a dividir y nos comenzó a llamar egoístas; nosotros le dijimos no somos egoístas, estamos luchando por defender el bosque que es nuestro recurso; o sea, nosotros no podíamos competir con esa oferta de recursos y trabajo, y se quedó realmente la gente que quería, por plena convicción, defender el bosque” (Entrevista, código: 5)

Cuando esa parte de la población tomó, si cabe el término, una posición favorable al paso del oleoducto, la autoridad local, aún sin tener

el consenso de la población entró en trato con la empresa constructora y de hecho con el consorcio:

“Ahí fue cuando el Presidente de la Junta Parroquial firmó el convenio, y se acabó la movilización, el conflicto; les dieron unas cuantas cosas y hasta ahí hasta ahí quedo; claro nuestra lucha fue hasta el final (activistas), pero al final pasó el oleoducto; ahí ya empezaron a construir y fue imposible...” (Entrevista, código: 5)

Este cambio de posición hizo argumentar al grupo ambientalista de Mindo y a las personas que acompañaron, como una traición y creó distancias fuertes, aún dentro de las mismas familias porque muchas de las personas que en principio se oponían, ahora estaban de acuerdo o al menos trataban de obtener una ventaja de esta circunstancia que se miraba adversa.

Otro elemento de la división fue que no todos los propietarios por donde iba a pasar el oleoducto en el área de Mindo se resistieron a negociar para ser indemnizados por la constitución del derecho de vía que, aparte de causar alteración y daños a áreas cultivadas, debían ceder el derecho de uso de una franja aproximada de entre cinco a diez metros de ancho por el largo que recorría todas las propiedades por veinte años, en los cuales los trabajadores de mantenimiento del oleoducto podían pasar libremente por dicho espacio y los propietarios de las fincas tenían limitaciones de uso de esa franja. En la mayoría de casos llegaron a acuerdos económicos con el consorcio, y en pocos casos no hubo tal acuerdo y son los que ahora tienen un litigio. El argumento de esto, es la violación de la propiedad privada, pero también la defensa del área protegida del bosque Mindo Nambillo, y los esfuerzos que pusieron los finqueros del área de amortiguamiento de dicho bosque para ampliar la superficie del área protegida, de hecho, la superficie del Estado es de 19.200 ha, pero la superficie actual supera las 30.000 ha por el aporte de los vecinos del bosque.

Una de las cosas que más llamó la atención de las personas opuestas al paso del oleoducto por Mindo era que, según su perspectiva, se empecinaban por construir en un área particularmente difícil por la topografía, porque en esa parte del bosque nublado de Guarumos, la montaña es verdaderamente accidentada y por esa misma razón susceptible de que suceda una ruptura del oleoducto con un impacto, como se mencionó, en las dos cuencas hídricas de las estribaciones de Mindo

Nambillo, y con una evidente previsión de imposibilidad técnica para atender una contingencia en el área por la dificultad y complejidad de acceso al sitio. Este conjunto de argumentos, que desde la población local tiene mucho sentido, les empujaba a plantear otras alternativas que en ningún caso fueron tomadas en cuenta. Esto solo podía ser comprendido con otros parámetros: el interés de justificar una inversión, que repentinamente resultó más alta de lo presupuestado para que las empresas socias del consorcio puedan operar por veinte años el ducto con un beneficio mayor para estas y con un evidente perjuicio para el Estado:

“Con este monto ganaron [900 millones de dólares] y eso era lo que tenían que recibir, en base a eso tenía que ir la concesión, hasta que se cumpla y desquiten ese valor, pero que hicieron ellos, justificar una mayor inversión para tener, al mismo tiempo, más años de concesión porque si no, no iban a ser veinte años, iban a ser ocho años o diez años, la mitad, y así pasó.” (Entrevista código: 6).

Según esta perspectiva, este fue el motivo de fondo por el cual se insistió tanto en un trazado que favorecía los intereses del consorcio, en detrimento de los intereses del Estado, lo cual es contrapuesto fuertemente por los activistas del conflicto de Mindo con las otras ofertas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y más de la Empresa trasnacional William Brothers porque el costo era significativamente menor para el Estado, lo cual reducía el tiempo de concesión y usufructo de esta infraestructura.

En todo caso, en el conflicto de Mindo que partió de la defensa al ambiente por la afectación al bosque protector, derivó en explicaciones y argumentaciones mucho más imbricadas con aspectos socio políticos la defensa del bosque, por ejemplo, se constituyó en la lucha porque prevalezca algunos de los principios consagrados en la Constitución y el derecho al principio precautorio, que según su perspectiva, fue totalmente vulnerado.

Para el sector más radical de la oposición al paso del ducto, los efectos no han cesado, de hecho, piensan que se mantienen con fuerza por la misma división generada en la comunidad de Mindo y también porque plantean que la infraestructura bajo tierra solo maquilla un potencial riesgo de daños socio ambientales, que tendría según la perspectiva local, un impacto devastador a la economía de Mindo por el hecho

de que dependen directamente del buen estado de los recursos naturales y de esa imagen subyacente.

**El conflicto y sus repercusiones en El Reventador:
“Por cada metro de tubería, un metro de vía [...]”.**

La parroquia de El Reventador se desarrolló a partir de la actividad petrolera, de hecho, su origen que data de inicios de los años setenta está muy asociada a la construcción de la vía Quito – Lago Agrio, y a la construcción del primer oleoducto (SOTE). El Reventador se formó de la decisión de algunos trabajadores de la vía y del oleoducto de quedarse a vivir en este sitio por el acceso a las tierras; los campamentos de la construcción fueron las primeras viviendas de una incipiente comunidad.

“La historia de esta parroquia va con la construcción de la carretera y del antiguo oleoducto del SOTE, muchos obreros vinieron como trabajadores de esas compañías y muchos decidieron quedarse por acá en pos de la agricultura, ahí, en mi caso me quedé porque yo también vine por trabajar en la vía, y por medio del IERAC conseguimos tierras para trabajar en la agricultura.” (Entrevista, código 8)

Este primer grupo de colonos aprovecharon los recursos que se habían desechado en el proceso constructivo de la vía y del ducto, los grandes y finos árboles del bosque fueron posteriormente usados para las viviendas de los primeros habitantes, y los espacios deforestados sirvieron para introducir cultivos de subsistencia hasta que les permitiera consolidar la colonización del sitio; en la siguiente etapa de la vida de esta población se dedican a la explotación intensiva del bosque por dos razones, la primera porque las leyes de colonización de la época exigían que se deforeste en un plazo máximo de cinco años el 50% de las 50 ha asignadas por familia para legitimar la posesión, y la segunda porque requerían de recursos para consolidar su asentamiento y para cubrir sus necesidades básicas de subsistencia.

“En ese tiempo había una ley en la que decía que a los cinco años debíamos tener la finca bien trabajada (deforestada y cambiada el uso del suelo) para poder recibir los papeles y para reclamar otra finca, entonces, el que más trabajo le metía podía reclamar otra finca de 50 ha, para la agricultura y la ganadería.” (Entrevista, código 8)

En este período se deforestó intensamente el área de colonización, y se substituyó los bosques por espacios cultivados; los primeros cultivos comerciales, y que se han mantenido hasta la actualidad, fueron la naranjilla dulce y el tomate de árbol. Según los testimonios de los primeros colonos, en los primeros diez años hubo una producción muy buena, luego los cultivos comenzaron a decaer por la “llegada de plagas” y también por el obvio agotamiento progresivo de los suelos. Este hecho, obligó mudar la actividad a otro tipo de producción, que en este caso, fue la ganadería para lo cual se continuo deforestando y convirtiendo los remanentes de bosque en pastizales.

Desde ese entonces (década de los ochenta) la agricultura y ganadería han sido actividades que desarrollan de manera paralela, pero según la perspectiva local, la ganadería es ahora la actividad económica predominante en El Reventador, esto se debe a varios cambios como son el progresivo aumento en el costo de producción de los cultivos tradicionales (naranjilla / tomate), por efecto del rendimiento decreciente del suelo, por la resistencia de las plagas a los agroquímicos, y por el encarecimiento de la mano de obra como consecuencia de la poca disponibilidad de la misma, ya que una buena parte de la población local trabaja como jornaleros en varias empresas petroleras, en el mantenimiento del derecho de vía de los oleoductos, en las antenas repetidoras de varias empresas de telecomunicación y en los trabajos, ocasionales, que se presentan tras los derrames petroleros. Esto es lo que una de las personas entrevistadas opina sobre la configuración económica de El Reventador y de la inserción ocasional de mano de obra local derivada de actividades ocasionadas desde el sector petrolero.

“La mayor parte vive de la ganadería, es la actividad principal, es una zona ganadera, y también de la agricultura, a parte entre un 30 a 40% de la población esta trabajando en compañías (Petroecuador, Cuerpo de Ingenieros, OCP, y otras empresas) [...] Hace unos tres años hubo un derrame en el sector de Piedra Fina y hubo como dos años de trabajo seguido, también se fue un bunker cerca de la cascada de San Rafael, y ahí también hubo trabajo, fue como un año y tres meses de trabajo para 30 personas del sector.” (Entrevista, código 10).

En el caso de El Reventador, el proyecto OCP entra en un contexto donde la población estaba muy articulada a actividades primarias (ganadería/agricultura), y a la oferta de mano de obra para servicios a las

compañías petroleras. Al igual que la gran mayoría de poblaciones de la Amazonía, El Reventador no estaba al margen del hecho de haber sido una población con una historia fuerte de marginalidad y postergación en cuanto a la atención del Estado en las obras básicas. Cuando se iniciaron las primeras actividades para la construcción del oleoducto en esta parte del nororiente, se hizo una fuerte campaña de ofertas y de promesas de buenos pagos, es decir, indemnizaciones a las personas cuyas propiedades serían afectadas por el paso del oleoducto.

Como un referente de su situación, cabe mencionar que unos meses antes de la construcción del oleoducto (2002), el asfaltado de la vía estaba aún a unos 20 o 30 kilómetros de El Reventador; es decir, después de 30 años de vida de este pueblo recién se avizoraba una mejora en la vía. A los tres años de haberse terminado de construir el oleoducto (2006) la capa asfáltica, en este tramo de la vía, había sido concluida y El Reventador y el nororiente de la Amazonía ecuatoriana disponía de una vía asfaltada que mejoraba, según la perspectiva local, las posibilidades de desarrollo.

Para El Reventador, la construcción de una infraestructura tal como la del OCP no era una circunstancia nueva, ya que, como se mencionó en su momento el pueblo se asentó a la par del paso del SOTE por el área, luego en la década de los noventa se construyó el poliducto y así el escenario físico de esta comunidad se fue poblando de ductos; sin embargo, era particularmente llamativa la construcción de un nuevo oleoducto que venía cargado de ofertas sociales, de un cliché de alta tecnología y seguridad, que era lo que precisamente no había pasado con el antiguo oleoducto, y con la oferta de trabajo y mejoras de vida para la población. Por estas razones, por no haber un bosque protegido al que la construcción amenazara y por la misma apertura de una buena parte de los moradores de El Reventador a dicho proyecto, no había en un inicio mayor resistencia, más bien se presentaba un escenario favorable para la construcción del nuevo ducto sin mayores conflictos, al contrario de lo que estaba sucediendo al noroccidente.

Este escenario, si cabe el término, allanado tenía ciertos matices porque la experiencia de construcción de dos ductos, y especialmente del poliducto dejó, en una parte más pequeña de la población algunos reparos y dudas, y este contraste hay que explicar a través de lo que sucedió en la construcción de los dos ductos precedentes.

Por una parte, la construcción del SOTE permitió fundar un nuevo asentamiento en lo que es la actual parroquia de El Reventador, luego la interrelación con los trabajadores de mantenimiento del SOTE había dinamizado un tanto la economía local y les servía, en su momento como medio para acceder a ciertas facilidades logísticas, en el tiempo en el que el servicio de transporte público prácticamente no había, es decir, la primera experiencia para los habitantes de El Reventador tenía una valoración positiva, salvo el problema de los derrames.

Con la construcción del poliducto a inicios de los noventa las cosas cambiaron ya que la población estaba bien establecida y se había consolidado los cultivos y la ganadería, y esa nueva infraestructura generó afectación directa a los cultivos e insatisfacción por el trato, pues era una obra del Estado y para los funcionarios de turno, según indican en las entrevistas, el reconocimiento a la afectación era algo marginal y poco reconocido. En la construcción del poliducto hubo manifestaciones de reclamo:

“Al pasar el tiempo se construyo el poliducto, que también hicimos un poquito de frente (conflicto) para exigir que haya una buena indemnización para los dueños de fincas (porque dañaron los cultivos de naranjilla y tomate), para que ocupen la mano de obra local, y que aporten al desarrollo de la parroquia. Se logró poco.” (Entrevista, código 8).

Esta última experiencia negativa quedó en algunos de los finqueros, y fueron ellos los que desde un inicio se oponían a que otra tubería pasase por sus propiedades; en este punto hubo más peso por parte de la visión favorable de la mayoría de personas del centro poblado que de unos pocos finqueros que tenían una posición más bien escéptica y de rechazo. Entre los finqueros, es decir, los propietarios de tierras por donde pasaría el oleoducto, había también la expectativa de las indemnizaciones que se supone serían considerablemente más altas de las que recibieron por el poliducto, y por otra parte también había la expectativa de que la construcción del OCP trajera buenas obras de compensación social, porque esto se había ofertado ampliamente antes del proceso constructivo del ducto.

Así, en un escenario más favorable que adverso se inició la construcción del ducto en el área de El Reventador, y los primeros acercamientos que hicieron con la población y específicamente con los propietarios de fincas por donde pasaría el ducto, produjo las primeras tensio-

nes ya que el trato no hacía directamente el consorcio OCP sino una empresa de servicios, por un lado, y por otro la forma apresurada y casi impositiva en la negociación especialmente con personas que tenían poca instrucción formal o eran adultos mayores causó las primeras tensiones:

“[...]muchas veces hacían rápido y confundían a la gente sencilla, y pensaban que era bastante haber llegado a un acuerdo de pago de 1000 o 2000 dólares, sin saber lo que se afectaría a futuro, entonces ahí comenzó a haber negociaciones desiguales [...] (Entrevista, código 10).

Esta situación se repitió con muchos propietarios de fincas, y al mismo tiempo se creaba malestar entre los mismos pobladores de la parte urbana de la parroquia, porque se trataba de familiares o conocidos que estaban siendo afectados por indemnizaciones desiguales y arbitrarias:

“[...]dijeron que van a pagar bien a todos, y en un primer momento dijeron que iban a hacer el estudio para las indemnizaciones, y de ahí vino el problema porque no pagaron por igual a todos; a lado de mis fincas tengo un vecino que es coronel del ejército, a él por el paso por la finca que es una sola le pagaron más de 20.000 dólares y por donde mi avaluaron el paso por dos fincas, que es doble del vecino con el mismo pastizal por 6 mil dólares. La propiedad del coronel es 280 metros de ancho, y la mía es el doble son casi 600 metros y me querían pagar menos. O sea no era por igual.” (Entrevista, código 10).

A partir de esta inconformidad es que se agrupan los propietarios de fincas, los moradores del centro urbano, y se inician protestas que se centraban en tres aspectos: el pago justo de indemnizaciones, la afectación a las propiedades, y la exigencia de mecanismos de compromiso y cumplimiento para que se ejecuten obras de compensación social. Cabe mencionar en este punto, que no hubo otro tipo de argumento, como por ejemplo los ambientales, para las acciones de protesta a pesar de que hubo, previamente, información de una ONG ambientalista respecto a los efectos de la construcción de oleoductos de la envergadura del OCP en otros países, donde se ilustraba una situación catastrófica.

“Al comienzo estaban favorable al proyecto, había bastante expectativa por eso, muchos querían por que mencionaron bastantes beneficios,

otros en cambio estaban en duda pero eran menos. Lo que pasa es que circuló el comentario de la experiencia del paso de OCP -oleoductos- por otros países, debe ser que son oleoductos de esas empresas y que hubo mala experiencia. Vinieron de Acción Ecológica ha informar eso, mostraban el problema con otros oleoductos, gaseoductos y decían que se empieza a contaminar el agua, que eso producía enfermedades, y muchos daños a la salud y al ambiente de ahí vino la duda de algunas personas porque no sabían lo que iba a pasar.” (Entrevista, código 10).

No obstante de eso, el énfasis fue totalmente distinto al estrictamente ambiental, y de hecho, la consigna fuerte en este caso era por un lado “indemnizaciones justas para el paso”, y el otro un reclamo a la falta de obras de infraestructura, particularmente, de la vial “por cada metro de tubería, un metro de vía ...”.

La suma de las protestas de los finqueros con las demandas de seguridad para el cumplimiento de la ejecución de obras para la población, hicieron que el conflicto tomara fuerza en el centro poblado de El Reventador y que el escenario inicial de “allanamiento” a la construcción cambie momentáneamente a uno desfavorable. En este punto, hubo dos tipos de resistencia: en el centro poblado se unieron autoridades, moradores y algunos finqueros para obstaculizar la vía y hacer proclamas a favor de sus argumentos (económicos/reivindicativos) y en las fincas, por su parte, algunos de los propietarios se aprestaban a impedir la presencia y el paso de los obreros que estaban instalando el ducto.

Estos enfrentamientos fueron intermitentes a lo largo de dos semanas, y la intensidad de protesta también fue variable. El uso de la fuerza pública desmedido a juicio de los manifestantes dispersó, de a poco las protestas, pero también la intervención de las autoridades del Municipio de Gonzalo Pizarro, porque previamente comprometieron facilitar el paso del ducto con la condición de que se asignen fondos para las obras de compensación social. En el caso de El Reventador, se reclamaba con prioridad el sistema de agua potable:

“En ese entonces no tenía casi ningún reconocimiento la Junta Parroquial, no eran tomados en cuenta en el presupuesto, en los planes de desarrollo, nada, todo se hacía a través del Municipio, entonces no podíamos nosotros prácticamente manejar nada de obras, nosotros esperábamos con esos recursos poner un buen sistema de agua potable, pero eso no se hizo, fracasó.” (Entrevista, código 8).

Los diferentes acercamientos a los manifestantes, más una acción de alguna manera aislada de los propietarios de las fincas afectadas por el paso del oleoducto, hizo que en esta población del nororiente el proceso de movilización y conflicto sea, comparativamente, menor a lo que sucedía al noroccidente.

La posición de los propietarios de las fincas era distinta entre ellos, y al final no había una postura homogénea frente al problema porque algunos consideraban haber recibido una buena indemnización y porque según la perspectiva de los entrevistados no valoraban los impactos o problemas futuros del paso de la tubería por sus propiedades; en ese momento, interesaba concretar el acuerdo y recibir el dinero acordado en la negociación para permitir el paso del ducto y el uso de ese espacio del derecho de vía por veinte años.

A pesar de que el conflicto tenía distintos tintes y que las protestas tenían diferentes motivaciones, sí causó un malestar generalizado el trato con una buena parte de los propietarios del área de El Reventador por donde pasó la tubería, ya que manifiestan hubo una actuación poco ética y con ribetes de abuso por parte de quienes negociaban, pues en muchos casos se hacían acompañar de la fuerza pública y daban señales coercitivas que influían en el resultado de la “negociación” con perjuicio para los propietarios:

“[...]en otros casos decían que si no se llegaba a un acuerdo el Estado les iba a expropiar y decían que no iban a recibir nada, por ese temor tenían que firmar contratos con pagos bajos; en otros casos llegaban con la policía y eso les intimidaba, y por esta razón también firmaban el pago y las indemnizaciones bajas.” (Entrevista, código 10).

“[...] la indignación de la gente es por la forma abusiva que ingresaron los trabajadores, porque incluso utilizaban a los mismos policías, a las mismas autoridades, no se encendió el problema por los árboles o por los ojos de agua, aunque eso si se dio, sino por la actitud abusiva en la que ingresaban, esa fue la chispa que encendió el fuego.” (Entrevista, código 10).

Estos problemas de inconformidad por parte de los finqueros afectados por el paso del ducto, hizo que al poco tiempo se agrupen en la Red Amazónica que recogía las demandas de los finqueros perjudicados por las bajas indemnizaciones y de manera colateral se peleaba por

otros argumentos como el daño a las condiciones del suelo y de las vertientes de agua de las fincas, y otros argumentos de tipo más ambientales como el cambio de las condiciones naturales de la zona y su relación con la salud de las personas del área de influencia de este proyecto en esta parte del nororiente. La organización estaba a cargo de llevar el juicio contra el consorcio OCP. Este es un aspecto del conflicto que se ha mantenido, porque al igual que al noroccidente, el problema con actores más individuales (propietarios de fincas afectadas por el paso del ducto) llevaron el conflicto a un nivel judicial que no está resuelto, y que según las evaluaciones de algunos de los finqueros de El Reventador, no se avizora un pronto y favorable desenlace porque están litigando con una empresa con socios trasnacionales.

El núcleo del conflicto con los moradores de la parte urbana de El Reventador duró, como ya se mencionó, dos semanas, pero el conflicto con los propietarios de fincas se sucedía uno tras otro conforme pasaba la tubería, y este proceso en el área de la parroquia El Reventador, duró cerca de cuatro meses; el pago desigual, donde a unos se indemnizaba menos y a otros más, por razones que podrían resultar obvias como el hecho de que en unas propiedades podrían tener más cultivos y mayor afectación, produjo una división en los propietarios de fincas afectadas, que en un punto planteaban agruparse para obtener indemnizaciones más equitativas o justas. Esto no resultó por efecto de esa misma diferenciación en el pago y los intentos de agrupamiento para hacer un frente común se desarticularon.

En este punto, a pesar de que el conflicto en este sitio del nororiente involucraba a los moradores de El Reventador, muchos de los cuales tienen propiedades en la parte más rural de la parroquia y eran afectados directamente por el problema, estaba dividido en dos tipos de reclamos centrales: el primero por el tema de la desigualdad económica de las indemnizaciones, la segunda por los reclamos para que se cumplan las obras de compensación ampliamente ofrecidas que, a su vez, era también una respuesta a la marginación de acciones de desarrollo local por parte del Estado en la parroquia y que había reclamado por mucho tiempo, como el tema del agua potable.

El conflicto, como se manifestó, concluyó en poco tiempo en el centro poblado porque se llegaron a compromisos con el Municipio de Gonzalo Pizarro para que éste con el fondo de la compensación ejecute las obras prioritarias pedidas por los habitantes de El Reventador, y

el segundo bajó en intensidad una vez que el oleoducto terminó de pasar por la jurisdicción de esta parroquia. El conflicto, al nivel de actores más individuales, continúa en forma de litigio y no concluye hasta el presente.

Para los pobladores de El Reventador, este conflicto por la construcción del nuevo oleoducto trajo algunos efectos: por un lado, hay quienes miraron como una oportunidad para mejorar la condición de la cabecera parroquial porque luego de la construcción se hicieron algunos proyectos de desarrollo, pero en cuanto a uno de los más importantes que era la dotación de agua potable, no se cumplió del todo por la ineficiente gestión de la obra por parte del Municipio ya que el sistema resultó mal ejecutado, y la segunda en la que algunos de los finqueros aprovecharon de las indemnizaciones para adquirir bienes, crear negocios pequeños y mejorar sus fincas; por otra parte hay quienes creen que la construcción del oleoducto no ha traído mayores beneficios y que en cuanto a las obras de compensación social no se justificaban frente al impacto socio ambiental dejado, y otro grupo mira como un efecto negativo porque lo que resultó de esto es una serie de problemas en sus propiedades (daños a las vertientes de agua, a la estabilidad del suelo, al drenaje de las aguas, a la calidad del suelo y a la seguridad de las fincas porque se hicieron “guarda rayas” -camino de acceso- por donde entran a robar ganado). Para otros pobladores la construcción permitió generar plazas temporales de empleo y esto ha ayudado en algunos casos a mejorar la oferta de trabajo, aunque el efecto secundario es la pérdida de mano de obra para las actividades productivas de la zona (ganadería y agricultura). Desde el punto de vista social, a pesar de que hubo cierta división entre los finqueros afectados por la construcción por el tema de las indemnizaciones, no pasó a más, y ahora tienen una relación estable.

El caso del conflicto en El Reventador muestra sobre todo el énfasis en las respuestas e impactos sociales bajo el argumento económico, reivindicativo y quizá ético, pero no se reveló el problema dentro del contexto de la lucha ambiental o por la defensa del medio ambiente como *leitmotiv* de la reacción social.

El análisis desde la sociología del conflicto y las lógicas de acción subyacentes

De manera general en el conflicto generado por la construcción del OCP se observó al menos tres posiciones: los que estuvieron a favor de la ejecución de dicho proyecto, los que se oponían a la construcción de manera radical⁷⁴, y aquellos actores sociales que compartían la perspectiva de la necesidad de construir un nuevo oleoducto, pero se oponían a la ruta norte, de hecho, en el período (2001-2002) apareció el slogan que manifestaba “Oleoducto sí, por Mindo no”.

Estas posiciones que pueden reducirse en dos, a favor y en contra, es un primer parámetro para agrupar al conjunto de actores entre quienes apoyaban la ejecución del proyecto y quienes se oponían sin considerar la intensidad de esa oposición, pues como se ha mencionado, va desde posturas radicales que planteaban un rotundo no al proyecto hasta otras que dicen sí, siempre y cuando se opte por otra ruta, es decir, condicionalmente; sin embargo, los que tuvieron esta posición condicionada al final se suman a la posición contraria a este proyecto porque no hubo ninguna variante en el trazado de la ruta norte y el oleoducto pasó por el área de Mindo – Nambillo, con lo cual no estaban de acuerdo; así vemos la constitución de dos grandes grupos con intereses opuestos y antagónicos.

Los actores sociales opuestos al proyecto de construcción del nuevo oleoducto argumentaban su oposición en base a dos criterios, el uno predominantemente ambiental y el otro predominantemente económico-político. Los que centraron su rechazo en base al planteamiento ambiental denunciaban la afectación a varias áreas naturales sensibles y en particular al Bosque Protector Mindo - Nambillo; por otra parte sustentaban, también, su rechazo por razones de vulnerabilidad frente a potenciales rupturas del ducto porque su trazado coincidía con zonas de mucha actividad sísmica y volcánica.

El otro argumento para la oposición era más de tipo coyuntural y predominantemente económico y reivindicativo; esta oposición que luego se tornó en conflicto social se produjo durante la construcción del oleoducto y posteriormente en la etapa de operaciones del mismo. Este rechazo se fundamentó en la desigualdad e irregularidades presentadas en el pago por la figura legal de servidumbre para el paso del oleoducto y la constitución de hipotecas para el uso del derecho de vía,

es decir, por el problema de las compensaciones a causa de los daños provocados al momento de instalar el ducto. También surgió una oposición momentánea o coyuntural desde las instituciones públicas representadas en los Gobiernos Locales (Municipios), en las juntas parroquiales o en las comunidades por donde atravesó el oleoducto por tensiones derivadas del desfase entre ofrecimientos – expectativas creadas y demandas altas de los gobiernos locales para la realización de obras públicas usando como medida de presión, el contexto en general, de la construcción del oleoducto pero también la ausencia de recursos por parte del Estado y el gobierno central.

Como se vio, este tipo de oposición (económico-política) convertida en conflicto fue predominante a lo largo de los 500 kilómetros de instalación del oleoducto; Mindo fue, en este sentido, una suerte de “ínsula” de rechazo por razones fundamentalmente ambientales, en medio de una oposición coyuntural más bien del otro tipo y de los reclamos de los propietarios por donde pasó el oleoducto que planteaban mayores indemnizaciones y/o compensaciones.

Ahora bien, bajo esta consideración se puede esbozar la posición de los diferentes actores de cara al conflicto en los cuatro campos o “dimensiones estructurales” que se plantean desde la sociología de conflicto⁷⁵. Antes de perfilar este ejercicio analítico, se debe tomar en cuenta que la posición de los actores en esas dimensiones varía según el contexto, la dinámica del conflicto y las interacción entre los diferentes actores en momentos distintos; pero para esta parte del trabajo nos planteamos ubicar a los diferentes actores, primero haciendo un corte en el conflicto localizado en Mindo (para tener una unidad de análisis más delimitada e ilustrativa del caso), y segundo ubicándolos según el peso predominante que se observa, en el contexto del conflicto, en los respectivos campos o dimensiones estructurantes (Anexo 6: Esquema 1)

En la dimensión política: están los actores gubernativos que representan al Estado y los principales son: el gobierno de turno, encabezado por el Presidente Gustavo Noboa, el Ministro de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, alcaldes en este caso de los cantones de Los Bancos y Gonzalo Pizarro, juntas parroquiales, los líderes de las comunidades en conflicto, y como parte del aparato estatal la policía y el ejército. Algunos de estos actores de la dimensión política tuvieron en un momento dado posiciones fluctuantes respecto al conflicto, como fue el caso de la Ministra del Ambiente que en un momento dado ordenó

la paralización de la construcción del oleoducto en Guarumos. Aunque en la matriz no se a puesto a Acción Ecológica en la dimensión política creemos pertinente, al menos, indicar que jugó un rol bastante importante y activo en ese nivel.

En la dimensión económica: en este campo se sitúa el consorcio OCP y dentro de este las empresas: Repsol YPF, Encana, Occidental, AGIP, PERENCO, Kerr-Mcgee; la contratista y ejecutora de la obra Techint (todas ellas transnacionales), los financistas el Banco WestLB de Renania, el Banco Nazionale de Lavoro de Italia, las empresas contratistas y subcontratistas nacionales, las organizaciones ambientalistas transnacionales que sustentan económicamente la campaña encabezada por Acción Ecológica. En esta dimensión consta el Estado, de manera subyacente, aunque no participa de manera directa en este campo del campo del conflicto, indudablemente es un actor económico sí se toma en cuenta los objetivos de fondo y las motivaciones para la construcción del oleoducto que es la ampliación de la frontera extractiva del petróleo. Por otra parte, es interesante destacar que la gran mayoría de los actores inmersos en esta dimensión económica son los que promueven el proyecto, obviamente, están a favor del mismo y son quienes detentan una gran influencia sobre el Estado. Los actores ambientalistas internacionales juegan, entre otros aspectos, un rol económico importante en apoyo de las campañas en contra del proyecto.

En la dimensión social: se agrupan la gran mayoría de actores que se oponen al proyecto, que van desde las organizaciones sociales locales, los ciudadanos agrupados en forma espontánea para rechazar la construcción, las organizaciones ambientalistas nacionales, entre la que se destaca Acción Ecológica y la Red Amazónica (Mindo – El Reventador), los medios de comunicación, cuya posición fluctúa respecto a estar en pro y contra del proyecto. Esta dimensión social engloba a casi todos los actores sociales que se opusieron, de distintas maneras, al proyecto y que de alguna forma, se puede observar de los casos estudiados en la tesis, circundan a los actores directos del conflicto. Los funcionarios del consorcio, y de la constructora forman, en su momento, parte del entramado social en los sitios estudiados, porque en unos casos entran en la negociación del derecho de vía, en las respuestas al conflicto, y en el mismo conflicto cuando intervienen.

En la dimensión ética: están los actores sociales que son afectados directamente por el proyecto de construcción del oleoducto de Mindo

y El Reventador que son los finqueros por donde pasó el ducto. Dentro de este grupo están los habitantes de Mindo que tienen una posición distinta en la medida que defienden, más que el tema económico, la situación ambiental que tiene que ver con la dimensión ética de defender un espacio natural, un modo de vida ligado a ese espacio, y valores que se corresponden con una visión crítica del problema economía/ambiente y desarrollo. Aquí se puede incluir, también, a varios activistas pero principalmente a Julia “Butterfly Hill” que aunque no estaba inmersa en el conflicto directamente, encarnaba, la posición de defensa ambiental coincidente con la perspectiva de los activistas de Mindo y de las organizaciones ambientales de apoyo, en este caso Acción Ecológica.

Los actores de esta dimensión ética del nororiente en el caso de El Reventador, están los pobladores que reclaman obras frente a la marginación del Estado, también se suman a los reclamos por malos tratos a los finqueros. Dentro de esta dimensión están los afectados directamente que denunciaban y reclamaban por la irregularidad en las indemnizaciones debido a las diferencias de pago en la misma área, y también por el argumento de mal trato, represión y negociaciones atravesadas por factores coercitivos.

El conflicto causado por la construcción del oleoducto, y analizado desde dos sitios distintos al noroccidente (Mindo) y al nororiente (El Reventador) pone en evidencia una trama compleja de actores, pero es evidente que en el caso de Mindo hay una mayor cantidad de estos, quizá porque los intereses en juego son mucho más fuertes, y también diversos. La fuerza del conflicto en Mindo convocó a una gama de actores desde locales hasta internacionales, y esto probablemente obedece al hecho de que el contacto de Mindo es más abierto hacia actores externos desde hace muchos años e incrementados por un despunte del turismo y por el hecho de haber seguido un proceso con logros en el campo de la protección ambiental, me refiero al mismo bosque Mindo – Nambillo y al hecho de haber sido declarada como *Important Bird Area*, y porque es un sitio donde efectivamente, la naturaleza “convoca” y la proximidad con Quito y el buen acceso ayuda.

De alguna manera, la relación entre un fuerte interés en lo ambiental, por el mismo hecho de que casi toda la población depende del turismo y esta actividad a su vez del estado de conservación del área hizo que la reacción sea mucho más fuerte y exacerbada que en El Reventa-

dor, pues estaba amenazada un área protegida, un estatus de conservación, reconocimiento a la biodiversidad y obviamente el eje de la economía local, que como mencionaron en las entrevistas es lo que da la vida al pueblo entero porque dinamiza la mayor parte de las actividades productivas. En esta parte se puede plantear una hipótesis subyacente, con una las lógicas de acción, que tiene que ver con el juego de intereses fuertes en el ámbito de la conservación, una mayor formación y una respuesta que atraviesa varias escalas, conectadas por una preocupación ambiental interna y externa de lo que sucede en sitios ambientalmente representativos, lo cual moviliza una “acción colectiva” mucho más fuerte por sus propios fundamentos. En este sentido se observa una respuesta con un involucramiento social más amplio.

En El Reventador la respuesta, como pudo apreciarse, es más limitada por el tipo de lógica de acción que movilizó a la población involucrada con demandas más limitadas al campo de la reivindicación de obras públicas ajustadas a una noción limitada de desarrollo y esto a su vez, incidido por problemas de tipo más individualizados como fue el reclamo por las indemnizaciones desiguales e injustas. Este es un nivel relacionado con los límites de la respuesta, pero también se encaja en el sentido de que esta parte del oriente no está conectada, por contraste con Mindo, con el interés internacional por las reas protegidas adyacentes a la parroquia como es el caso de la Reserva Cayambe – Coca, que de cierta manera no está amenazada como el área protegida de Mindo. En El Reventador, es evidente que los problemas ambientales asociados a la actividad petrolera terminaron, por la fuerza de los hechos y la alteración previa del medio ambiente, confinándoles a un interés subalterno o a una suerte de desinterés en lo ambiental provocado por la misma visión de la población local respecto a sus prioridades.

Cabe mencionar que la parroquia de El Reventador tiene en su territorio una parte importante de la Reserva Ecológica Cayambe Coca, pero la misma no se vio amenazada porque el oleoducto pasaba cerca del derecho de vía de los otros ductos y porque el medio está totalmente alterado por la ganadería y la agricultura. La presencia de Acción Ecológica en los dos sitios de estudio, demuestra que no logró conectar, en este último caso, el argumento ambiental en los reclamos y en la motivación central del conflicto, era otra lógica de acción. Esto evidencia lo que Fontaine (2003) pone de manifiesto y es la idea de que “los conflictos socio-ambientales cristalizan una multitud de fenómenos” y

abarcen diferentes estrategias de acción y diría, fundamentos de acción, porque en cada sitio se aprecia una defensa basada en ejes de interés distintos, pero no excluyentes porque en el fondo se reclama una acción del Estado desconectada de los intereses locales de la otra parte del mismo Estado, la sociedad civil, que responde a sus propias visiones, necesidades y contextos de vida.

En este sentido, es importante ver también que tras los conflictos y cualquiera que sea su fundamento (ambiental/económico/ reivindicativo) está presente la necesidad política de establecer un cuestionamiento a las decisiones verticales promovidas por los gobiernos y por eso la necesidad de establecer acciones que interpelen dichas decisiones y creen a su vez espacios para el encuentro con la esfera política, que es por donde también suelen transitar los conflictos: “más allá de los conflictos socio-ambientales, lo que está en juego para aquellos movimientos es llegar a convocar a la sociedad alrededor de un proyecto de desarrollo sostenible y crear las condiciones de un diálogo con la sociedad política...” (Fontaine, 2003: 97).

Dentro de esta reflexión hay un punto central que parece atravesar los conflictos derivados por la actividad petrolera claramente delimitada por el mismo autor antes citado, y refleja un telón de fondo respecto hacia donde se quiere ir en la relación ambiente sociedad:

“En el centro de muchos conflictos ambientales originados por las actividades hidrocarburíferas se ubica la lucha por la definición de un modelo de desarrollo que nunca es objeto de un consenso general (aún en el interior de las mismas sociedades en conflicto⁷⁶) porque los actores en oposición comparten distintas visiones del mundo, y lógicas racionales” (Fontaine, 2005: 139).

Esto, bien puede verse como una reflexión en un contexto de análisis de la ecología política, lo cual coincide con uno de los elementos relevantes del análisis de esta tesis, que se puede ver en el hecho, comparativo, de lo que quiere por desarrollo Mindo y El Reventador desde sus propios campos de interés, lo cual está muy ligado al factor económico porque es evidente que una población que depende, íntegramente del estado de conservación del ambiente (ecoturismo) diverge de aquella población que más bien alterado el ambiente para alcanzar una subsistencia basada en la explotación activa del mismo (ganadería y agricultura), y que más allá de esto, depende también en parte de la activi-

dad petrolera cuando esta última provee de empleo.

El caso y la reflexión socio ambiental desde la ecología política

El estudio comparativo de caso del conflicto generado por la construcción del nuevo oleoducto de crudos pesados en Ecuador permite, por una parte ver algunos de los elementos definitorios de la ecología política y por otra analizar el ámbito de la ecología política en relación con este tema.

La construcción del nuevo oleoducto supuso, como se ha visto a lo largo de la tesis, una serie de conflictos desatados a lo largo de los 500 km de construcción, los más fuertes se dieron en los dos extremos del oleoducto en Lago Agrio y Esmeraldas, pero fue singularmente importante observar los conflictos desatados en Mindo y El Reventador por sus características especiales. Es evidente que los conflictos en los demás sitios incluidos Lago Agrio y Esmeraldas, pugnaban por un acceso y reparto de recursos para sus respectivos gobiernos locales, siendo puntos críticos del inicio y del término de las operaciones de transporte de crudo y habiéndose construido una parte importante de la infraestructura del oleoducto en sus jurisdicciones se tornaban en puntos de presión importantes; la cuestión es que en la mayor parte de los casos los conflictos se dieron por una articulación de las demandas a la “compensación social” y por lo tanto a la obtención de recursos, pero también al manejo del escenario político; no es casual que tanto en Lago Agrio como en Esmeraldas los alcaldes que estuvieron administrando los gobiernos seccionales durante la construcción hayan sido reelectos por dos ocasiones más en la medida que la población respaldó políticamente la posición de dichas autoridades y que tuvieron una fuerte inyección de recursos para hacer obras que les generaron, al final, réditos políticos. El conflicto en estos sitios era similar al del resto de la ruta del oleoducto; también se daban reclamos aislados respecto al pago e indemnizaciones por la configuración del derecho de vía, pero el matiz que tomó el conflicto en Mindo fue, si cabe el término, atípico a lo largo de lo sucedido en la ruta y quizá el caso de El Reventador, hacia el nororiente es un tanto distinto por la fuerza de las protestas pero es muy parecido al resto en cuanto a los contenidos y fundamentos del conflicto, lo cual se vio en las lógicas de acción del anterior subcapítulo.

En el caso de Mindo, es evidente que la lógica de acción o el núcleo del conflicto fue el rechazo a una decisión política y económica a juicio de algunos de los entrevistados, respecto al trazado de la ruta del oleoducto por el área protegida del bosque Mindo – Nambillo en el sector de Guarumos. Este bosque cuya área protegida es de 19.200 ha., si bien es parte del Estado, también en sus alrededores hay propiedades privadas que al adherirse al objetivo de conservación ampliaron el área protegida y de amortiguamiento a aproximadamente unas 10.800 Ha. más, y el ducto, tal como sucedió zanjó una parte del área protegida del Estado y otra de propiedad privada. Aquí se puede ver, claramente tal como lo mencionan Schmink y Wood, entre otros autores que han abordado el tema de la ecología política, el hecho de que la política y añadiría los intereses económicos sectoriales, intervienen de manera gravitante en el ambiente y de manera paradójica, el mismo Estado representado por los gobiernos de turno, son los precursores de conflictos donde se pone de evidencia el peso (poder) que dan a la balanza y por eso esta construcción privada tuvo todo el soporte posible de la fuerza pública. Obviamente, la retórica de prioridad de Estado, vulneraba las mismas leyes que se supone amparan a la sociedad civil y por lo tanto a una parte del mismo Estado. Esta es una clara dimensión política en la problemática ambiental, donde el ambiente se convierte en un objeto de disputa económica con derivaciones políticas.

De su parte, la respuesta de Mindo demuestra que, a pesar o por causa de, haber sido un sitio aislado al que podría llamarse enclave se mantuvieron importantes recursos naturales (bosques, flora y fauna, cuencas hídricas, ríos, etc.) pero también fue un sitio donde personas de otras nacionalidades, especialmente europeas, decidieron quedarse en el lugar y probablemente quisieron evitar la degradación ambiental tan fuertemente vivida en los países de origen (Alemania e Inglaterra). Sin desmerecer la capacidad de respuestas de las personas nativas del área, a partir de esas experiencias y aún por la misma experiencia vivida en Loja, se decide Mindo por una forma de vida distinta, de hecho, los cazadores se convierten posteriormente en protectores del bosque, y los artesanos carpinteros que trabajaban con los recursos del bosque acuerdan proteger ese espacio porque, entre otras cosas, ven que su actividad puede terminar con ese recurso y es ahí donde deciden proteger, en este caso, la base de su sustento.

Esto permite ver un discernimiento que calza en la perspectiva de la ecología política porque una de las cosas que advierte este campo es el análisis de los límites del crecimiento (Little, 1992), es decir, podían explotar la madera hasta obtener un pico de ganancias pero luego quedarían sin recursos y habrían tenido que optar por otro sendero o por otra vía. Probablemente, Mindo habría sido un recinto agrícola o ganadero como muchos otros del Cantón Los Bancos. Este es el sendero donde el jardín se bifurca.

A partir de esto, y de haber tomado otro sendero, la población de Mindo decide ir por la protección de sus recursos años antes de que haya el proyecto de un nuevo oleoducto; su población impulsó la creación de un bosque protector, de hecho, fue el primer bosque del país con ese estatus y se empieza a madurar la idea de un uso sustentable del bosque a través del turismo que en un inicio fue sobre todo internacional y especializado (porque la gran biodiversidad de ese bosque especialmente de aves e insectos, atraieron el interés de turistas biólogos, botánicos, ornitólogos, etc.), y posteriormente atrajo la atención de personas de Quito que buscaban, en los alrededores de la capital, simplemente naturaleza, otra naturaleza que se veía y ve cada vez más distante y ajena al propio espacio urbano.

La conexión de Mindo con otras formas de ver la vida y la naturaleza amplió el campo de interés y se arraigó aún más la idea de conservación de sus recursos naturales; a su vez, Mindo se conectaba directamente con lo global lo cual le permitió acceder a información, a otro tipo de discernimiento y por lo tanto a otra opción de vida, lo cual se refuerza por el contacto entre moradores locales y turistas con intereses convergentes en la naturaleza y su conservación Leff (2004) diría es el surgimiento de una conciencia de y por la naturaleza.

La opción de uso del bosque en forma no extractiva (turismo) fue creciendo de a poco y como toda actividad económica ha tenido históricamente sus altos y bajos; antes de la construcción del oleoducto la actividad bajó drásticamente por efecto de la erupción del Guagua Pichincha ya que se publicitaba el riesgo de ir al noroccidente y de manera especial a Mindo. Este período de declinación de la actividad duró unos pocos meses y luego el turismo se normalizó e incluso se incrementó porque habían concitado la atención de este pueblo bucólico del bosque nublado.

En este punto, la construcción del OCP entra en un momento donde el turismo se consolidaba como el motor de la economía local y esto, obviamente, estaba bastante articulado con una visión de desarrollo conservando los recursos; cabe decir, que el turismo controlado es una opción y se había evidenciado una importante relación entre el mantenimiento del bosque – economía – calidad de vida. La construcción del oleoducto amenazaba al núcleo de esa relación y a una opción de vida.

La respuesta política era obvia y permitía la articulación con actores en afinidad con su lógica de acción manifestada en el conflicto: la protección de la naturaleza y sus recursos, desde la óptica y acciones colectivas de resistencia de Mindo, hasta el apoyo político enfilado a cuestionar la significación de fondo del oleoducto que es la ampliación de la frontera petrolera por parte de Acción Ecológica y su probable conexión con el tema del Yasuní. Lo interesante de esto es que en ninguno de los casos estudiados (Mindo – El Reventador) se pone de manifiesto el hecho de la relación entre el oleoducto y el futuro petrolero del país, son en un punto realidades, si cabe el término, concéntricas y encerradas en un ámbito muy específico del lucha porque lo que estaba en juego era directamente su futuro y su elección de desarrollo que es un campo de expresión de la ecología política, porque desató, como diría Leff un pensamiento crítico y una acción política, esto enmarcada en la defensa de un bosque y de un proyecto económico propio.

Por otra parte, el conflicto socio ambiental en un “punto” pequeño del bosque nublado del noroccidente, se articuló con manifestaciones a otras escalas y con la suma de otros actores políticos que difícilmente participarían de no estar Mindo conectado con otras escalas y actores: la presencia de diputados europeos de partidos verdes de Italia y Alemania, la presencia de organismos de crédito internacionales, y de actores del activismo ambiental del norte (Estados Unidos y Europa). El foco de atención fue el bosque, su defensa, la posición de los moradores y la lucha, como ya se ha mencionado, por una opción de vida pero también como resultado de una fuerte interpelación al gobierno de turno que obviamente defendía a raja tabla esta posición ante todo económica y política de defensa a ultranza de un sector específico y probablemente de un proyecto ambicionado sistemáticamente: más petróleo e ingresos para el aparato estatal.

La visión de Mindo sobre el medio ambiente y lo que quieren por desarrollo en cuanto a la opción de un turismo, que hipotéticamente se incrementó a partir de la construcción del OCP⁷⁷ como un efecto no esperado del conflicto, ha puesto en el plano del pensamiento crítico de la población unos límites al desarrollo derivado de esa actividad terciaria, porque el crecimiento acelerado de la población comienza a impactar sobre su propia capacidad de recibir más población y esto presiona sobre el medio ambiente, que es precisamente, lo que se quería evitar en el contexto más general de la lucha que se hizo durante la construcción del oleoducto. Es lo que se diría una situación paradójica.

Esta profundización de la conciencia local sobre el ambiente, en muchos casos, se articula con una visión bastante crítica de lo que el mundo impone por desarrollo y lo que la gente acepta o piensa en cuanto a vivir en un ambiente determinado, y en una calidad de relación distinta con ese ambiente. Es una posición que concuerda con personas (que no necesariamente se adscriben como ecologista, ambientalistas, amigos de la naturaleza, etc.) sino simplemente como humanos que tratan de reencontrarse con la naturaleza, al final, con la vida que cada vez más perdemos, desde el modelo de desarrollo de nuestras sociedades de consumo y del modelo económico vigente.

Julia Butterfly Hill, encarna en ese contexto de reflexión, una posición distinta y en contracorriente de lo que se pretende por vida desde el modelo de “desarrollo” tradicional que más bien socava nuestras propias bases de subsistencia. En Mindo, hay un cambio cualitativo a ese nivel y es importante destacar porque buscan, aunque de manera fragmentaria (puesto que no todos tienen una misma percepción del desarrollo) una visión y alternativas que entre en concordancia con el respeto al mundo de la naturaleza. El desarrollo del turismo, plantea también límites, porque la dinamización de la economía local encaja con nuevas demandas y nuevas presiones que, a decir de muchas de las personas entrevistadas, se van desbordando.

Sin embargo es interesante advertir que hay una conciencia de esos límites y eso es lo que cuenta, junto con la idea de proximidad a la naturaleza que está, evidentemente, más manifiesta en Mindo que en El Reventador, eso parece obedecer a todo un bagaje, una interrelación con otros mundos y a un proceso que estuvo y está amenazado, a juicio de sus moradores, por una infraestructura petrolera.

Un punto de inflexión, post conflicto, y que mostró una lucha interna es las opciones de vida; se puso de manifiesto en Mindo cuando los sectores más radicales en la relación con el ambiente, se opuso al asfaltado de la vía que conduce al centro poblado, en un caso no querían que eso suceda para mantener una relación más equilibrada con la naturaleza y otro sector pugnaba porque se de ya que les acercaba más al modelo de desarrollo tradicional en el sentido de que mejoraría su calidad de vida, en cuanto al aspecto del transporte y dinamización de la economía, y esto produjo una división en Mindo porque, como dice la ecología política, los límites se disciernen en el contexto de lo que se comprende y quiere por desarrollo y conservación.

En ocasiones pueden no ser excluyentes, pero la orientación general muestra que el modelo no funciona cuando se prioriza el desarrollo en detrimento de otras variables. El punto aquí, y que se está interiorizando en Mindo, es la discusión de qué se comprende y quiere por calidad de vida la cual es otra de las preguntas ecopolíticas; es obvio, que en el caso de este pueblo del bosque nublado no solo basta con tener infraestructura y servicios básicos sino mantener una relación de respeto y compenetración positiva con el medio ambiente.

Esta aspiración se matiza fuertemente en el caso de El Reventador, donde el problema se concentra en el acceso a trabajo y a mantener su tradicional forma de organización económicamente a través de la ganadería y agricultura. El aspecto ambiental se considera importante pero es más una retórica que una práctica y esto viene de su propia historicidad, de su trayectoria como colonos emergidos de los efectos de la actividad petrolera en el nororiente, e hipotéticamente, de la falta de opciones de información respecto a otras visiones de la relación entre desarrollo y ambiente porque El Reventador es un mundo aún más cerrado a esas posibilidades y en este punto considero es gravitante tener cercanía con otras experiencias o apertura hacia otras racionalidades para aproximar sus perspectivas a una idea más compenetrada con el medio ambiente.

El énfasis del conflicto económico y reivindicativo es el perímetro de su actuación, y es en este punto donde se matiza la idea del “ecologismo de los pobres” cuando las respuestas -conflictos- no se aproximan a esos elementos sino a otros parámetros de lucha que de alguna manera se enfilan más al desarrollo tradicional, no a un desarrollo alternativo como puede ser el aprovechamiento de los recursos naturales

sin que estos sean considerablemente afectados. El punto de reflexión es que en la ecología política se debe analizar por igual la amplia gama de respuestas posibles frente a un problema, que como el caso de la construcción del oleoducto, es eminentemente socio-ambiental, pero donde el énfasis de la lógica de acción va por otro lado, por el lado del acceso a los recursos económicos y a la propuesta desde el plano de la dimensión ética de la equidad de distribución de los recursos económicos y ambientales.

Aunque no lograron en Mindo el objetivo de cambiar el trazado del oleoducto para evitar el paso por el bosque nublado, por la asimetría de las fuerzas en conflicto (lo cual es un elemento de análisis de la ecología política) sí lograron reducir los impactos y probablemente mejoraron el estándar en la construcción del oleoducto en ese tramo; por otro lado consiguieron, también, poner a discusión y a prueba su propia apuesta de desarrollo basada en la conservación de los recursos e intensificaron su concepción más compenetrada con la naturaleza. En uno de los fragmentos de la entrevistada realizada a una joven de Mindo que participó del conflicto se puede recoger, en breves frases, ese cambio cualitativo de percepción:

“no nos importó ir a la cárcel, porque cuando llegábamos a la parte alta del bosque teníamos esa paz, se podía ver unas aves hermosas, se le escuchaba a los osos, o sea, era algo que le llenaba de vida sinceramente, y por eso más se nos pegaba la defensa del bosque, pero cuando subimos al bosque (luego de la construcción) nos llenamos de tristeza porque era como ver que habían destruido tu casa, una casa que le amaste tanto, eso sí duele mucho y creo que es porque el bosque se nos metió en el corazón de nosotros[...] quisiéramos seguir viendo todo verde, no café, no árido.” (Entrevista, código 5).

Mindo se dio a conocer por efecto de este conflicto a una escala, si se quiere, global porque está muy presente en la red el área, sus atractivos, pero también la historia de su conflicto; no es casual que haya una conexión entre las acciones de Mindo y la solidaridad desde Nigeria en África. La ecología política nos demuestra que la problemática ambiental no está delimitada por fronteras, fronteras que de paso resultan ser ilusorias cuando está de por medio nuestra vida en la casa que habitamos todos humanos y no humanos. También nos demuestra y pone en evidencia las relaciones de poder y los resultados de conflictos en con-

textos distintos. El caso de El Reventador es ilustrativo, porque solo se alcanzó unas cuantas obras de compensación social que a la postre, la que consideraban más vital como es el agua potable, fue construida de tal manera que no sirvió de mucho o a juicio de otras personas entrevistadas no sirvió de nada porque el problema del agua no se resolvió sino empeoró. Tampoco se resolvió el problema de las desiguales e injustas indemnizaciones, las cosas marcharon igual, y al fin del trabajo de campo para esta tesis, se había creado una gran expectativa por la construcción de uno de los más grandes proyectos hidroeléctricos del país como es Coca Codo Sinclair ya que esta sería una fuente de trabajo e ingresos, al igual que los que proporciona los derrames petroleros en el área. Ese es el contexto y el perímetro en el que un conflicto tiene su respuesta social, son esos los límites a los que la ecología política se ve abocada, también, a analizar como un reto más en el esfuerzo de consolidar su campo de análisis.

Notas

- 71 Anexo 4: Listado de personas entrevistadas (códigos 1 - 14).
- 72 Información proporcionada en la entrevista código 1.
- 73 Referencia: entrevista, código 6.
- 74 Propietarios de terrenos en el bosque protector de Mindo - Nambillo, moradores de la parroquia Mindo, organizaciones ambientalistas y en especial Acción Ecológica que encabezó la campaña en contra del proyecto.
- 75 Político – social – ético – económico.
- 76 Entre paréntesis comentario adicional de autoría propia.
- 77 Hay una visión dual al respecto, por una parte plantean que el turismo creció por la misma iniciativa de la población de Mindo, por sus gestiones a favor del ambiente y otra en cambio que ve el repunte del turismo como consecuencia indirecta del conflicto y de haberse dado a conocer nacionalmente e internacionalmente por esto. El turismo creció tan aceleradamente que ahora se plantean un límite al mismo y otras alternativas económicas sustentables para no depender exclusivamente de este sector, que puede ser vulnerable frente a crisis internas o externas.

CONCLUSIONES

La construcción del oleoducto de crudos pesados y los conflictos que ello generó puede ser vista a través distintos enfoques, tal como se ha hecho en este caso. La ecología política en tanto campo de análisis permite comprender el problema en un contexto en el que se confronta el desarrollo con la problemática ambiental. En tanto la sociología del conflicto, permite indagar la estructura del conflicto, sus actores, los eventos cronológicos y las lógicas de acción que sirven como insumo para ampliar el análisis desde la ecología política. En ese sentido esta tesis muestra que es posible el tránsito de un enfoque a otro porque hay puentes que conectan a los dos campos de análisis, ese puente es en principio el mismo conflicto y las derivaciones subyacentes.

Este análisis que se desarrolla desde las cadenas explicativas de la ecología política, permite ver que el proyecto OCP respondió a un interés continuo de ampliar la frontera de la actividad hidrocarburífera en el país, este hecho se presenta constante más allá del período de funcionamiento de los gobiernos de turno, en ese sentido, la idea de construcción de un nuevo oleoducto responde a ese interés. La intención de construir un nuevo oleoducto está claramente relacionada con la necesidad de superar el cuello de botella del transporte de crudo por un solo ducto manejado por el Estado, esto a su vez con el fin de hacer viable la ampliación de dicha frontera.

Aunque en la práctica el oleoducto a operado con menos de la capacidad para la que se creó, es decir, 500 mil barriles diarios, es eviden-

te que deja abierta esa posibilidad técnica, en este caso, llenar el ducto que a su vez significa ampliar la explotación de petróleo, será una decisión política que encuentra una constricción por el dilema de la explotación o no explotación del campo ITT en el Parque Nacional Yasuní. Sin embargo, el origen del oleoducto está estrechamente relacionado a esa intención y como se dijo en su momento (1999) a la intención de “modernizar” o potenciar la actividad petrolera, porque es evidente, que las necesidades fiscales del Estado irán en aumento en tanto las reservas hasta ahora explotadas irán en decrecimiento. En ese sentido, el oleoducto es algo más que una tubería, es una llave diseñada para abrir la puerta a esa posibilidad.

El manejo de los cambios en las políticas petroleras, de los contratos son el reflejo del interés político y económico por el que están mediatizadas; cada gobierno ha intentado hacer uso de estos instrumentos para beneficiar sus propios intereses, pero es importante destacar que durante el período gubernativo de Sixto Durán se sentó las bases para ampliar la participación privada en el manejo petrolero del país, y esto a su vez, se conecta con el caso de la construcción del nuevo oleoducto que en la actualidad está en manos privadas y que para que eso suceda se des-regularon leyes que a la postre favorecían a este proyecto y a los inversionistas privados y trasnacionales.

El proyecto se ejecutó en un período de cerca de tres años con una oferta de 50.000 empleos, beneficios de compensación social y el desarrollo de alta tecnología a partir del uso de la fibra óptica. El proyecto generó gran expectativa en el país y especialmente en los sitios de la ruta del ducto. Al final de la obra, que en inicio se presupuestó por cerca de 800 millones de dólares, terminó costando cerca de los 1.400 millones de dólares y esto fue asumido por el Estado cediendo el derecho de uso del ducto por 20 años. El costo de construcción entró en relación directa con el tiempo de concesión del beneficio para las empresas socias del consorcio.

Durante la construcción se dieron conflictos a lo largo de los 500 kilómetros por donde atravesó el ducto; los conflictos fueron predominantemente de tipo económico, político y reivindicativo. El caso de Mindo, a pesar de tener estos componentes, tuvo un énfasis en la parte ambiental por la defensa del área protegida del Bosque Mindo Nambillo y fue la excepción dentro de todo el abanico de conflictos. El estudio de este caso posibilitó una lectura distinta del problema, y permiti-

tió, también, analizar desde el contexto de la ecología política las implicaciones de respuestas que están atravesadas por factores explicativos más amplios.

La diversidad de actores y estrategias de resistencia a la construcción revelaron un proceso y trayectoria importante en el relacionamiento con los aspectos de la conservación. La influencia de actores externos a la comunidad, como el caso de extranjeros que en algún momento vivieron en la población, fue un aspecto determinante en las posteriores respuestas y argumentaciones al conflicto, pues Mindo se abrió desde temprano a otras experiencias donde ponían como acento la protección a los recursos naturales.

El desarrollo de Mindo, muy ligado a lo que ahora se conoce como ecoturismo y su relación socio-económica estrecha con el bosque protector Mindo Nambillo, fue determinante en las respuestas del conflicto. Estas respuestas involucraron a una gama amplia de actores, que a su vez, reflejan una conexión entre una comunidad del bosque nublado y las escalas globales de la problemática ambiental.

El conflicto suscitado en Mindo demuestra, a su vez, que la intensidad de la misma iba en proporción con la intensidad de dependencia de ese espacio natural protegido; lo que se defendía no solo era un espacio de bosque sino la base misma de su economía y de su concepción de desarrollo ligada a la conservación de los recursos.

La crisis y resistencia desatada por el conflicto impulsó un conocimiento de Mindo más allá de los umbrales de Ecuador, se proyectó internacionalmente y eso produjo un conocimiento del área y su problemática. Las campañas de resistencia locales, nacional e internacionales concitaron la atención social, y esto, posteriormente se revirtió en un incremento del turismo; sin embargo hay otro tipo de explicación que más bien reivindica este fenómeno al mismo proceso seguido por la población en su opción por conservar sus recursos y hacer un uso no extractivo de los mismos a través del desarrollo de la actividad turística.

Este crecimiento fue intenso y en la actualidad se debaten frente al límite que se hace necesario poner frente a un “desarrollo” desmedido y no previsto. La situación de Mindo por efecto de un repunte grande del turismo le pone en un nuevo dilema, el dilema de los límites de crecimiento ampliamente discutidos por la ecología política y que revela que más allá de un conflicto coyuntural de otra índole asociado a la actividad petrolera, son también estas opciones las que ponen en riesgo

los recursos protegidos, en esa medida, la reflexión sobre el desarrollo se torna más compleja, pero pone en evidencia que la constante en todo esto son los límites mismos de la actividad humana y el discernimiento del destino que quieran tomar en cuanto se articulen a uno u otro modelo de desarrollo.

Un efecto importante del conflicto fue una suerte de reforzamiento de su opción por el turismo y la conservación de los recursos, una difusión mayor de un interés estrecho por los recursos naturales y una concepción mucho más penetrada por el aspecto ambiental donde el valor de la naturaleza se pone ampliamente de manifiesto, no solo porque es el motor de la economía local, sino porque se aproximan a una relación cualitativamente distinta con el ambiente que es más fuerte en la población joven de Mindo. En este sentido, se puede concluir que los conflictos producen cambios muchos de los cuales se corresponden con su objeto de defensa y otros que tienen derivaciones distintas tales como el crecimiento acelerado de la población.

El conflicto en Mindo, aunque no tuvo efecto en el objetivo de desviar el trazado del oleoducto para no impactar al área protegida, produjo una mayor presión que se reflejó en el incremento de estándar de construcción en el tramo del bosque protector y en el área adyacente a Mindo.

El estudio comparativo de esta tesis es un elemento importante para conocer las dinámicas, implicaciones, efectos y perspectivas del conflicto, pero también para conocer una estrecha relación entre contexto donde se manifiesta localmente el conflicto y las respuestas. El análisis de los indicadores sociales en cada población permite ver, comparativamente y en términos generales, que Mindo tiene una mejor situación que El Reventador, y que la formación de sus habitantes en cuanto a instrucción formal, también es un factor incidente en las respuestas sociales y en la argumentación de su postura frente al conflicto.

En El Reventador, la lógica de acción en el contexto del conflicto se relaciona directamente con la marginalidad, con las demandas de “compensación social” en forma de recursos para obras de infraestructura y proyectos y con reclamos menos colectivos por la desigualdad en las indemnizaciones económicas que la construcción del oleoducto debía reconocer a los afectados. En este caso, el argumento de defensa al ambiente y a los recursos prácticamente no aparece o es bastante secundario.

Esto se explica por el contexto histórico de desarrollo de la población de El Reventador y por su forma de organización económica a tra-

vés de la ganadería, agricultura y del trabajo asalariado en las empresas asociadas a la operación petrolera. En este caso, la resistencia y la movilización colectiva fueron más débiles que en el noroccidente, igual, los argumentos y las demandas eran mucho más coyunturales.

También es, comparativamente, una respuesta más limitada por la falta de conexiones y apoyos a otras escalas, pues aunque Acción Ecológica estuvo presente en El Reventador al inicio del conflicto, no tuvo eco porque su lógica de acción tenía otros intereses que no empataban del todo con el argumento estrictamente ambiental, pero también porque en cierta parte la economía de El Reventador depende indirecta o directamente de la actividad petrolera.

Esto en parte explica la razón de por qué no se unieron poblaciones a lo largo de todo el trazado del oleoducto (500 km) para hacer un frente común y es que en cada sitio se manejaban lógicas de acción distintas, se ponía énfasis en diferentes aspectos o prioridades o el contexto de las negociaciones entre empresa y autoridades desmembraba esa posibilidad. Por otra parte, se observó una evidente diferenciación de dos actores básicos del conflicto: los afectados directamente por la construcción del oleoducto que tenían más reclamos individuales por el tema de las indemnizaciones y los actores más colectivos de los centros poblados por donde atravesó el oleoducto que se movilizaban por obras y las autoridades no solo respondían a ese interés colectivo sino a su propio interés por formarse plataforma política a través de la participación en el conflicto.

Uno de los aspectos centrales en las que decanta la ecología política es la crítica al desarrollo y en el caso de Mindo se ve eso, y el surgimiento de estilos de vida alternativos al desarrollo convencional, como una respuesta misma al nexo que se ha desarrollado con la naturaleza como objeto de concepción y como elemento económico con la salvedad de que el éxito del aspecto económico depende de la conservación, por el contrario, en El Reventador se busca el desarrollo convencional porque la ausencia del Estado le ha confinado a tener una mala infraestructura y escasez de servicios básicos, en este caso se busca precisamente eso como prioridad y no la perspectiva de desarrollo, está articulada necesariamente a una visión inclusiva de la naturaleza y de su estado de conservación en el enfoque de desarrollo que se maneja desde esta parroquia del nororiente.

BIBLIOGRAFÍA

- Acosta, Alberto
2006 “Efectos de la maldición de la abundancia de recursos naturales”, en FONTAINE, Guillaume (ed), *Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador: 3. Las ganancias y pérdidas*. Quito: FLACSO – Sede Ecuador.
- Alimonda, Héctor
2003 “Política, utopía y naturaleza”, en: ALIMONDA, Héctor (comp.), (2003), *Ecología política naturaleza, sociedad y utopía*. Buenos Aires: CLACSO – FAPERJ – ASDI.
- _____ (comp)
2006 *Los tormentos de la materia: aportes para una ecología política Latinoamericana*. Buenos Aires: CLACSO.
- Araúz, Luis
2006 “Contratación petrolera ecuatoriana 1972-1973”, en FONTAINE, Guillaume (ed), *Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador: 2. Las reglas del juego*. Quito: FLACSO – Sede Ecuador.
- Arroba, Ernesto
s.f El Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), pdf. (mimeo).
- Bebbington, Anthony (ed)
2007 *Minería, Movimientos Sociales y Respuestas Campesinas: una ecología política de transformaciones territoriales*, Instituto de Estudios Peruanos. Lima: CEPES.
- Beck, Ulrich
2006 *La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad*. Barcelona: Paidós.
- Bedoya, Eduardo y Martínez, Soledad
s/f “La ecología política y la crítica al desarrollo”, DEBATE AGRARIO, 29-30. Perú: CEPES.

- Bustamante, Teodoro (ed)
 2007 *Detrás de la cortina de humo: dinámicas sociales y petróleo en el Ecuador*. Quito: FLACSO Petroecuador Cuadernos de Trabajo.
- Comas D' Argemir, Dolors
 1998 *Antropología económica*. Barcelona: Editorial Ariel S.A.
- De Coster, M, Bawin, L, Poncet, M
 2004 *Introducción a la sociología*. Madrid: Editorial Tecnos.
- Deleage, Jean
 1993 *Historia de la ecología: una ciencia del hombre y de la naturaleza*. Barcelona: ICARIA Antrazit.
- Eco, Humberto
 2005 *La estructura ausente: introducción a la semiótica*. México: DeBols!llo.
- Egon, Becker
 2001 "La transformación ecológico-social: notas para una ecología política sostenible", en: THIEL, Reinold (ed), *Teorías del desarrollo nuevos enfoques y problemas*. Venezuela: Editorial Nueva Sociedad.
- Fontaine, Guillaume
 2004a "Actores y lógicas racionales en los conflictos socio-ambientales: el caso del bloque 10 en Ecuador (Pastaza)", en: Falconi, F, Hercowitz, Muradian (ed.), *Globalización y desarrollo en América Latina*. Quito: FLACSO.
- 2004b "Aportes a una sociología del conflicto socio-ambiental", en: Fontaine, G. (ed.) *Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador, T1. Las reglas del juego*. Quito: FLACSO PETROECUADOR.
- 2005 "Del manejo de conflictos ambientales a la institucionalización de arreglos: el aporte de las teorías de la gobernanza", en: Abreu, Sergio (comp.), *Integración, equidad y desarrollo*. Quito: FLACSO, CAF, Embajada de Brasil, MAE, Odebretch.
- 2007a "Verde y negro: ecologismo y conflictos por petróleo en el Ecuador", Tomado de: *Gobernanza ambiental en América Latina*. Actas del simposio: "Viajes en los territorios de la gobernabilidad: límites e innovaciones en la teoría y la práctica de las políticas ambientales en América Latina". Sevilla: FLACSO CIRAD.
- 2007b "Los conflictos ambientales y los límites de la cooperación institucional", Tomado de: *Yasuní en el siglo XXI: El Estado ecuatoriano y la conservación de la Amazonía*. Quito: Abya Yala, FLACSO, IFEA, CEDA, Petrobras, WCS.
- Funtowicz, Silvio y De Marchi, Bruna
 2000 "Ciencia postnormal, complejidad ambiental y sustentabilidad", en: LEFF, Enrique (coord.) (2000), *La complejidad ambiental*. Madrid: Siglo XXI editores.
- Giddens, Anthony
 2001 *Sociología*, Cuarta Edición. Madrid: Alianza Editorial.
- Giner, Salvador (ed.)
 2006 *Diccionario de sociología*. Madrid: Segunda Edición, Alianza Editorial.

- Gordillo, José
 2004 *Economía petrolera: apuntes con una visión mundial y de la cuenca amazónica*. Quito: Abya Yala.
 2006 “Importancia del petróleo en el Ecuador”, en Fontaine, Guillaume (ed), *Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador: 2. Las reglas del juego*. Quito: FLACSO – Sede Ecuador.
- Gordillo, Ramiro
 2006 “Petróleo y medio ambiente en Ecuador”, en Fontaine, Guillaume (ed), *Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador: 2. Las apuestas*. Quito: FLACSO – Sede Ecuador.
- Gudynas, Eduardo
 2003 “La ecología política de la Integración: reconstrucción de la ciudadanía y regionalismo autónomo”, en: ALIMONDA, Héctor (comp), (2003), *Ecología política naturaleza, sociedad y utopía*. Buenos Aires: CLACSO – FAPERJ – ASDI.
- Husiman, Dennos
 2002 *Diccionario de las mil obras clave del pensamiento*. Madrid: Editorial Tecnos.
- Jijón, Víctor
 2006 “Geopolítica del petróleo, desarrollo e integración en América Latina”, en Fontaine, Guillaume (ed), *Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador: 3. 3. Las ganancias y pérdidas*. Quito: FLACSO – Sede Ecuador.
- Larrea, Carlos
 2006 “Petróleo y estrategias de desarrollo en el Ecuador: 1972 – 2005”, en Fontaine, Guillaume (ed), *Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador: 3. Las ganancias y pérdidas*. Quito: FLACSO – Sede Ecuador.
- Leff, Enrique
 2004 *Racionalidad ambiental: la reapropiación social de la naturaleza*. México: Siglo XXI editores.
 2006 “La ecología política en América Latina un campo en construcción”, en: Alimonda, Héctor (comp.), (2006), *Los tormentos de la materia: aportes para una ecología política Latinoamericana*. Buenos Aires: CLACSO.
 (coord) 2000 *La complejidad ambiental*. Madrid: Siglo XXI editores.
- Lipietz, Alain
 2002 *¿Qué es la ecología política?: la gran transformación del siglo XXI*, Santiago de Chile, IEP – LOM Ediciones.
 2003 “A ecología política: ¿solucao para a crise da instancia política?”, en: ALIMONDA, Héctor (comp), (2003), *Ecología política naturaleza, sociedad y utopía*. Buenos Aires: CLACSO – FAPERJ – ASDI.
- Little, Paul
 1992 *Ecología política del Cuyabeno: el desarrollo no sostenible de la Amazonía*. Quito: ILDIS – Abya Yala.
- Llanes, Henry

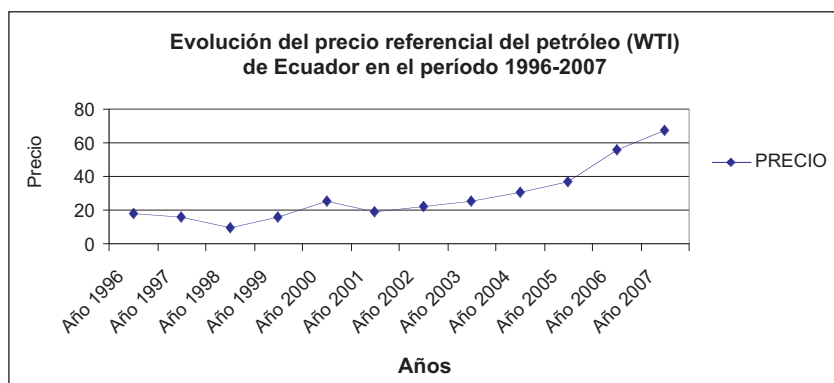
- 2006 OXY Contratos petroleros. *Inequidad en la distribución de la producción*. Quito: Ed. LLanes, Henry.
- Martínez, Joan
- 1999 *Introducción a la economía ecológica*. España: RUBES.
- 2004 *Ecologismo de los pobres: conflictos ambientales y lenguajes de valoración*. Barcelona: ICARIA Antrazit-FLACSO.
- Naranjo, Marco
- 2006 “Auge petrolero y enfermedad holandesa en el Ecuador”, en Fontaine, Guillaume (ed.), *Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador: 3. Las ganancias y pérdidas*. Quito: FLACSO.
- OCP Ecuador
- s.f *El nuevo oleoducto del Ecuador*, Quito, OCP. (mimeo).
- Ortiz, Pablo
- 2006 “Políticas estatales, conflictos socio ambientales y ampliación de las fronteras extractivas”, en Fontaine, Guillaume (ed.), *Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador: Las ganancias y pérdidas*. Quito: FLACSO – Sede Ecuador.
- Reyes, Fernando y Ajamil, César
- 2005 *Petróleo, Amazonía y capital natura*. Quito: Fondo Editorial CCE.
- Salomon, Frank
- 1980 *Los Señores étnicos de Quito en la época de los Incas*, Colección Penderos N°10. Otavalo: IOA.
- Santandreu, Alain, y Gudynas, Eduardo
- 1998 *Ciudadanía en movimiento: participación y conflictos ambientales*, Ed. Trilce. Montevideo: CLAES, FESUR.
- Schmink, Marianne y Wood, Charles
- 1987 “The political ecology of Amazonia” In Peter D. Little and Michael M. Horowitz (eds.), *Lands at risk in the third world: Local level perspectives*. Boulder CO: Westview Press. pp. 38-57.
- Vizcaíno, Mariela
- 2005 *Implicaciones económicas de la construcción del OCP y perspectivas del sector hidrocarburífero*. Disertación Economía. Quito: Facultad de Economía, Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
- Zimmerer, Karl, and THOMAS, Bassett
- 2003 *Political Ecology: an integrative approach to geography and environment-development studies*. London: The Guilford Press.

Referencias

www.union.org.mx/publicaciones/guia/poblacionyambiente/globalizacion.htm
www.dlh.lahora.com.ec/paginas/historia/historia11f.htm
www.asambleaconstituyente.ec/asamblea/index.php?option=com_content&task
www.foei.org/es/publications/corporates/clashes/ecuadorpipeline.html
<http://www.elcomercio.com>
www.accionecologica.org/petroleo1_1.htm
www.rls.org.br/publique/media/OCP_Ecuador.pdf

Anexo 1: Gráficos estadísticos evolución precio del petróleo período 1996 - 2007

Gráfico 1
Evolución del precio del crudo (1996 – 2007)



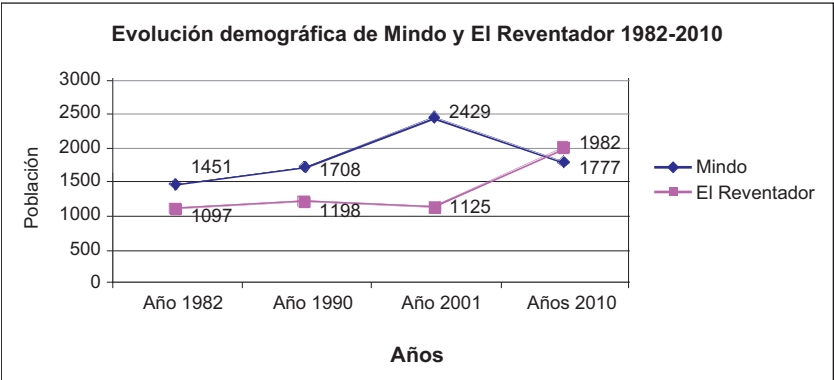
Fuentes: Vizcaino Mariela, Tesis PUCE, (Vizcaino, 2005:36).

Banco Central del Ecuador, Cifras del Sector Petrolero Ecuatoriano, N° 19 – 2008.

Elaboración: propia.

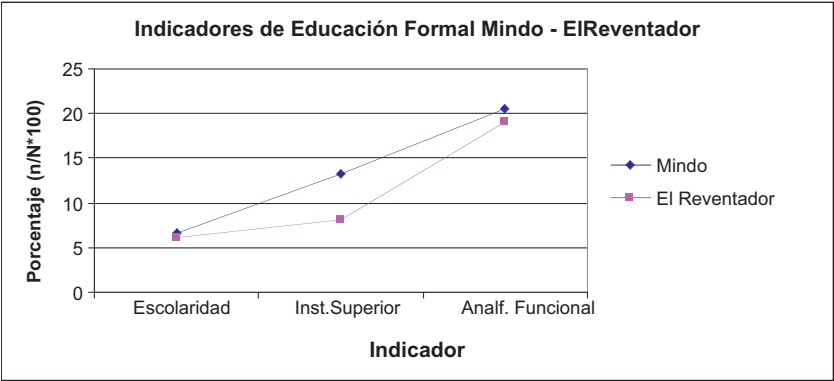
Anexo 2: Gráficos estadísticos comparativos de indicadores socioeconómicos en las poblaciones de estudio Mindo y El Reventador.

Gráfico 2
Evolución demográfica en Mindo y El Reventador



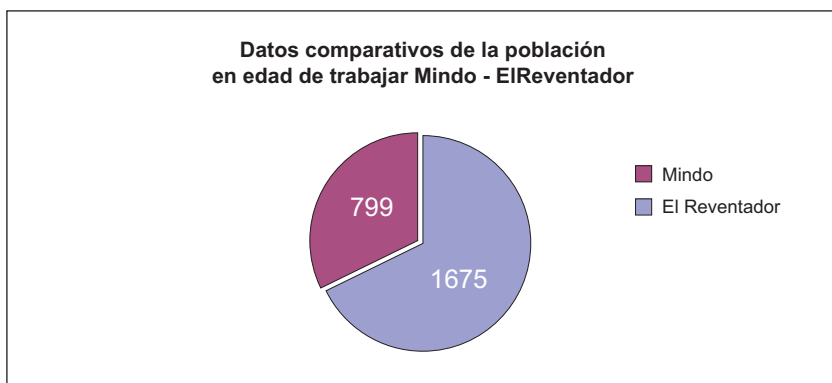
Fuente: SIISE, V 4.5; Elaboración: propia

Gráfico 3
Indicadores comparativosde educación
formal en Mindo y El Reventador



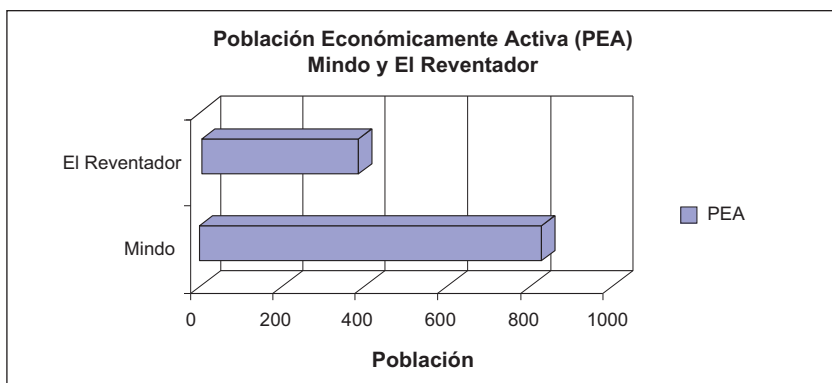
Fuente: SIISE, V 4.5; Elaboración: propia

Gráfico 4
Población en edad de trabajar en Mindo y El Reventador



Fuente: SIISE, V 4.5; Elaboración: propia

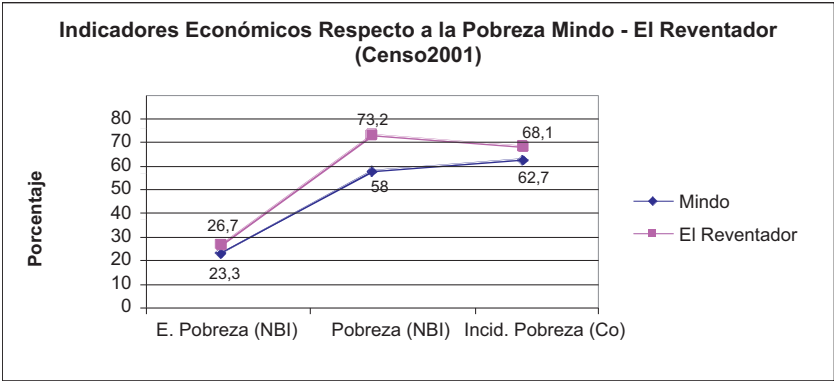
Gráfico 5
Población económicamente activa en Mindo y El Reventador



Fuente: SIISE, V 4.5; Elaboración: propia

Gráfico 6

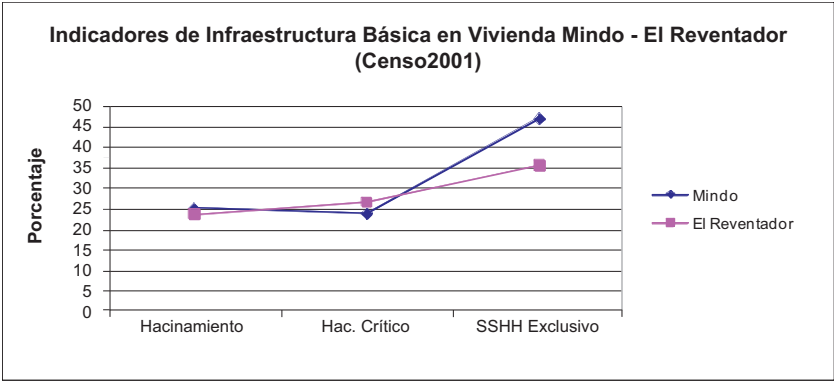
Indicadores económicos de extrema pobreza
y pobreza según las necesidades básicas insatisfechas,
e incidencia de la pobreza según el consumo



Fuente: SIISE, V 4.5; Elaboración: propia

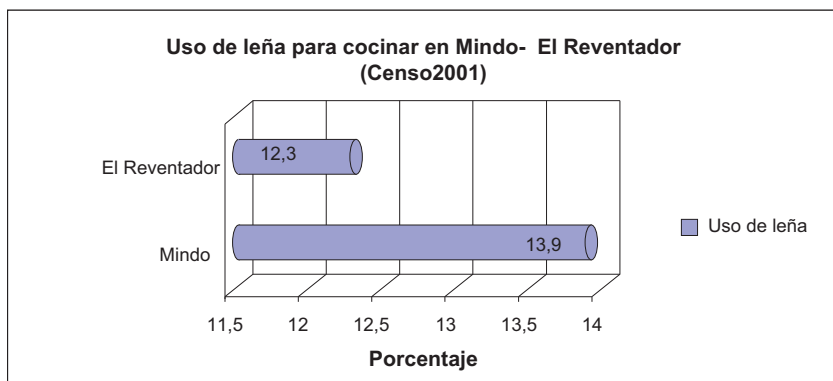
Gráfico 7

Indicadores de infraestructura básica: hacinamiento y vivienda



Fuente: SIISE, V 4.5; Elaboración: propia

Gráfico 8
Indicador ambiental: uso de leña para cocinar



Fuente: SIISE, V 4.5; Elaboración: propia

Anexo 3: Poema Nimmo Bassey (Nigeria)⁷⁸

“Marcas faciales

Las marcas faciales ayudan a la gente

A reconocer los miembros del clan

Escaras ambientales trazadas

Por líneas sísmicas y hacheros ilegales

Ecodevoradores transnacionales

Nos enajenan de nuestra tierra

Ahora somos extraños en nuestro propio suelo

Oleoductos

Llantos ductos desgarradores

Tubos de petróleo

Venas de sangre

Pipas de conflicto

Ductos de muerte

Caños de sangre

Las marcas faciales embellecen a nuestra gente

Nos sirven para atraer y asustar y mostrar

nuestra fortaleza

Las escaras ambientales son máscaras de muerte
Forzadas, ajenas, perversas, odiosas
Marcas esclavas, escaras infernales
Nos enajenan de nuestro suelo
Ahora somos extraños en nuestra propia tierra
Venid, juntaos almas valientes
Alejad de nuestro suelo las serpientes malignas
Que sagrado es nuestro mundo
Unid esas manos a través de los mares
Ceguemos esos ductos con nuestros
Puños colectivos
Esos tubos esperanzas imposibles
De dólares y penas y lágrimas
Esos ductos horadan nuestros corazones
Esos tubos secan nuestras tierras
Esos tubos desangran nuestras almas
Esos tubos nos roban nuestros sueños
Dedicado al pueblo de Mindo, Ecuador”

Autor: Nimmo Bassey, AT Nigeria

Anexo 4: Cronología del conflicto por la construcción del OCP 1999 – 2001 - 20007

Tabla 1

Cronología del conflicto OCP área de influencia⁷⁹

FECHA	ACTOR	EVENTO O DATO RELEVANTE DEL CASO OCP
NOVIEMBRE DE 1999		
29/11/1999	Gobierno de turno (Jamil Mahuad), Ministro Secretario de Economía Xavier Espinoza.	“Petróleo: cinco pasos para modernizar” “Xavier Espinoza, ministro secretario de Economía y presidente del CONAM, definió en cinco partes el plan para modernizar el sector petrolero: construir el OCP, reactivar la producción de Petroecuador, la exploración y explotación del ITT, la exploración suroriental, y la incorporación de capital privado a la refinería La Libertad”. Resalta la búsqueda de apoyo a la iniciativa en organismos de financiación multilaterales, Banco Mundial, y un plazo de año y medio. “Cuando llegué al cargo vi que se contrataría una banca de inversión internacional para cinco proyectos: la construcción del OCP, la reactivación de la producción de los campos petroleros de Petroecuador, la explotación y exploración del Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), la exploración suroriental del país (X ronda Petrolera) y la incorporación de capital privado a la Refinería La Libertad. También estamos estudiando alternativas para la planta de Esmeraldas.” El costo de proceso del proyecto: un mil quinientos millones (\$ 1.5, millones) de dólares.

FEBRERO DEL 2001		
16/02/2001	Gobierno de turno, consorcio OCP, Medio de comunicación	“Viene un segundo boom petrolero”, en este artículo publicado por diario Hoy, se destaca las bondades del nuevo oleoducto a construirse y se anuncia una “revolución tecnológica”, y un “segundo boom petrolero” con implicaciones de empleo enormes (52.000 plazas durante la construcción), atracción de inversiones extranjeras, inversión para incrementar la “producción en los campos” de los miembros del Consorcio”, e indican crea las condiciones para ampliar el potencial petrolero del país.
JUNIO DEL 2001		
26/06/2001	Estado ecuatoriano – OCP	Se inicia el plazo para la construcción del oleoducto.
JULIO DEL 2001		
28/07/2001	Organizaciones ecologistas alemanas – WestLB – OCP	Inician campaña en Alemania para impedir financiamiento por parte del Banco WestLB.
AGOSTO DEL 2001		
7/08/2001	OCP – Alcalde de Nueva Loja	Impide entrada de maquinaria para la construcción de la Estación Amazonas.
8/08/2001	Grupo de mujeres ecologistas – OCP	Se toman las oficinas de OCP para denunciar irregularidades del proceso y exigir la suspensión de la construcción del oleoducto. Son desalojadas de las oficinas del consorcio.
23/08/2001	Grupo de ecologistas – OCP – Izquierda Democrática	Grupo de ecologistas se toman las oficinas de la ID, partido que tiene la mayoría de concejales del Municipio de Quito, para exigir que no otorgue el permiso a la construcción del oleoducto.

28/08/2001	Pobladores de Nueva Loja – OCP – Techint	Moradores y autoridades de Nueva Loja declaran paro en protesta por la construcción de la Estación Amazonas del OCP.
OCTUBRE DEL 2001		
1/10/2001	OCP – Municipios del Napo Consejo Provincial del Napo Fuerzas Vivas	Tensiones (pugnas) entre OCP y Municipios por ofrecimientos que aún no cumple (respecto al argumento de beneficio que traería a la región). Denuncian contratación mayoritaria de colombianos. Lucha por que se mantenga en vigencia las leyes especiales que benefician a la Amazonía. Se plantean como objetivo regional. Ley del Fondo de Ecodesarrollo Regional Amazónico se considera es la más importante Ley que beneficia a la región.
2/10/2001	Municipio de Quito – OCP – Habitantes zonas de cruce del OCP	Manifestaciones pacíficas de los habitantes de zonas de cruce del oleoducto. Municipio del DMQ da luz verde al proyecto; Comisión del Medio Ambiente del Municipio expone informe con el cual se aprueba. Se presenta tres acotaciones: a) no constar los sitios poblados por donde pasará, b) que el Municipio no cuenta con plan de contingencia respecto a derrames, y c) que debe contar con la norma ISO 14000. Identifican tres sectores de riesgo: Nono, Papallacta y Yaruquí. Concejal Andrés Vallejo dice: es una obra importante para el país y no puede ser vista en blanco o negro...
2/10/2001	Grupos ecologistas – Municipio de Quito – OCP	Se producen manifestaciones frente al Municipio de Quito por parte de ecologistas y varias personas para exigir que no se otorgue el permiso de construcción al OCP.

2/10/2001	OCP – Asamblea Provincial del Napo	La Asamblea toma la decisión de una medida de hecho en protesta por la no contratación de personas de la provincia. Como medida de presión plantean bloquear las actividades petroleras en los cantones Arosemena Tola, Archidona, El Chaco y Quijos. Asamblea decide unirse al “Consortio de Municipios Amazónicos” para impedir la eliminación de las pre-asignaciones propuestas en la Ley Fiscal del Gobierno.
4/10/2001	Autoridades de la provincia de Napo y pobladores – OCP	En la provincia de Napo se declara paro en protesta por incumplimiento de ofertas de empleo por parte de OCP.
11/10/2001	Pobladores del noroccidente de Quito – Ecológicos – OCP	Del once al trece de este mes grupos de moradores del noroccidente y ecologistas se toman las maquinarias de OCP en Guarumos para impedir el avance de la construcción hacia el Bosque Protector Mindo Nambillo. Se produce desalojo por parte de la policía.
12/10/2001	Habitantes de Nono – OCP – Ecologistas de Mindo	Mujeres y niños de Nono se movilizan e impiden paso de maquinaria pesada. Se aglutinan en este movimiento otros pobladores, ecologistas y activistas ambientales. Este movimiento es llamado “resistencia activa”.
14/10/2001	Habitantes de Mindo – OCP – Acción Ecológica – Amazon Watch	Se produce el desalojo pacífico de 35 manifestantes en el área de Nono. AE: denuncia afectación a áreas naturales especialmente de Mindo. Denuncia ante el WestLB de Alemania (financiera) que OCP no cuenta con Planes Ambientales. Amazon Watch protesta ante el City Bank en EEUU interesado en financiar la obra.
24/10/2001	Organizaciones ecologistas	Se realiza una jornada internacional en protesta a la construcción en 10 países (no se precisa cuales).

25/10/2001	Ecologistas – OCP – Embajada de Alemania	Manifestaciones frente a la embajada de Alemania para exigir que el WestLB no financie el proyecto a OCP
25/10/2001	Organizaciones ecologistas	Realizan manifestaciones pacíficas en Roma-Italia.
28/10/2001	Pobladores del noroccidente – ecologistas – OCP	Pobladores del noroccidente y ecologistas bloquean nuevamente los trabajos de OCP en Guarumos. Nuevamente se produce el desalojo.
NOVIEMBRE DEL 2001		
5/11/2001	Pobladores del noroccidente – ecologistas – OCP.	Bloquean la vía de entrada a la Estación de Puerto Quito y se toman las oficinas del OCP en San Miguel de los Bancos.
20/11/2001	Pobladores del noroccidente – ecologistas – OCP.	Se toman nuevamente la Estación de Puerto Quito y hay acciones de protesta simultáneas en Alemania.
20/11/2001	Organizaciones ecologistas	Manifestaciones públicas en contra del WestLB en Alemania para pedir suspensión del financiamiento a OCP.
24/11/2001	Pobladores del noroccidente – ecologistas – OCP.	Ocupan el acceso al Bosque Protector Mindo Nambillo para impedir avance de trabajos del OCP.
30/11/2001	Municipios de Quijos, Chaco, Gonzalo Pizarro	Amenazan con paralización para el 14 de Diciembre si OCP no cumple con acuerdos de compensación social. Se espera que se unan a la medida los Alcaldes de Nueva Loja y Cascales.
DICIEMBRE DEL 2001		
2/12/2001	MEM – MA – DINAPA –	Se produce una reunión promovida por el BID – CAF y el Banco Mundial. Representante del CAF cree que los temas de consulta previa y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) ha recibido fuertes críticas por los sectores sociales.

		GBB (WLB): “En el caso del GBB, los bancos multilaterales, que financiaron parte de la obra, pusieron condiciones muy concretas. “Pedimos que la legislación se adapte a los requerimientos de los bancos, para asegurar que las cosas se hagan bien. Por política exigimos entre 60 ó 90 días para que los actores sociales opinen sobre esos estudios ambientales”.
12/12/2001	TECHINT – Trabajadores contratados por Ser-viososa – Militares.	Huelga de trabajadores que están en la construcción de la Estación Amazonas en Nueva Loja. El tema: lo salarial.
13/12/2001	TECHINT – OCP – Tra-bajadores	Paralización termina con el despido de 131 trabajadores. Alcalde de Nueva Loja anuncia con-versaciones con la Empresa OCP pa-ra los próximos con la finalidad de tra-tar sobre las “obras de compensación social”.
ENERO DEL 2002		
3/01/2002	Gobierno Local de Nue-val Loja – OCP – Techint	Firman contratos por más de \$ 600.000 para obras de compensa-ción social en Nueva Loja. Establecen un listado de las obras a ejecutarse.
7/01/2002	Acción Ecológica – OCP – TECHINT	Instalan un campamento en el Bos-que Protector Mindo – Nambillo para impedir el avance de la construcción del OCP. Los manifestantes se encadenan a los árboles y se preparan pa-ra instalar viviendas sobre los árboles como medida de presión.
7/01/2002	TECHINT – Trabajado-res de línea	Se normaliza la situación laboral luego de la paralización y despido de 131 obreros de la construcción. Los obre-ros que quedaron afirman haber me-jorado la situación.

16/01/2002	OCP – TECHINT – Junta parroquial de nono	Se da una medida de hecho, bloqueo de la construcción, el departamento de relaciones comunitarias (Ivón Fabara) recibe orden de no negociar con Junta Parroquial de Nono hasta no que no levanten medida de hecho. La J.P pide un presupuesto aproximado de \$2 millones de dólares. El presupuesto de la empresa es de 300.000 dólares para esa zona. Esperan intervención del Gobierno.
19/01/2002	FMI – OCP – Gobierno	FMI revisa las cuentas petroleras de Ecuador, requisito necesario para negociar crédito de contingencia de 300 millones de dólares. Se reúnen con directivos del consorcio OCP para conocer avance de la obra. “El Fondo tiene interés en conocer las cuantías de inversión que el consorcio internacional dejará en el país para la construcción de la nueva tubería, que en unos dos años permitiría duplicar la capacidad de exportación de crudo de Ecuador”.
20/01/2002	Pobladores de Nono – OCP	Declaran paro en protesta por los incumplimientos de oferta del consorcio OCP para el desarrollo del pueblo.
FEBRERO DEL 2002		
7/02/2002	Moradores y autoridades del Cantón Gonzalo Pizarro –OCP	Se declaran en paro por las obras de OCP, el documento periodístico no proporciona más información sobre el motivo de la medida de hecho.
18/02/2002	WestLB – Ecologistas Alemanes – Partido Ministra del Medio Ambiente Alemán Barbel Hohn	En Alemania se libra una “batalla” aparte entre los financistas del OCP y los ecologistas alemanes y ecuatorianos. Presionan al WestLB para que no financie la obra, lo cual tiene “un componente político”. El 43% del Banco pertenece al Estado Federal de Renania donde el gobierno es una coalición de social demócratas y verdes.

		Los ecologistas consiguen el apoyo de la Ministra del Ambiente Barbel Hohn. Aunque el Parlamento no puede parar la construcción del oleoducto se reúne para tratar recomendaciones ambientales al financista del proyecto.
20/02/2002	Cascales – Nueva Loja – OCP (Alcalde de Nueva Loja Máximo Abad y de Cascales Edmundo Vargas)	Inician un paro en contra de la Empresa OCP. Las negociaciones entran en un punto muerto. El Alcalde de Nueva Loja pide tres obras más de las pactadas. El Alcalde cuestiona la validez del convenio con la empresa argumenta fue pactada por cinco concejales, violentando la Ley ya que dice debe oficializar el Alcalde y el Procurador Síndico. Se prevé la paralización de Orellana para el día 26 de Febrero.
20/02/2002	Alcalde de Nueva Loja – Asamblea Popular	Se radicaliza el paro. Exigen tres obras prioritarias: alcantarillado para 18 barrios, asfaltado de 15 kilómetros de calles de Nueva Loja, y construcción del Mercado Municipal. Rechazan actitud prepotente de Techint.
21/02/2002	Autoridades de Sucumbios (Alcalde – Prefecto – Diputado)	Se confrontan el Alcalde de Nueva Loja y el Prefecto Provincial con acusaciones de corrupción. El Diputado Azuero juega un rol que parece favorecer los términos acordados para la construcción del oleoducto en esa provincia. Se demarca los que están a favor y contra de la construcción.
21/02/2002	Greenpeace – OCP	La delegación de Greenpeace que visitó Ecuador hace declaraciones en Alemania denunciando impactos sociales y ambientales de la obra. Exige a WestLB suspenda financiamiento.

25/02/2002	Autoridades, Asamblea Popular, Población, Prefecto de Orellana (Daniel Lozada), Empresas OCP Tehcint, Militares	Militares de la Cuarta División Amazonas inician acciones para controlar el paro en Sucumbíos y en Orellana. La estrategia bloqueo de vías y toma de pozos petroleros. Los militares no pueden controlar los bloqueos.
25/02/2002	Ministerio de Energía y Minas – actores del paro biprovincial – Presidente de la República.	Proporciona información sobre baja en la producción petrolera. Aproximadamente 57.000 barriles diarios deja de producir Petroecuador (14:58). Manifestantes de las dos provincias se toman 60 pozos. Exigen al Gobierno y a la Empresa OCP recursos para obras de infraestructura en la provincia. Presidente del Ecuador decreta estado de emergencia para Sucumbíos. Se mantiene el bloqueo.
25/02/2002	Presidente Gustavo Noboa – autoridades y Asamblea de Sucumbíos y Orellana.	Afirma que consorcio OCP es chantajado. Desacredita las demandas del Alcalde Abad. En Mindo de igual manera se mantienen las medidas de protesta.
26/02/2002	Actores del paro en las provincias de Sucumbíos y Orellana.	Se intensifica la paralización. Se producen enfrentamientos violentos con los militares en el cantón Joya de los Sachas. Se incrementa las tensiones entre el Presidente y el Alcalde. Pobladores de Lago Agrio incrementan demanda de recursos a 10 millones de dólares. Contingente militar resguarda campamento de OCP. El paro concluye en día 27 con el acuerdo de iniciar diálogos.
MARZO DEL 2002		
6/03/2002	Ministerio del Ambiente – OCP	Se retira temporalmente la licencia ambiental al consorcio OCP por los trabajos realizados en la zona de Guarumos; esta medida se extiende hasta que el consorcio cumpla con las obras de remediación ambiental.

21/03/2002	OCP	Se reanudan los trabajos en Mindo. OCP trabaja en el restablecimiento de la licencia ambiental.
25/03/2002	Activistas ecológicos – OCP – Policía	El campamento de Guarumos de los activistas es desalojado violentamente. Cinco pobladores de Mindo y catorce extranjeros son encarcelados. Los extranjeros reciben orden de deportación.
27/03/2002	Intendente de Policía – Activistas extranjeros	Ordena la deportación de 14 activistas extranjeros apresados por intentar detener la construcción del oleoducto en el área de Mindo; los activistas pertenecen a Francia, Italia, Irlanda, Suiza, Alemania y Estados Unidos. Cinco activistas ecuatorianos son puestos a orden judicial. Activistas cuentan con apoyo de Greenpeace que solicitó al WestLB detenga operación.
27/03/2002	Activistas	Manifestaciones en Quito y Mindo en protesta por la prisión de ecologistas y deportación de extranjeros. La población de Mindo captura dos camiones de OCP.
28/03/2002	Activistas	Es deportado el primer grupo de activistas (colombianos, italianos y estadounidenses). En las próximas horas se deporta al siguiente grupo.
ABRIL DEL 2002		
1/04/2002	Activistas – Alcalde del DMQ	Alcalde de Quito concede habeas corpus para los activistas detenidos.
1/04/2002	Ministra del Ambiente (Lourdes Luque)	Espera que el consorcio OCP cumpla la reparación del daño ambiental provocado en Guarumos. Luque afirma que OCP cumple con los requisitos impuestos en el Plan de Manejo Ambiental.

5/04/2002	Consortio OCP – Techint	El oleoducto cruza el río Papallacta, se enfatiza en el aspecto técnico de la obra para no afectar la laguna de Papallacta y el abastecimiento de agua a Quito. Estiman un avance del 30% de la construcción del nuevo oleoducto. Hasta este punto el consorcio dice haber empleado a 5.359 personas.
17/04/2002	OCP – Acción Ecológica	Se produce la muerte accidental de un trabajador, Acción Ecológica acusa a OCP por imprevisión.
29/04/2002	Actores provincias Napo – Sucumbíos y Orellana	En estas provincias se produce conflictos internos entre los sectores que apoyan y los que tienen una posición contraria a la construcción del OCP. Los enfrentamientos entre distintas autoridades y sectores se incrementan. El Alcalde Máximo Abad es apoyado por el Prefecto; reclama la restitución de su autoridad como Alcalde. No hay un acuerdo definitivo con el consorcio OCP.
29/04/2002	Actores del Paro en Papallacta.	Se presenta un conflicto en Papallacta por las obras realizadas para la construcción del OCP. Emerge otro conflicto por el uso de las minas de Jomanco para el mejoramiento de la vía. Se genera una disputa interna en las Juntas Parroquiales del Cantón y otra organización paralela que ha emergido para captar la intermediación con OCP.
30/04/2002	Obreros de la Contratista Techint, OCP, Concejal de Quijos, Acción Ecológica.	Paralización de 400 obreros por mejoras salariales. Acción Ecológica denuncia malos tratos a trabajadores quienes cumplen jornadas de 12 horas con un pago mensual de \$200 y mal trato de los capataces argentinos y chilenos.

MAYO DEL 2002		
6/05/2002	Red Amazónica – OCP – Acción Ecológica	Denuncian invasiones, maltratos, torturas y amenazas contra campesinos por parte de un contingente de 80 hombres uniformados y armados que operan en la provincia de Sucumbíos.
6/05/2002	Acción Ecológica – OCP - Techint	Denuncian presencia de 80 hombres armados en Lago Agrio para amenazar a quienes se oponen a la construcción del oleoducto: “irrumper en las fincas de quienes no han llegado a acuerdos con el consorcio y se oponen a las obras, los toman prisioneros, los maltratan, torturan y amenazan de muerte...” dice Acción Ecológica.
6/05/2002	Techint – Obreros L a contratista	Techint anuncia el despido de 100 trabajadores del tramo Baeza – Papallacta.
7/05/2002	Concejal Municipio de Quijos - OCP	El Concejal Hugo Jati denuncia que no existe un control ambiental de las actividades de construcción del oleoducto. El consorcio desmiente esta afirmación y dice que el Ministerio del Ambiente hace constantes monitoreos.
7/05/2002	Red de Defensa de la Amazonía – OCP – Techint	Denuncian maltrato de Techint – OCP: Manuel López, Coordinador de la Red denuncia maltrato, amenazas y tortura a propietarios de fincas con las que no se llegó a acuerdo para el paso del oleoducto.
9/05/2002	OCP – Acción Ecológica – Red Amazónica	Repsol YPF denuncia que es una estrategia de Acción Ecológica que se opone a la construcción desde un inicio. Solicitan presentar pruebas a la organización ambientalista.
11/05/2002	Activistas – Pobladores de Mindo – OCP	Activistas y pobladores de Mindo retoman campamento de Guarumos. El día 12 son desolazados y puestos en prisión.

13/05/2002	Acción por la Vida, Acción Ecológica, OCP	Organizaciones ambientalistas presentan solicitud de habeas corpus para activistas detenidos. Acción por la Vida plantea iniciar demanda por violación al derecho de las personas y por violación a la propiedad privada en el cerro Guarumos donde fueron desalojados los activistas. Este mismo día son puestos en libertad.
13/05/2002	Gobierno de Gustavo Noboa, Acción Ecológica, Propietarios de tierras en la zona de Mindo – Nambillo – Guarumos, OCP	Plantea expropiar terrenos de ecologistas por donde esta el trazado del oleoducto considerando que es una obra prioritaria para el Estado. Acción Ecológica denuncia represión y afectación a una de las reservas más importantes del mundo. Dicen contar con el apoyo de Greenpeace y otras organizaciones internacionales.
13/05/2002	Acción Ecológica – Ambientalistas de Mindo	Plantean como estrategia la compra de terrenos por donde pasará el oleoducto. Afirman haber comprado 1.700 has en Mindo para detener el avance de la obra por ese sitio.
13/05/2002	Policía Nacional – Activistas	Desalojan a ocho personas que se tomaron 884 Ha de bosque primario en el área de Guarumos. Es en este sitio donde surge el núcleo del conflicto entre propietarios y OCP. César Fiallos es uno de los propietarios dice que tienen el 50% de los derechos y acciones del bosque de 1769 Has.
15/05/2002	OCP – Activistas Mindo	El consorcio ratifica que no cambiará el trazado de la ruta. Se abre una disputa por la adquisición de tierras por parte de ecologistas y el trazado de la ruta. OCP dice que la ruta pasa a 200 metros de los terrenos de los ecologistas.

15/05/2002	OCP – Activistas	<p>Refiriéndose al problema de imposibilidad de negociación menciona la representante de R.C de OCP: “Se expropia o se impone la servidumbre legal únicamente a favor de (la estatal de petróleo) Petroecuador”, y ésta cede el derecho a favor de OCP o de cualquier compañía privada que lo necesite, explicó.</p> <p>“Hemos pedido imponer la servidumbre legal de tránsito a 135 propietarios”, pero aclara que se ha llegado a un acuerdo con la mayoría y que quedan 42 por negociar, varios de ellos en la provincia amazónica de Sucumbios.</p>
15/05/2002	Activistas ecológicos de Italia – Banco Nazionale de Lavoro.	Manifiestan en Roma contra el Banco Nazionale de Lavoro por financiamiento a OCP.
29/05/2002	Activistas ecológicos de Italia – ENI Italia	Manifestaciones en Roma en la Asamblea de Accionistas de la ENI por su participación en el consorcio OCP y los campos petroleros que opera en la Amazonía ecuatoriana.
JUNIO DEL 2002		
6/06/2002	Policía – Acción Ecológica – Campesinos Sucumbíos	Acción Ecológica denuncia abusos por desalojo de campesinos que se oponen a la construcción del oleoducto. Informan de cuatro heridos, once detenidos y 25 propietarios de fincas afectados por los trabajos de instalación del oleoducto.
6/06/2002	Acción Ecológica – OCP	Acción Ecológica emite el siguiente boletín de prensa: “muchos campesinos de la Amazonía se han abstenido de firmar los derechos de vía para el paso del oleoducto, y otros que sí lo ha hecho han denunciado las pobres indemnizaciones entregadas por el consorcio internacional”.

		Asimismo, señala que la construcción del oleoducto ha supuesto el taponamiento de vertientes y arroyos, lo que ha causado un gran perjuicio a los habitantes de la zona. Los campesinos afectados, propietarios de más de cien fincas, mantienen varios “campamentos” de protesta a lo largo de la ruta que por la Amazonía debe seguir el nuevo oleoducto.
12/06/2002	Activistas Italianos – OCP	Visita el Ecuador la Carovana Internazionale de Solidarità de Italia. La misión observa las zonas de construcción del oleoducto. Denuncia impactos sociales y ambientales.
14/06/2002	Acción Ecológica – OCP	Grupo de activistas italianos del Partido Verde llega al país para recoger pruebas en contra del consorcio OCP para presentar al Banco Nazionale del Lavoro para que suspenda la financiación del oleoducto. Guiseppe de Marzo, coordinador de la “Caravana” italiana tiene el objetivo de pedir que las empresas italianas (AGIP) revisen sus políticas.
19/06/2002	Activistas italianos – ENI AGIP – OCP	Quince activistas italianos intentan tomarse, pacíficamente, las oficinas de la empresa italiana Ente Nazionale D’ Idrocarburi (ENI). Entre los activistas se halla la Diputada Italiana Luana Zannella y la Presidenta del Partido Verde italiano Grazia Francescato. Se entrevistaron con habitantes del área de Mindo.
20/06/2002	Activistas ecológicos de Italia	Los miembros de Carovana Internazionale de Solidarità de Italia se toman la oficina de ENI en Quito para exigir su salida del consorcio OCP.

JULIO DEL 2002		
17/07/2002	Activista EEUU – Policía de Migración - OCP	La policía detiene a ocho activistas que protestaban en contra de la construcción del OCP. Entre ellas a Butterfly Hill activista norteamericana que llegó al país para observar los impactos de la construcción del oleoducto. En la misma nota de prensa se publica el ofrecimiento de OCP: empleo durante construcción a 50.000 personas, transportación de 518.000 barriles de petróleo / día según fuentes del Gobierno. Julia Butterfly Hilla es deportada.
AGOSTO DEL 2002		
14/08/2002	Consorcio OCP	Anuncia que el bombeo de crudo será menor a 190.000 barriles/día. Caen las expectativas de incremento en la producción – transporte de petróleo por el nuevo oleoducto. Los socios de OCP asumen cuotas de transportación. Se informa el dato de que son 1.800 los propietarios de tierras por donde pasa el oleoducto.
14/08/2002	Consorcio OCP	Entrega fondos para la implementación de infraestructura en Esmeraldas. En este cantón se negoció el paso por un monto aproximado de \$ 6 millones de dólares.
28/08/2002	Empresas Petroleras – consorcio OCP – Estado	Las empresas solicitan la devolución del IVA por un valor de \$ 180 millones de dólares. El Presidente Ejecutivo de OCP dice que la consecuencia de esto es la no elevación de las inversiones petroleras para incrementar la producción. Afirma que la falta de inversión no permitirá incrementar la producción.

SEPTIEMBRE DEL 2002		
30/09/2002	Gobierno de Renania (NRW) – WestLB – Activistas – OCP	El Gobierno de Renania, accionista del WestLB revisa préstamo concedido a OCP. Plantea tomar posición al respecto. La expectativa de los grupos ambientalistas es que el WestLB retire el apoyo financiero al consorcio OCP. El argumento presentado es que OCP no respeta los estándares mundiales ambientales y que constituye una amenaza para la forma de vida indígena. Los ecologistas alemanes -en coordinación con acción ecológica- exigen cancelar el préstamo. Se involucra en la discusión al Banco Mundial.
OCTUBRE DEL 2002		
26/10/2002	Gobierno Local de Puerto Quito – OCP – Techint	Paro en contra de OCP y Techint se agudiza en Puerto Quito, a más del acuerdo de once puntos al que llegaron con el GL de Puerto Quito, piden una ampliación del trato para ensanchar la carretera por un valor de 5 millones de dólares.
NOVIEMBRE DEL 2002		
6/11/2002	Consortio OCP	Erupciona el volcán El Reventador – Se teme afectación de la infraestructura del oleoducto – el consorcio anuncia un “avance global” de la obra del 70%. Se soluciona el problema de Puerto Quito sin indicar si se cambió el acuerdo previo de once puntos.
MARZO DEL 2003		
28/03/2003	Consortio OCP	Se confirma el avance global de la obra en un 93%, indican que pese a la oposición de los ambientalistas el oleoducto entrará en funcionamiento y con el menor impacto ambiental.

MAYO DEL 2003		
19/05/2003	Empresas del consorcio OCP	Se incrementa la producción petrolera de las empresas socias del consorcio OCP; la meta establecida para el inicio de las operaciones del nuevo oleoducto era 220 mil barriles diarios; se prevé un incremento a 203 mil b/d. Esta problemática del volumen de transporte de crudos en operación se articula con el debate de la estatal petrolera de terminar con la mezcla de distintos tipos de crudo para mejorar la calidad del crudo ecuatoriano e incrementar su valor en el mercado internacional.
28/05/2003	Petroecuador – OCP	OCP llevará el petróleo del Estado. El nuevo Presidente Ejecutivo de OCP confirma que sin el petróleo del Estado OCP comenzará a bombear 179 mil b/d, con la participación del Estado se incrementa a 220 mil b/d
AGOSTO DEL 2003		
21/08/2003	Consortio OCP	Confirma que la construcción del nuevo oleoducto ha sido concluida. Indican que durante la construcción por pago de aranceles generó un beneficio al fisco por \$ 200 millones de dólares. Crea un Fondo Ecológico fiduciario por 16 millones de dólares para programas de conservación. El ducto será manejado por las empresas por un lapso de 20 años, luego será trasladado al Estado.
SEPTIEMBRE DEL 2003		
5/09/2003	Consortio OCP	Se inician las pruebas de operación. La extensión final 503 kmts. Capacidad de transporte 500 mil b/d. La inversión superó los \$ 1.400 millones de dólares.

OCTUBRE DEL 2003		
22/10/2003	Consortio OCP – Petroecuador – Estado	Se espera la decisión del Gobierno para que se autorice la operación del oleoducto. Inician las discusiones para la transportación y venta del crudo del Estado. Analizan informes técnicos pero Petroecuador no da un pronunciamiento. La Gerencia de Comercio Internacional de Petroecuador debe definir el volumen de exportación y las características del crudo. Es un período de espera y loby. Los conflictos se reducen en los 503 kms del oleoducto.
NOVIEMBRE DEL 2003		
9/11/2003	Estado ecuatoriano – Consortio OCP	Hay intensas negociaciones entre las empresas del consorcio OCP y los representantes del Estado para negociar la participación en esta nueva etapa de incremento, transporte y venta de petróleo. En tres puntos resumieron que los términos económicos de participación de la producción de petróleo entre el Estado y la privada “no son económicamente atractivos a la inversión privada esperada por el Gobierno”.
11/11/2003	Estado ecuatoriano – consorcio OCP	Gobierno de Lucio Gutiérrez otorga permiso para funcionamiento del OCP.
13/11/2003	OCP	Inicia operaciones bombeando 180 mil b/d
26/11/2003	Empresas Petroleras Privadas	Se pronostica un fortalecimiento de este sector en varios países entre ellos Ecuador. El 40% del presupuesto del Estado depende de este recurso.

AGOSTO DEL 2004		
19/08/2004	Empresas Petroleras – consorcio OCP	Se generan tensiones por el problema con Occidental y por el problema de la devolución del IVA. Las empresas del consorcio OCP se ponen en alerta por esta problemática. Presionan al régimen (Gutiérrez) por mayor seguridad jurídica.
NOVIEMBRE DEL 2004		
11/11/2004	OCP – Habitantes Mindo	Se cumple un año de operación del oleoducto. Desde el 2003 OCP afronta un juicio interpuesto por algunos habitantes de Mindo por el daño provocado por la construcción del oleoducto en ese sector. Se dan datos sobre adquisiciones del derecho de vía: 1.804 propietarios, costo de negociaciones \$ 30 millones de dólares.
SEPTIEMBRE DEL 2005		
14/09/2005	Andes Petroleum – ENCANA – OCP	“Las petroleras chinas están peinando Africa, el Oriente Medio, y Sudamérica en busca de nuevas concesiones en hidrocarburos. Aunque son novatos en este rentable negocio, se están moviendo con agilidad. Acaban de cerrar un contrato con la corporación canadiense ENCANA en Ecuador...” que vende todas sus participaciones en Ecuador, lo cual incluye a la participación en OCP.
19/09/2005	Andes Petroleum	Inicia actividad y amplía los contactos en el país.
FEBRERO DEL 2006		
22/02/2006	Manifestantes de Napo y Pastaza – OCP – Estado	500 manifestantes de Napo y Pastaza se toman la estación “Sardinas” de OCP cercana a Borja. Esta medida se da en el marco de un paro convocado por Napo para que el Gobierno (Alfredo

		<p>Palacios) les asigne recursos. Se suspende la operación de transporte por el OCP y los directivos demandan aplicar la Ley. En lo que va de la paralización se ha dejado de transportar 250 mil barriles con una pérdida de 11 millones de dólares según información de OCP.</p> <p>22:00 Se decreta el Estado de Emergencia en Napo.</p>
23/02/2006	OCP – Manifestantes Napo y Pastaza.	Se evalúan los daños, estiman no poder volver a operar hasta el día domingo, esto, según los daños provocados a la estación de bombeo. En esta manifestación son retenidos los empleados de OCP en la estación Sardinas. Logran escapar.
24/02/2006	OCP – Manifestantes Napo y Pastaza.	Evalúan afectación a las instalaciones. En la manifestación hubo amenazas de colocación de explosivos en las instalaciones de la Estación Sardinas. La media fue usada como medio de presión al Gobierno.
DICIEMBRE DEL 2006		
05/12/2006	Petroecuador – consorcio OCP	Consiguen obtener una tarifa reducida para el transporte por el oleoducto de la producción del bloque 15, aún menor de la que pagaba OXI.
05/12/2006	Moradores de Buena Vista – Estación Amazonas OCP	Pobladores del Recinto Buena Vista presentan un reclamo ante la Defensoría del Pueblo en Lago Agrio. Reclaman extensión de la zona de seguridad de la estación aduciendo riesgos. Piden se les compre sus terrenos para reubicarse a otro sitio. Piden también se revoque la licencia ambiental. Los abogados de OCP indican que esta en regla su operación y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental conforme a las leyes ecuatorianas.

FEBRERO DEL 2007		
7/02/2007	OCP – Propietarios de tierras por donde pasa el derecho de vía Nueva Loja – El Reventador.	Informan de la existencia de dos juicios por daños ambientales. Son 10 campesinos de la Red Amazónica por la Vida que están litigando contra OCP por daños producidos durante la construcción del oleoducto, reclaman indemnizaciones. Otros 81 campesinos reclaman por daños ambientales, y es un litigio que esta en la etapa de prueba.
4/04/2007	Percepción opinión pública	“Ecuador en el 2002, en cambio, vivía un ambiente de tensión, con voces a favor y en contra de la concesión del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) a la empresa privada. “Esa obra fue una buena señal para atraer la inversión al país, que fue el caso de Petrobras”, consideró el presidente de la Asociación de la Industria Hidrocarbúfera (AIHE), René Ortiz”
23/04/2007	Percepción opinión pública	“Cuatro décadas después, la historia parece repetirse. La producción de crudo aumentó a raíz de la construcción del OCP y los precios del petróleo llegaron hasta los 50 dólares por barril. Existe un nuevo ‘boom’ petrolero que deja recursos para concluir proyectos atrasados, como Mazar , Sopladora, la modernización de la refinería, etc”
30/04/2007	Percepción opinión pública	“Entre las experiencias positivas del instituto están OCP, que trabaja en programas para mejorar la educación, salud y productividad, con énfasis en la niñez, en las parroquias donde tiene influencia el oleoducto (Sucumbíos, Napo, Pichincha y Esmeraldas). En cinco años ha realizado 570 acciones de responsabilidad, con una inversión de USD 30 millones.”

6/06/2007	Actores del turismo y la conservación en Mindo – OCP	<p>“El bosque protector Mindo-Nambillo sí debe recibir la categoría de zona intangible. Esa es la afirmación de Tatiana Calderón, consultora de turismo sostenible y de ambiente (...) Lo amenazan el riesgo de un derrame de petróleo del sistema OCP que cruza por la zona. A eso se suman las actividades extractivas de madera, invasiones y un turismo desmedido (...). Calderón recuerda que, en ese entonces, el lugar estuvo manejado por la Corporación Comunitaria Ecológica Amigos de la Naturaleza de Mindo. “El bosque tenía un buen control, se hacían inspecciones constantes y nada de actividades extractivas”. Sin embargo, según Calderón, todo cambió hace siete años. “Cuando el cuidado del bosque pasó al Ministerio del Ambiente. Allí entró el tendido del OCP y las actividades extractivas”.</p>
-----------	--	---

Procesamiento y elaboración propia.

Anexo 5: Lista de entrevistados (códigos)

Parroquia de Mindo:

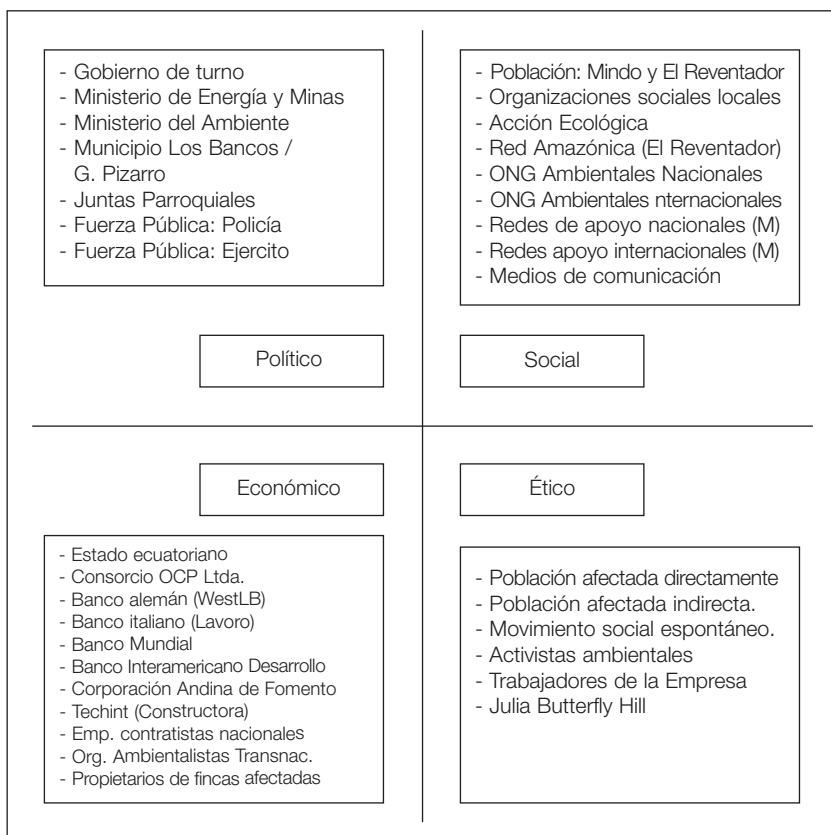
- a) Entrevista código: 1
- b) Entrevista código: 2
- c) Entrevista código: 3
- d) Entrevista código: 4
- e) Entrevista código: 5
- f) Entrevista código: 6
- g) Entrevista código: 7

Parroquia El Reventador:

- h) Entrevista código: 8
- i) Entrevista código: 9
- j) Entrevista código: 10
- k) Entrevista código: 11
- l) Entrevista código: 12
- m) Entrevista código: 13
- n) Entrevista código: 14

Anexo 6: Actores sociales ubicados en las cuatro dimensiones planteadas por la sociología de conflicto

Esquema 1
Dimensiones de la sociología del
conflicto en relación con los actores principales



Notas

78 Fuente: www.foei.org/es/publications/corporates/clashes/ecuadorpipeline.html (revisado el 26/11/08)

79 Fuentes: http://www.elcomercio.com/www.accionecologica.org/petroleo1_1.htm/
www.rls.org.br/publique/media/OCP_Ecuador.pdf, Diario Hoy.